

**Camacho, Juan Francisco, 1817-1896**

**Reformas jurídicas en el Ministerio de Hacienda /  
dictadas por Juan F. Camacho.**

Madrid : Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1886.

Signatura: 137583

La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

<http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html>

Aviso legal

*Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de lucro siempre y cuando se cite la fuente*



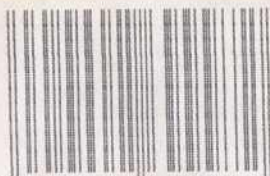
83

1L

1542







2 000002 699972

~~BS 2722~~

137 583



REFORMAS JURÍDICAS  
DE HACIENDA





Juan Francisco Zamacho





# REFORMAS JURÍDICAS

EN EL

## MINISTERIO DE HACIENDA

DICTADAS POR EL EXCMO. SEÑOR

D. JUAN F. CAMACHO



MADRID

IMPRESA Y FUNDICIÓN DE M. TELLO

IMPRESOR DE CÁMARA DE S. M.

Isabel la Católica, 23

1886





AL EXCMO. SEÑOR

D. JUAN FRANCISCO CAMACHO

*En testimonio de respeto, gratitud  
y cariño*

*El Cuerpo de Abogados del Estado.*





## D. JUAN FRANCISCO CAMACHO.

Al escribir al frente de esta colección de disposiciones legales el ilustre nombre del excelentísimo Sr. D. Juan Francisco Camacho, desea únicamente el Cuerpo de Abogados del Estado ofrecer un testimonio de afecto y de gratitud á su distinguido fundador y reorganizador, que llevó al servicio jurídico de la Administración importantes reformas, favorables á un tiempo mismo á los intereses públicos, á la justicia económica y á la mejor y más eficaz defensa de los derechos del Estado en juicio.

Queda, pues, encerrado el objeto dentro de estrechos límites, que no se podrían, por otra parte, traspasar con juicios que, aun siendo favorables, no dejarían de ser irrespetuosos, por quienes se hallan colocados en condiciones de subordinación hácia su Jefe. Sin embargo, opinamos que ha de sernos lícito, y se halla además exigido por la naturaleza misma de aquel objeto y del fin á que aspiramos, exponer, siquiera sea á la ligera, la significación é importancia de las disposiciones contenidas en este pequeño tomo.



Y como las reformas jurídicas que se deben á la fecunda iniciativa del Sr. Camacho ocupan el lugar oportuno en su vasto plan económico y se relacionan con él íntimamente, será preciso indicar los principios fundamentales de la política económica que sustenta, y trazar antes á grandes rasgos, para penetrar el espíritu de ésta, la fisonomía del hacendista y del administrador que la proclama y la realiza.

El Sr. Camacho es uno de los hombres públicos que han alcanzado en nuestros tiempos una individualidad más acentuada y una personalidad más vigorosa y saliente, resplandeciendo entre todas las cualidades que le adornan la firmeza de su voluntad y el sentido práctico de que se halla dotado, no obstante que á veces sorprende por la aparente audacia de sus concepciones financieras.

Es indudable que la energía del carácter alcanza un inmenso valor en sociedades aquejadas por muchos males, nacidos de la corrupción y sostenidos por débiles condescendencias. Cuando se encuentra viciada la vida pública, erigido el interés particular en única norma de conducta, olvidada la utilidad común, el sistema representativo falseado, la Administración perturbada y la justicia económica oscurecida, requiérese entonces, para oponerse á la corriente general que se determina, el supremo esfuerzo de un ánimo varonil, antes dispuesto á ser arrollado por ella y gloriosamente vencido que á ceder y transigir, temeroso de su fuerza ó enervado por la desconfianza de un resultado eficaz.

D. Juan Francisco Camacho se distingue por la resolución en atacar esos vicios, sin que las resistencias hagan vacilar su propósito ni produzcan desfallecimiento alguno en su ánimo. En presencia del oleaje embravecido de las pasiones, ó en las revueltas de los intereses particulares que se sienten heridos y se agitan, ó en la gritería confusa que levantan, su espíritu se siente alentado también, y lejos de retroceder camina avanzando, sin tolerancias que perjudiquen al interés general ó vulneren el principio de la justicia.

Aparte de esta cualidad, que tanto avalora la personalidad de D. Juan Francisco Camacho, acredita un sentido eminentemente práctico. Se ha dicho repetidamente por sus adversarios que el Sr. Camacho es un peligroso innovador y un atrevido reformista; pero si se examina con cuidado y parcialmente toda su obra, se verá pronto el sello que caracteriza sus disposiciones. El hombre de Estado requiere una idea científica que le sirva de norte y luz en su camino para no perderse en las oscuridades del empirismo; pero al mismo tiempo necesita conocimiento de la realidad para no caer, por un deslumbramiento filosófico, en la vaga abstracción, ineficaz para la vida.

Y si en el conjunto de las reformas debidas al Sr. Camacho acaso el filósofo y el científico pueden echar de menos alguna vez aquel principio de riguroso sistema que exige la belleza de una construcción, no puede menos el hombre de gobierno de ver reflejadas las necesidades inmediatas de la Administración, apreciadas por ésta en

su labor continua y confirmadas por sus tradiciones. La Administración, en su diario funcionamiento, siente los vicios de su organización y echa de ver los resortes gastados ó mal distribuídos; conoce la fuerza que impulsa su mecanismo y los defectos, por consiguiente, de las leyes, que son sus motores; está de continuo en presencia de las realidades, dentro de las cuales, siendo esencialmente activa, ha de moverse, y estudia la trama y la complejidad de la vida, determinada por una multitud de intereses divergentes y contradictorios, legítimos los unos, opuestos los otros al derecho. Así es que la Administración, por su iniciativa, concurre de modo eficaz y utilísimo á la obra del legislador, y el Ministro que, colocado en el último peldaño de su escala, recoge el espíritu general de ese organismo, es el que está en condiciones de apreciar las exigencias de la realidad, que nunca pueden sin peligro ser desatendidas, y de moderar la impaciencia de peligrosos novadores ó alentar reformas convenientes y oportunas.

Pues bien; el Sr. Camacho, comunicándose directamente con todos los funcionarios de su Departamento, escuchándoles con benevolencia, estimulándoles á todos con su consejo, estudia con cuidadosa solicitud todas las manifestaciones en que se revelan esas necesidades prácticas y esas exigencias incontrastables de la vida.

Así es D. Juan Francisco Camacho una voluntad enérgica y firme, y resplandece en él un espíritu práctico; es decir, que al mismo tiempo



que es un *Carácter*, se halla adornado del *don* de *Gobierno*.

En breves palabras pueden compendiarse los principios fundamentales de la política financiera del Sr. Camacho, que son á saber: 1.º, el del equilibrio de los presupuestos de gastos y de ingresos, para que la nación española ocupe dignamente su lugar en el mundo y alcance el crédito necesario; 2.º, el de que todo sacrificio, buena-mente exigible, debe exigirse de la nación para conseguir aquel resultado, sin el cual la vida económica se perturba y el país sufre graves perjuicios; 3.º, que cuando se llega á cierto límite en los gastos y éstos no son absolutamente necesarios ó indudablemente útiles y reproductivos, deben realizarse prudentes economías por una reforma de los servicios públicos; 4.º, que toda reforma en Hacienda, para ser eficaz y provechosa, requiere una organización sólidamente establecida, apartada del influjo de las pasiones de partido y atenta sólo al cumplimiento de sus propios fines y á la realización de la justicia y del bien general.

En varios proyectos presentados á las Cortes en 1872, se reveló ya el Sr. Camacho como hacendista perspicaz, abrazando una multitud de reformas relativas á todo el orden económico y rentístico, pero girando todas ellas bajo una idea capital: la del orden de la Hacienda por el equilibrio de los presupuestos.

Así, después de exponer el déficit de presupuestos anteriores, y el que resultaría en 1872-73, si

no se acudiera con energía y decisión á su remedio, dice: «El Gobierno aspira á modificar, con »el concurso de las Cortes, la gravísima situación »que aparece de lo expuesto, reduciendo los gastos, aumentando los ingresos y adoptando las »soluciones excepcionales que las circunstancias »demandan con imperio.» «...La situación del Tesoro exige llegar al ínfimo límite en los gastos, »organizando modestamente los servicios, renunciando por el momento á todo cuanto pueda ser »simplemente útil, sin ser estrictamente necesario, porque el país va á hacer sacrificios, y es »preciso no exigirle sino los absolutamente indispensables.»

En el proyecto de presupuestos de 1872-73, á que venimos haciendo referencia, reprodujo las bases de impuestos pedidos por sus antecesores, y estableció otras para la creación de un impuesto indirecto llamado á reemplazar á la abolida contribución de consumos, en el cual, limitando los artículos sometidos al impuesto, formando una sola tarifa y facilitando su Administración, creía haber remediado todo lo que pudo en otros tiempos dar pretexto á censuras, sin perder nada, ó muy poco, de la producción del impuesto.

«Bien conoce el Gobierno, añadía, que pide al »país esfuerzos grandes, sin duda, pero no superiores á sus recursos ni á su patriotismo; y no »vacila en pedirlos, porque la experiencia demuestra que hemos pagado con el doble, y seguiremos pagando muchos años todavía, el ilusorio »alivio que al parecer ha producido la abolición

»de impuestos, que no han tenido sustitución hasta el día.»

Después de exponer el déficit que resultaría, según su cálculo, se expresaba de este modo: «El  
»Ministro presenta una ley especial para reducir  
»este déficit, que haría imposible la gestión del  
»Tesoro.

»Considera transitorio el presupuesto que presenta á las Cortes, y transitorias las soluciones que la actual situación del Tesoro nos impone. »Ha apelado al concurso de los hombres competentes para formar una Junta llamada á preparar las bases del presupuesto definitivo del país, »porque la Hacienda no es el patrimonio de ningún partido, y todos tenemos igual interés en »velar por el desarrollo de la fortuna pública, en »vigilar el empleo de los recursos del Tesoro.»

En 1874, época en que fué llamado segunda vez al Ministerio, exponía sus ideas en circular dirigida á los Directores generales de Hacienda, dándoles instrucciones y excitando su celo en la gestión de los negocios que le están encomendados.

«A la obra indispensable de la reconstrucción completa de la Hacienda, debe concurrir, decía, »la nación entera, porque el crédito público es »la hacienda de todos; y el crédito del país, sobre estar ligado á los intereses generales, es asunto de honra para cuantos abrigan en su pecho »el sagrado amor de la patria, y saben anteponerlo á las miras estrechas de las parcialidades y »á toda afección personal. Pero para exigir á los »demás la cooperación de su lealtad y de su for-



»tuna, preciso es que la Administración se revista  
 »de la autoridad, que sólo puede fundarse en  
 »un celo incansable, una moralidad reconocida  
 »y una inteligencia probada. De este modo, las  
 »rentas é impuestos, elementos regulares de to-  
 »do presupuesto sério y base de la confianza,  
 »llegarán á ser los recursos naturales del Teso-  
 »ro, y se prescindirá de esos otros extraordina-  
 »rios que, si en ocasiones y en cierta medida son  
 »precisos, destruyen el crédito por su abuso, y  
 »consumen, sin la previsión debida, los ingresos  
 »futuros.»

.....

«No desatiende el Gobierno su obligación de  
 »formar con toda urgencia un presupuesto gene-  
 »ral de ingresos y gastos que fortifique el que-  
 »brantado edificio de nuestra Hacienda; pero en  
 »tanto, conviene y urge dar vigor y actividad ex-  
 »traordinaria á los resortes administrativos.»

En la exposición que precede al decreto de  
 26 de Junio de 1874, aprobando los presupues-  
 tos generales del Estado durante el ejercicio de  
 1874-75, decía:

«Grave y difícil por demás es la situación de  
 »la Hacienda pública: la necesidad del urgente  
 »remedio á nadie se oculta. Sin embargo, este  
 »remedio no puede llevarse á cabo sin la ayuda  
 »de todos, y los varios intereses que se contro-  
 »vierten pueden impedir aquella ayuda.

»El camino del orden y de la regularidad ad-  
 »ministrativa parece que es el que pudiera ins-  
 »pirar más garantías, y sin embargo, el Ministro

»que suscribe, al tomar posesión del cargo que  
 »desempeña por la confianza de V. E., pretendió  
 »intentarlo, y las desconfianzas sobrevinieron:  
 »lejos de encontrar el apoyo que buscaba en be-  
 »neficio del Tesoro, tuvo que continuar un ca-  
 »mino, que puede ser y ha sido para él, como  
 »para todos sus dignos predecesores, preciso, y  
 »por el cual podrán satisfacerse necesidades del  
 »momento, pero no encuentra al cabo sino la  
 »ruina.

»¿Será posible buscar otros que ofrezcan espe-  
 »ranzas de salvación para la Hacienda? El inten-  
 »tarlo siquiera es patriótico: si los intereses que  
 »han de cooperar al éxito facilitan la empresa, el  
 »éxito será seguro; si se alejan, si se hostilizan,  
 »la solución será imposible; pero en ese caso la  
 »responsabilidad moral del Ministro quedará á  
 »salvo.

»La opinión unánime en este punto cree que  
 »la Hacienda no puede continuar un día más en  
 »su presente estado; y cualesquiera que sean los  
 »obstáculos que se presenten para la formación  
 »de un nuevo presupuesto y la resolución de las  
 »dificultades pendientes, preciso es tratar de do-  
 »minarlos, teniendo en cuenta que las necesida-  
 »des públicas son la medida de los poderes del  
 »Gobierno, y su deber satisfacerlas con la deci-  
 »sión que infunden el patriotismo y la responsa-  
 »bilidad aceptada.

»Las causas varias que han traído á la Ha-  
 »cienda á su presente lamentable estado, son co-  
 »nocidas. Coincidieron con la revolución de 1868

»alteraciones profundas en las rentas públicas  
 »que amenguaron grandemente los recursos del  
 »Erario, privándose la nueva situación de la fuer-  
 »za y del crédito que un presupuesto sólido pro-  
 »porciona. Los tiempos de novedades políticas,  
 »que siempre alarman quebrantando la confian-  
 »za, son los menos adecuados para las reformas  
 »económicas transcendentales, cuyos inconve-  
 »nientes son menores, ó más seguras sus venta-  
 »jas, en días serenos y bonancibles. La fuerza de  
 »las circunstancias fué, sin duda, entonces supe-  
 »rior á los mejores propósitos, y la desaparición  
 »de recursos positivos acreció rápidamente el an-  
 »tiguo déficit. Sobrevino á poco, y cuando no se  
 »había reconstruído aún el edificio económico,  
 »una desastrosa guerra civil, todavía mante-  
 »nida...»

Después de exponer las dificultades que causaba la guerra y la situación del Tesoro, proseguía:

«Habida consideración á los datos reunidos,  
 »aunque hayan sido incompletos, ha formado el  
 »Ministro que suscribe los proyectos... adecua-  
 »dos á lo extraordinario de la situación económi-  
 »ca y de las circunstancias generales de la na-  
 »ción. Porque en este ejercicio anormal es impo-  
 »sible dar solución completa á la crisis de nuestra  
 »Hacienda, y harto se hará si, con un presupon-  
 »to de carácter transitorio todavía y con otras  
 »medidas complementarias, se prepara para un  
 »día próximo un presupuesto normal, que en-  
 »cuentre ya en éste los recursos de una tributa-



»ción efectiva y el auxilio de rentas bien admi-  
 »nistradas, sin las graves perturbaciones, por otro  
 »lado, que el estado del Tesoro produce ahora en  
 »el sistema general de la Hacienda. Es preciso  
 »dirigir los esfuerzos de la Administración á res-  
 »tablecer la tributación normal que el país nece-  
 »sita para que no se extinga del todo su vida eco-  
 »nómica, haciendo revivir los obstruídos veneros  
 »de las rentas é impuestos. De esta sola tarea  
 »debe esperarse un resultado importante. La  
 »ocultación de la riqueza imponible, los atrasos  
 »en el cobro de débitos en vários conceptos á fa-  
 »vor del Erario, la defraudación, han empobre-  
 »cido al Estado; el remedio enérgico que este mal  
 »demanda, toca á la Administración: á procurar-  
 »lo consagra el Ministro y los Jefes de los Cen-  
 »tros directivos y de provincias, oscuros, pero  
 »fructuosos trabajos, y tiene fundada esperanza  
 »de que ha de restablecerse la noción del deber  
 »en las relaciones del individuo con la Hacienda.

»No basta esto, sin embargo, y es menester ob-  
 »tener del país nuevos recursos, logrados con la  
 »mayor igualdad y el menor descontento posi-  
 »bles. Para ello procede, en primer lugar, acudir  
 »á impuestos ya conocidos, cuya desaparición, no  
 »reemplazada, ha sido en mucha parte origen del  
 »mal presente, y cuyo restablecimiento está pre-  
 »parado por la opinión pública y por la iniciación  
 »de las Corporaciones municipales. El impuesto  
 »indirecto de consumos, fuente abundante de na-  
 »tural tributación en todas partes, debe reapare-  
 »cer entre nosotros, en condiciones que le hagan

\*



»lo más productivo y lo menos oneroso posible.  
 »Él debe venir en ayuda de la propiedad, del co-  
 »mercio y de la industria, que si en consideración  
 »á las circunstancias actuales pueden aumentar su  
 »prestación, no cabe que soporten á medias con  
 »empréstitos costosos siempre, y hoy imposibles,  
 »todo el peso de las obligaciones del Estado, lo  
 »cual equivaldría al secuestro de las rentas y al  
 »rápido decrecimiento de la riqueza imponible,  
 »Sin perjuicio de fortificar los tributos, que to-  
 »davía lo permiten, ha sido preciso encontrar en  
 »los impuestos indirectos la tributación general,  
 »variada y continua de los muchos pocos, cuya  
 »acumulación ofrezca una considerable totalidad.»

En el breve estudio que hacemos, y en el propósito que nos guía, no podemos examinar detenidamente las importantes reformas que en aquel período fueron adoptadas por el Sr. Camacho.

En época más tranquila mostró la fecundidad de su pensamiento acometiendo empresas por las cuales muchos le tuvieron por atrevido reformista: nos referimos á la gestión de 1881 á 1883, que ha dado á conocer en su excelente *Memoria sobre la Hacienda pública de España en 1881 á 1883*.

Merece desde luego mencionarse que uno de los pensamientos más persistentes en el Sr. Camacho, ha sido el de apartar la Administración económica de las luchas de los partidos, no ciertamente porque se afirme que la Hacienda, como la Administración en general, está exenta de las influencias de la política, sino porque anda completamente extraviado el concepto de ésta y des-

atendidos sus fines esenciales. En tal sentido eran de aplaudirse las declaraciones del Sr. Camacho, que á este propósito dice, en su citada Memoria, lo siguiente: «Yo, por el contrario, he entendido »siempre que la Hacienda pública y los asuntos »económicos que con ella se ligán tienen un carácter esencial de neutralidad, en virtud del »cual las bases capitales, los organismos y las »resoluciones que á una y otros se refieren son »cosa separada de los intereses y aun de la representación política doctrinal de los partidos, por »más que cada uno de éstos, al concurrir con »igual patriotismo á la obra común, lleve á sus »soluciones el carácter circunstancial ó la influencia de su concepto propio en la política general; »porque solamente de este modo las bases fundamentales de la Hacienda están exentas del peligro de la inestabilidad, y pueden ser sólidos y »continuados sus progresos.»

Fué también en el Sr. Camacho firme propósito el de la nivelación de los presupuestos, y en el discurso leído por S. M. el Rey en la apertura de las Cortes, verificada el 20 de septiembre de 1881, decía: «Con solícito afán ha procurado mi »Gobierno mejorar la Hacienda nacional; y si el »sagrado respeto que las leyes le merecen ha »contenido sus propósitos de reforma, tan pronto como esté constituido el Congreso os propondrá las medidas que considera necesarias para »salvar la situación de nuestros presupuestos, á »pesar de todo, en progresivos y crecientes déficits, y para obtener desde luego la segura ni-

»velación, tan apetecida y hasta ahora no lograda.»

Respondiendo á este pensamiento se modificó la organización económico-administrativa y sus procedimientos; se establecieron alteraciones en las bases de los impuestos, suprimiendo algunos que dificultaban el tráfico, disminuyendo otros en interés del contribuyente y reformando las rentas públicas, y se llevó á cabo la conversión de las deudas, que es uno de los títulos de mayor gloria que tiene el Sr. Camacho ante propios y extraños.

No es nuestro intento examinar cada una de esas reformas, ni los resultados que produjeron en orden al presupuesto general; pero debemos hacer un breve estudio de la organización administrativa para que pueda comprenderse el objeto y alcance de la que se dió á los elementos jurídicos de Hacienda.

\*  
\* \*

Hemos dicho repetidas veces, y ha quedado demostrado con varios párrafos transcritos, que uno de los pensamientos fundamentales del Sr. Camacho ha sido el de organizar la Administración bajo la base de una necesaria independencia para sustraer la acción administrativa al influjo de los intereses de partido. Manifestación clarísima de este pensamiento son las Delegaciones de Hacienda. Discútase allá, en la región de la ciencia, si el organismo provincial debe ser un reflejo exacto de la organización central, y si es más



perfecto y sistemático aquél cuando se basa en el principio de una autoridad superior y común, que representa en la provincia al Jefe del Poder ejecutivo; pero en el terreno de la realidad es evidente que la acción del Gobernador en la Hacienda pública fué muchas veces movida, no por el interés del Estado ni por el principio de la justicia administrativa, sino por débiles complacencias con el elector influente. A librar á la Hacienda de ese vicio corruptor, que se ha llamado y se llama el caciquismo, tiende la institución de las Delegaciones. El Delegado, representante del Ministro, reflejo de su autoridad, fuertemente sostenido por él y alejado de los movimientos de la política personal, atiende á la regularidad de la Hacienda y al interés legítimo del Estado que se encuentra en el cumplimiento de las leyes económicas, que son ó deben ser expresión de la justicia, y garantía, por consiguiente, de todos. Libre, por otra parte, de detalles abrumadores; ejerciendo la autoridad; vigilando la marcha de la Administración, pero no interviniendo en cada uno de sus actos, está colocado en condiciones de fallar con la necesaria imparcialidad las reclamaciones á que aquellos actos pueden dar origen. Con objeto de fortalecer más todavía la acción administrativa, creó asimismo el Sr. Camacho, y restableció más tarde, la Inspección. Es el servicio de Inspección, examinado de un modo genérico, altamente moralizador y provechoso, pues de un lado inspira la inspección un temor saludable á todos los funcionarios públicos, y este temor re-

percute luego por todo el cuerpo social que siente el influjo de una Administración solícita y activa, pronta y enérgica en su acción y atenta á la persecución del fraude y de las ocultaciones. Cuando diariamente se pronuncian quejas contra la Administración pública y se lamentan todos de los malos hábitos tributarios que entre nosotros existen y de la tendencia general á sustraerse al pago de las contribuciones, nadie puede poner en duda la eficacia y utilidad de una Inspección activamente ejercida y llevada á cabo con la necesaria autoridad. A este pensamiento obedece la Inspección general y tales los propósitos á que el Ministro aspiraba, unificando el servicio y disponiéndolo de modo que se realice inmediatamente bajo su autoridad y con el prestigio necesario para que pueda llenar sus fines.

Ambas reformas pueden ser precursoras de otras más amplias y generales en la organización del personal administrativo, lo que todavía debe con más razón esperarse de la conducta seguida por el Sr. Camacho en el Ministerio, no atendiendo en los nombramientos, traslaciones y separación del personal á otros motivos que el interés general: tarea harto difícil por los principios de desorganización que han llevado á la Administración económica de nuestra patria los partidos políticos; pero empeño verdaderamente glorioso, al cual ha hecho ya justicia la opinión pública.

Este noble empeño y este firmísimo anhelo bastarían, aun no obteniendo el feliz éxito que

merecen los generosos esfuerzos empleados por realizarlos, para colocar á envidiable altura al hombre de Estado que le revela, con la firme constancia y con la voluntad austera con que le persigue el Sr. Camacho.



Llegamos al punto principal, objeto de este estudio: á la significación de las reformas en el servicio jurídico de la Hacienda. En nuestro sentir, el principal, el más alto y el más elevado objeto que se propuso con ellas su autor, está en relación íntima con el pensamiento fundamental que palpita en toda su obra: la de vigorizar la Administración y enaltecerla, dotándola del elevado sentido del derecho. La Administración, como queda indicado, y sobre todo la Administración económica, se mueve en un dilatado campo de acción, afectando á intereses diversos, complejos y contradictorios, que se revuelven, luchan y se agitan, siendo únicamente posible regularlos, moderarlos y armonizarlos por la idea y por el sentimiento de la justicia, de que tan faltos andan, como ha dicho un ilustrado jurisconsulto de nuestra pátria, hombres y pueblos. Si al sentimiento de un egoismo individual ó colectivo se opone constantemente la resolución fundada en la ley, que es garantía del derecho de todos, la moralidad pública, como que se fortalece y vigoriza con el ejemplo de la Administración, ésta hace que penetre en el organismo social el espí-



ritu jurídico; pues si acaso la providencia que tiene su fundamento en la ley afecta á intereses individuales ó de clase y claman contra ella, al fin recibe la sanción de la opinión pública, y el eco de aquellos intereses se desvanece en el aplauso general.

Una institución que, sólidamente asentada, con la necesaria estabilidad y la suficiente independencia, desempeña una especie de magistratura por medio de un asesorado inteligente y continuo, velando por el cumplimiento de la ley y resguardando todos los derechos, ejerce una benéfica influencia en la vida social. Así, y prescindiendo de que la mayor parte de las cuestiones de Hacienda son jurídicas, las funciones de la Asesoría, por virtud de las cuales se lleva al organismo administrativo este sentido del derecho, alcanzan una transcendental importancia que no podía ocultarse á la perspicaz inteligencia del Sr. Camacho, que dice respecto de ellas lo siguiente en su *Memoria sobre la Hacienda pública en España de 1881 á 1883*: «Y todavía la necesidad de estas funciones (las jurídicas) se siente más vivamente en un país donde, por numerosas causas, no ha llegado la Administración pública á alcanzar una organización perfecta, y en el cual las providencias que de ella emanan no logran de los administrados el debido respeto. De aquí la importancia de funcionarios que, con especiales conocimientos, penetrados de la alteza de su misión, responsables, y al mismo tiempo con la independencia precisa para ejercer con imparciali-



»dad una fiscalización científica, sean celosos y  
 »constantos defensores de la ley, garantía de los  
 »intereses sociales y amparo de los derechos de  
 »los particulares; eviten que á título de interpre-  
 »tación se incurra en arbitrario casuismo, ó á  
 »pretexto de equidad se llegue á una desigualdad  
 »irritante; procuren que los derechos de la Ha-  
 »cienda no se lesionen por ignorancia de la ley ni  
 »se desconozcan de los administrados, é infiltren,  
 »en fin, en el organismo de la Hacienda un senti-  
 »do jurídico y un elevado espíritu de rectitud y  
 »de justicia, que le hagan merecer el prestigio,  
 »la consideración y el respeto de todos.»

Pero aparte de estas funciones de Asesoría, incumben al Cuerpo de Abogados del Estado otros deberes importantes, ya en la Administración activa, ya en los Tribunales de justicia.

Respecto de lo primero, tiene á su cargo la gestión y administración de un impuesto, el de Derechos reales y transmisión de bienes, que es esencialmente jurídico, porque sus bases son actos y contratos de la vida que el derecho regula, y que han de ser previamente calificados para las liquidaciones.

Dejando, pues, de mencionar otros impuestos y ramos cuya gestión reclama constante auxilio de la ciencia jurídica, y por tanto del Abogado, no puede prescindirse de éste para la administración del impuesto de que se trata. Así es que, desde que se realizó una reforma requerida por la índole del mismo y se encomendó su gestión al Cuerpo de Letrados de Hacienda, aumentaron

sus productos, se mejoró su administración, y es de esperar que continúen estos progresos, haciéndole servir para más fines que los de allegar recursos al Tesoro, es decir, para que sea eficaz y provechoso auxiliar de la estadística territorial.

De todas suertes, es evidentísimo que un impuesto tan delicado como el de Derechos reales y transmisión de bienes no se puede administrar con acierto, sino previo el conocimiento de todo el derecho; y lo que admira acaso es que otros ramos, como el de Propiedades, no se administren igualmente por Abogados. Porque fuera de que el derecho administrativo no es algo aislado é independiente de los principios generales del derecho; fuera de que la justicia es una y todas sus ramas se enlazan, se ayudan y se auxilian, por lo cual es el derecho civil supletorio del administrativo; fuera de esto que hace indispensable la función de Asesoría, que acaso por una más acertada organización de la Administración pública, una distinción más fundamental de sus funciones y una reforma en el procedimiento, pudiera servir admirablemente á elevados fines; fuera, decimos, de esto, la Administración de propiedades entraña cuestiones esencialmente jurídicas. Lo mismo pudiera decirse del Timbre.

En cuanto á lo segundo, el Estado necesita representantes y defensores en juicio. Ha tenido en los últimos tiempos esta representación el Ministerio fiscal, acreditando en estas funciones, como en todas, su celo y su laboriosidad. Esto no obstante, las numerosas ocupaciones que pesaban



sobre él le impedían, á pesar de aquel celo, prestar la atención necesaria á cuestiones de suyo especialísimas, lamentándose de ello alguna vez, acaso con excesivo rigor, el Consejo de Estado.

No debe olvidarse, sin embargo, que el cuadro del derecho especial del Estado es de suyo dilatado y vasto. El derecho civil contiene numerosas excepciones; pero aparte de esto, en él influye, modificando muchas de sus disposiciones, el derecho administrativo, variable como las necesidades á que responde.

El cuadro de derecho especial del Estado se traza en la notable exposición que precede al Real decreto de 16 de marzo de este año, demostrándose también el servicio que pueden prestar los Abogados en lo relativo á lo Contencioso.

«Por la privilegiada condición de los intereses  
 »públicos, ora en razón de su origen, que sobre  
 »el país contribuyente pesa; ya por su especial  
 »destino, que no es, ni debe ser otro, que el de  
 »realizar obras y servicios públicos y dar cumpli-  
 »da satisfacción á necesidades de este orden, en  
 »gran parte perentorias, debe revestir el procedi-  
 »miento de la Administración general, cuales-  
 »quiera que sean las materias que comprenda, los  
 »indispensables caracteres de claridad en los pre-  
 »ceptos, sencillez en las formas y prontitud en las  
 »resoluciones; pero cuando el procedimiento en  
 »su acción no interrumpida encuentra al paso,  
 »antes que intereses eventuales y transitorios, ó  
 »esperanzas inciertas de legitimidad dudosa, de-  
 »rechos perfectos de particulares, nacidos de una

»disposición legal ó de obligaciones y solemnes  
 »contratos con la Administración celebrados, im-  
 »pónese, ante todo, la necesidad de mayor dete-  
 »nimiento en el examen y preparación de las re-  
 »soluciones, que serán tanto mejor obedecidas,  
 »cuanto sean más equitativas y justas.

»La interesante y vasta materia de la contra-  
 »tación de obras y servicios públicos, en sus for-  
 »mas y condiciones de legalidad con ó sin la ga-  
 »rantía de la subasta.

»La no menos importante que á los bienes na-  
 »cionales se contrae antes y después de su adjudica-  
 »ción, y la de los bienes que pertenecen al Es-  
 »tado por título singular del orden civil.

»Las numerosas reclamaciones sobre excepción  
 »á las leyes desamortizadoras en respeto á dere-  
 »chos particulares de antiguo y solemne estable-  
 »cimiento, representando capellanías, patronatos  
 »y demás fundaciones piadosas.

»Las declaraciones en punto á derechos pasivos  
 »y pensiones del Tesoro, aplicando la complica-  
 »dísima legislación vigente en la materia, con dis-  
 »posiciones y preceptos que se repiten, se recti-  
 »fican y aun se destruyen en parte y se contradi-  
 »cen; y los múltiples casos de análogas cuestiones  
 »que comprometen á un tiempo intereses de ca-  
 »rácter público y derechos del orden privado,  
 »ofrecen un cuadro general de contiendas jurídi-  
 »cas, complejas y delicadas por su propia natu-  
 »raleza, que no podrían resolverse con acierto sin  
 »especial competencia científica en los encargados  
 »de examinarlas, para procurar la conciliación

»apetecible siempre, mas no siempre fácil, entre  
 »los intereses generales del Estado, que no pue-  
 »den ser desatendidos, y los derechos de los par-  
 »ticulares, que deben ser escrupulosamente res-  
 »petados.

»Y si, prescindiendo del procedimiento de la  
 »Administración general activa, pasamos á la es-  
 »fera de los negocios contenciosos que tanto im-  
 »portan á la Hacienda y al Estado, así en el or-  
 »den civil, como en el penal, como en el adminis-  
 »trativo, resultará más evidente todavía la con-  
 »veniencia y necesidad del Cuerpo de Abogados  
 »del Estado, encargado de la representación y de-  
 »fensa de los intereses de la Hacienda ante los  
 »Tribunales ordinarios.

»Porque suprimidos los fueros y jurisdicciones  
 »especiales de Hacienda, pero mantenidas en los  
 »preceptos de las distintas leyes las acciones y  
 »excepciones de antiguo origen en gran parte, con  
 »procedimientos de carácter privilegiado, como  
 »necesaria garantía en defensa de la fortuna pú-  
 »blica, de que puedan citarse entre otros ejem-  
 »plos: el derecho preferente de la Hacienda en  
 »concurencia con otros acreedores; la brevedad  
 »en la prescripción y caducidad de créditos con-  
 »tra el Estado; la prohibición de renunciar ni  
 »transigir intereses y derechos del Estado; la ne-  
 »cesidad de previa resolución administrativa an-  
 »tes de plantear acciones judiciales contra la Ha-  
 »cienda; el procedimiento sumario y rápido, uti-  
 »lizando la vía de apremio para el reintegro de  
 »los alcances que persiga ó de los créditos en fa-



»vor suyo contra los particulares, con la notable  
 »circunstancia de que mientras los bienes de éstos  
 »son prenda obligada de embargo y expropiación  
 »judicial, los caudales del Tesoro no pueden ser  
 »embargados ni comprendidos en el procedimien-  
 »to de apremio, ni distraídos del especial destino  
 »preestablecido en las leyes, cuyos ejemplos cons-  
 »tituyen otras tantas excepciones á la ley común,  
 »así en el orden sustantivo como en el procesal,  
 »requiérese por ello como obligada circunstancia  
 »la de una representación y defensa de competen-  
 »cia especial científica, tanto más celosa é ilus-  
 »trada en frente de la de los particulares, anima-  
 »da siempre de aquella diligente solicitud que  
 »despierta y estimula el interés propio en peli-  
 »gro, cuanto más empeñada es la contienda y  
 »más de temer el riesgo de conflictos posibles,  
 »ocasionados á procedimientos frustratorios ó á  
 »resoluciones desacertadas por el mero hecho de  
 »aplicar preceptos y disposiciones legales dife-  
 »rentes por el mismo Tribunal, y en casos y ne-  
 »gocios de perfecta analogía en el fondo.

»No es de menos transcendencia, ciertamente, el  
 »interés del Estado y de la Hacienda en las cues-  
 »tiones atribuídas á la competencia de la juris-  
 »dicción especial contencioso-administrativa, que  
 »así en la esencia de la materia, como en punto  
 »á su organización, tan vivamente preocupa y tan  
 »divididas trae las opiniones de los publicistas y  
 »jurisconsultos en España y en Europa.

»Sin prejuzgar en modo alguno las reformas  
 »para la buena organización de la llamada justi-

»cia administrativa, encomendada actualmente al  
 »Consejo de Estado en la Sala de lo Contencio-  
 »so, y que aunque con jurisdicción excepcional  
 »é improrrogable conoce y funciona á un tiempo  
 »como tribunal en primera y única instancia, co-  
 »mo tribunal de apelación, y en determinados  
 »casos como tribunal de casación, la enorme ci-  
 »fra de pleitos, procedentes en parte muy princi-  
 »pal del departamento de Hacienda, pendientes  
 »de resolución, es motivo bastante á justificar la  
 »legítima preocupación del Ministro que suscri-  
 »be y de sus dignos compañeros, en presencia de  
 »la situación verdaderamente precaria de este  
 »importante servicio, que se hace preciso reor-  
 »ganizar en condiciones adecuadas con la urgen-  
 »cia y perentoriedad que la opinión reclama; en  
 »ventaja de la Administración general del Esta-  
 »do, cuyo prestigio y buen nombre compromete,  
 »y en beneficio de los muchos particulares á  
 »quienes importa, y cuyos intereses y derechos  
 »no es lícito mantener durante un plazo indefini-  
 »do en las incertidumbres de un litigio.

»Ocioso parece detenerse en demostrar el efi-  
 »caz y provechoso auxilio que podrán prestar á  
 »la acción administrativa en este orden de nego-  
 »cios los Abogados del Estado, una vez reorga-  
 »nizado el Cuerpo en la forma adecuada y conve-  
 »niente.»

Como se ve, aparte de los deberes ya enco-  
 mendados al Cuerpo jurídico del Estado, se se-  
 ñalan á su acción más anchos horizontes, porque  
 toda la Administración siente la necesidad de re-

cibir continuamente y de un modo inmediato las inspiraciones del derecho, y hay ramos en ella tan esencialmente jurídicos que están reclamando una gestión directa por funcionarios versados en la ciencia jurídica. Acaso el título de Abogados del Estado refleja exactamente este pensamiento.

---

La gratitud es deuda que se complacen en reconocer cuantos tienen conciencia de sus deberes, y el Cuerpo de Abogados del Estado debe inmensa gratitud á su fundador y reorganizador. Ofrenda escasa y pobre es, en verdad, este libro para significarla; pero acredita al menos que se reconoce el beneficio recibido, y es testimonio, aunque débil y modesto, del respeto y del afecto que profesan sus individuos al ilustre hombre público á quien está dedicado.

Junio de 1886.



## EXPOSICIÓN Y DECRETO

DE 26 DE JULIO DE 1874, SUPRIMIENDO LA SECCIÓN DE  
LETRADOS CREADA EN LA SECRETARÍA GENERAL DEL MI-  
NISTERIO DE HACIENDA Y RESTABLECIENDO LA ASESORÍA  
GENERAL DEL MISMO.

SR. PRESIDENTE: La Asesoría general de este Ministerio, creada por Real decreto de 29 de diciembre de 1854 para sustituir á la Dirección general de lo Contencioso de la Hacienda pública, que á la vez desapareció, y suprimida por el de la Regencia de 30 de junio de 1869, dejó un vacío en la Administración económica del país que en vano se ha intentado llenar por las órdenes de la misma Regencia de 9 de julio siguiente, que dieron vida en la Subsecretaría á una Sección de Letrados; ni por el decreto de 5 de mayo de 1873, que transformó á esta Sección en un Cuerpo colegiado; ni por el de 4 de noviembre último que, su-





primiendo á este Cuerpo, restableció, aunque con distinta forma, la Sección que aún existe.

Digno complemento aquella Asesoría, en el organismo de la Administración central, del Ministerio de Hacienda, por haber sucedido á la Dirección general, en donde se habían centralizado los deberes de los antes dispersos Asesores del ramo, con gran ventaja para la unidad del sistema; encargada principalmente de promover, dirigir y activar la gestión de los negocios que pendían ante los Tribunales, y en los que se ventilaban acciones ú obligaciones del Estado; dotada de atribuciones consultivas y resolutivas como los demás Centros de este Ministerio, y desempeñada por funcionarios competentes y de elevada posición administrativa, aconsejaba con notoria autoridad sobre las resoluciones que podían ser objeto de demanda ante los Tribunales de justicia ó administrativos, y facilitaba, con su merecido prestigio y con sus atribuciones resolutivas, la defensa de los intereses fiscales que en los mismos se ventilaban.

Inútiles han sido cuantos ensayos se han hecho en el breve período de cinco años para

sustituir el inteligente y á la vez respetable Asesorado con que contaban este Ministerio y sus altas dependencias en aquel Centro suprimido. Reconociendo y aun proclamando la ilustración del personal de las Secciones y del Cuerpo de Letrados con que sucesivamente se ha intentado reemplazarlo, sus dictámenes no han podido alcanzar, sin embargo, la autoridad suficiente, sólo porque proceden de una corporación ó de un funcionario de responsabilidad mediata y de modesta jerarquía administrativa, ocasionando por lo mismo, y con harta repetición, la necesidad de suplir esa falta de autoridad con la por todos reconocida del primer Cuerpo consultivo del Estado; y sus gestiones para promover y facilitar la defensa de los intereses de la Hacienda cuando sobre ellos se litiga, han tropezado y tropiezan con la falta de atribuciones resolutivas, perdiendo así la actividad y á veces la oportunidad, que suelen ser garantía del buen éxito de los asuntos litigiosos.

El restablecimiento de la Asesoría general del Ministerio de Hacienda con las mismas ó análogas atribuciones que le eran propias al

tiempo de su supresión, sería una reforma de indudable conveniencia, aun suponiendo á nuestra Administración económica en un estado normal. Pero hoy que, por desgracia, dista mucho de hallarse en ese estado, y que la situación financiera impone á veces á los Gobiernos el deber de admitir ó desechar proposiciones que, una vez aceptadas, y revistiendo las debidas formas legales, pudieran constituir verdaderos contratos de irremediable trascendencia, lo que bajo aquella hipótesis sería sólo conveniente, es de necesidad imprescindible. La índole misma de los contratos á que se alude exige el inmediato y autorizado concurso de un alto funcionario que, versado en la ciencia del Derecho, asesore al Ministro para tranquilidad de su conciencia y mayor garantía de los intereses públicos.

Una sola consideración pudiera exponerse en contra de esa medida que aconseja el bien del servicio y que impone la anormalidad de las circunstancias. Mas por fortuna, el insignificante aumento de gasto que ha de ocasionar el restablecimiento de la Asesoría se compensa con las más importantes economías ya realiza-



das en otras dependencias del Ministerio de Hacienda: de modo que la reforma ni afectará desfavorablemente al presupuesto general del Estado, ni ocasionará la menor perturbación en el curso de los asuntos que corren á cargo de esas mismas dependencias, ni lastimará derechos legítimamente adquiridos, produciendo, por el contrario, ventajas innegables en uno de los ramos más importantes de la Administración económica.

Fundado en estas razones, y de conformidad con el Consejo de Ministros, el de Hacienda que suscribe tiene la honra de proponer á V. E. el siguiente decreto.

*El Ministro de Hacienda,*  
JUAN FRANCISCO CAMACHO.



## DECRETO-LEY

DE 26 DE JULIO DE 1874.

A propuesta del Ministro de Hacienda, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Queda suprimida la Sección de Letrados creada en la Secretaría general del Ministerio de Hacienda por decreto de 4 de noviembre último.

Art. 2.º Del mismo modo se suprimen las plazas de funcionarios Letrados que se crearon por el citado decreto en las Direcciones generales del Tesoro, Aduanas, Rentas y Caja de Depósitos.

Art. 3.º Se restablece la Asesoría general del Ministerio de Hacienda, que se suprimió por decreto de la Regencia de 30 de junio de 1869, la cual funcionará desde luego á las in-



mediatas órdenes del Ministro de Hacienda, como las demás Direcciones del ramo.

Art. 4.º La Asesoría general del Ministerio de Hacienda constará de un Asesor, un Coasesor, con el sueldo, consideraciones y prerrogativas que los Directores y segundos Jefes de las demás Direcciones generales, y además del competente número de empleados.

Art. 5.º El Asesor general, el Coasesor y los empleados que se destinen á dicha dependencia con la categoría de Jefes de Negociado, deberán ser Letrados.

Art. 6.º La Asesoría general tendrá facultades y atribuciones consultivas y resolutivas, y le corresponderán en su consecuencia:

1.º Emitir su dictamen en todos los negocios de la Administración central del Ministerio de Hacienda en que se versen cuestiones de Derecho civil ó administrativo.

2.º Dar dictamen también, siempre que se trate de intentar alguna acción ante los Tribunales de justicia ó administrativos á nombre ó en contra del Estado, por virtud de los expedientes que se instruyan en la misma Administración central del Ministerio de Hacienda.

3.º Acordar las instrucciones que deban darse al Ministerio fiscal respecto á los pleitos ó causas que interesen á la Hacienda pública.

4.º Seguir por sí la correspondencia necesaria al efecto con los Fiscales del Tribunal Supremo y del de Cuentas de la nación, así como con los Fiscales de las Audiencias y Juzgados.

5.º Promover los recursos de casación que procedan en interés de la ley en los negocios en que se interese la Hacienda pública.

6.º Promover asimismo el juicio de responsabilidad, cuando haya lugar á ella, contra los Magistrados y Jueces que hubiesen fallado en los negocios de Hacienda; y

7.º Informar en derecho acerca de todos aquellos asuntos en que con arreglo á las leyes ó disposiciones vigentes sea obligatoria la audiencia del Cuerpo consultivo de Letrados, así como en los contratos sobre rentas y servicios públicos, y en aquéllos que tengan por objeto adquirir fondos ó atender al pago de obligaciones del Estado con garantía ó arriendo de las mismas rentas.

Art. 7.º Por el Ministerio de Hacienda se

dictarán las disposiciones convenientes para la ejecución de lo mandado en este decreto.

Dado en San Ildefonso á veintiséis de Julio de mil ochocientos setenta y cuatro.

FRANCISCO SERRANO.

*El Ministro de Hacienda,*

JUAN FRANCISCO CAMACHO.



## EXPOSICIÓN Y DECRETO

DE 26 DE AGOSTO DE 1874, ORGANIZANDO LA ASESORÍA  
GENERAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA.

SR. PRESIDENTE: Restablecida, por el decreto de 26 del mes próximo pasado, la Asesoría general del Ministerio de Hacienda, es, ante todo, indispensable desenvolver el pensamiento que entraña esta importante reforma, precisando las bases fundamentales de su organización, determinando la esfera de acción de sus atribuciones y estableciendo reglas para las relaciones en que este nuevo Centro directivo habrá de hallarse con los otros centros y dependencias del servicio del Estado que con él han de tener necesario contacto. No bastaría para esto recordar nuevamente las disposiciones porque se regía la antigua Asesoría hoy restablecida, porque desde el Real decreto de 23

de agosto de 1868 se suprimió el cargo del Asesor general, rebajando el carácter de aquel Centro superior al de una simple Sección de la Secretaría de este Ministerio; no solamente se han roto todas las tradiciones de este importante servicio, sino han variado también las condiciones de otros muchos del Estado, que, así en la esfera de lo administrativo como en la de lo judicial, han tenido profundas alteraciones en su organización y sus funciones.

Una buena parte, sin embargo, de esas disposiciones que antes regían puede utilizarse todavía por referirse á las reglas ordinarias y normales de toda organización administrativa; otras carecen ya de objeto, por haber desaparecido las instituciones á que tenían aplicación, al paso que la creación de algunas nuevas y la radical modificación que recientemente han tenido en su carácter y funciones otras antiguas, requieren la adopción de reglas también nuevas para armonizar sus mútuas relaciones con la Asesoría general. Tal es el objeto del adjunto decreto, que, si mereciere la aprobación de V. E., completará el ya citado de 26 de julio último. Las disposiciones de este decreto, en

que no se hace más que reiterar las que ya regían antes, desenlazándolas de otras que hoy no pueden tener aplicación, no necesitan explicación especial que las justifique, pero sí la requieren dos innovaciones importantes que en él se introducen ahora por primera vez.

Desde su primitiva creación, la antigua Ase-soría general del Ministerio de Hacienda, lo mismo que la Dirección general de lo Contencioso que la había precedido, tuvieron el especial encargo de estudiar, formular y comunicar á los funcionarios del Ministerio fiscal en todos los Tribunales las instrucciones necesarias para la defensa de los intereses del Estado en los pleitos y causas en que la Administración pública tuviera que ser representada y defendida como demandante ó demandada. Por otro lado, innumerables disposiciones, no solamente gubernativas, sino también legislativas, han inculcado siempre el principio de derecho público, que prohíbe á los Tribunales admitir demanda alguna contra el Estado, ó en que puedan estar comprometidos los intereses de la Hacienda, sin que le haya precedido la reclamación del derecho litigioso y su resolución en la vía ad-



ministrativa, que son como suplemento de la conciliación previa, indispensable en los juicios particulares, que es imposible en los que afectan á aquellos altos intereses. Pero en las reglas que, para determinar en uno y otro caso las formas y tramitación de las consultas y expedientes, se han dado en diferentes épocas, faltan las condiciones de unidad y uniformidad que requiere la dirección superior gubernativa en tan importantes materias. A establecer esa unidad de acción y dirección tienden las disposiciones de los artículos 16, 17, 20 y 21, en armonía con el 1.º de este decreto, concentrando en la Asesoría general del Ministerio de Hacienda, bajo la autoridad del Ministro, todas las atribuciones de consulta, instrucción y resolución final, dentro de la esfera administrativa, de los asuntos litigiosos en que puedan hallarse comprometidos los derechos é intereses del Estado.

Al propio fin tienden también, por otro camino, las disposiciones de los artículos 18 y 19 del mismo decreto. La ley orgánica del Consejo de Estado, en su art. 40, lo mismo que el primitivo Reglamento para lo Contencioso del anti-

guo Consejo Real de 30 de diciembre de 1846, que aún rige hoy en la materia, en su art. 14, sin embargo de atribuir, por regla general, al Ministerio fiscal la representación y defensa de la Administración en los pleitos de la jurisdicción privativa que antes ejercían aquellos altos Cuerpos consultivos, reservaron al Gobierno la facultad de encomendar en casos excepcionales esta defensa á un Consejero extraordinario ó á otro Comisario especial de su confianza. A las altas consideraciones de gobierno que justifican aquella prudente reserva en las referidas leyes, se agrega ahora la de que, habiendo pasado la jurisdicción contencioso-administrativa á una Sala del Tribunal Supremo la defensa de la Administración, en la esfera de acción cada día más amplia de este fuero especial, ha pasado también al Fiscal único del mismo Tribunal, compartiendo su atención con la que le requieren las otras ya múltiples y vastas atribuciones de su cargo. El uso que el Gobierno haya de hacer de la facultad que le reservan las citadas disposiciones legales, claro está que no puede ser frecuente ni sin graves motivos que lo justifiquen. Pero, llegado el caso de usarla, es induda-

ble que en el Asesor general del Ministerio de Hacienda, como Jefe superior del Cuerpo oficial de Letrados consultores de la Administración, se deberá presumir siempre que se reúnan las condiciones más apropiadas para merecer el encargo de confianza de tan importante servicio. Sus atribuciones ordinarias son más adecuadas á la índole especial de este encargo extraordinario que las del Consejero á quien se refiere el Reglamento de 1846; y, por otro lado, así puede evitarse también la contingencia de un gasto considerable en la necesaria retribución de un Abogado particular que, para justificar la confianza del Gobierno en tales casos, habría de buscarse naturalmente entre los de más alta posición profesional en el foro español.

No es ciertamente pequeño el servicio que, llegado el caso, se exige al Asesor general; pero esto no podrá ocurrir sino en rarísimas ocasiones, y en todo evento el interés del Estado requiere y el Ministro que suscribe se ha propuesto, según ya expresó en la exposición de motivos del decreto de 26 de julio último, que este cargo tenga en lo sucesivo la elevación que corresponde á la importancia de las múl-



tiples atribuciones que se le confieren. No daría grandes pruebas de merecerlo el Asesor que, llamado á esta elevada posición oficial, no se sintiese capaz ó no se prestara gustoso á desempeñar alguna vez el más honroso cometido que un Letrado puede recibir de la confianza del Gobierno. Tales son las principales consideraciones que motivan y explican la novedad introducida en los dos citados artículos.

Estas disposiciones que ahora se proponen no completan todavía el pensamiento que ha inspirado el restablecimiento de la Asesoría. Se trata sólo por el momento de ocurrir á las necesidades más apremiantes de la organización de este Centro administrativo. En otras medidas que prepara y sucesivamente propondrá ó adoptará el Ministro que suscribe, se completará la obra, atendiendo con preferencia á fijar las pruebas de idoneidad y demás condiciones para el ingreso y ascenso, así como las garantías de estabilidad y permanencia en los empleados de este ramo del servicio. Mientras tanto, y por las consideraciones expuestas, el Ministro que suscribe, de acuerdo con

el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la aprobación de V. E. el adjunto decreto.

Madrid 26 de agosto de 1874.

*El Ministro de Hacienda,*  
JUAN FRANCISCO CAMACHO.

## DECRETO-LEY

DE 26 DE AGOSTO DE 1874.

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º La Asesoría general del Ministerio de Hacienda es el Centro directivo superior para la resolución, en la esfera gubernativa, de las cuestiones de derecho civil y administrativo en los expedientes que se instruyen en este Ministerio y en los otros Centros de la Administración superior dependientes del mismo.

Art. 2.º El Asesor general, Jefe superior de la Asesoría, depende inmediata y exclusivamente del Ministro de Hacienda, y ejerce las atribuciones consultivas y resolutivas que le confiere el decreto de 26 de julio último, en



iguales términos que las demás Direcciones generales también dependientes de este Ministerio.

Art. 3.º El Asesor general tiene el carácter de autoridad superior inmediata para todos los efectos legales con relación á todos los empleados y dependientes de la Asesoría, los cuales serán responsables ante él por las faltas que cometieren en el desempeño de sus cargos.

Art. 4.º El Coasesor, segundo Jefe de la Asesoría, sustituirá en ausencias ó vacantes accidentales al Asesor, sin perjuicio de las atribuciones propias que le correspondan.

Art. 5.º La Asesoría se organizará en tres Secciones:

Primera. *Sección Central.*

Segunda. *Sección de lo consultivo de Direcciones.*

Tercera. *Sección de Negocios de Justicia.*

De la primera Sección será Jefe el Coasesor, y de cada una de las otras dos un Jefe de Negociado de primera clase.

El Reglamento interior determinará la clasificación y distribución de los Negociados entre

las tres Secciones y la tramitación de los expedientes en unos y otras.

El Asesor podrá, sin embargo, variar esta clasificación y adicionar sucesivamente las del Reglamento para la tramitación de los expedientes de la Asesoría, según lo aconseje la experiencia.

Art. 6.º Los Jefes de Negociado serán personalmente responsables de las inexactitudes y errores de hecho que resultaren en los extractos y notas que firmen en los expedientes para los informes de la Asesoría. La responsabilidad de los errores de derecho será exclusivamente del Asesor y del Coasesor en los informes que respectivamente autoricen.

Art. 7.º Los Jefes de Negociado constituirán el Consejo interior de la Asesoría, pero sin atribuciones propias ni más funciones que deliberar sin voto resolutivo sobre los asuntos que someta á su examen el Asesor cuando tuviese por conveniente reunirlo con este objeto. Ejercerá las funciones de Secretario del Consejo el Oficial de primera clase que al efecto fuere designado por el Asesor.

Art. 8.º Cuando el Ministro mandare pa-

sar á informe de la Asesoría un asunto con carácter reservado, se expresará así en el decreto; y en este caso el Asesor formulará por sí mismo el informe á continuación inmediata de aquel decreto en el expediente sin tramitación alguna. En un libro, que se titulará de *Consultas reservadas*, quedará copia literal del informe del Asesor rubricada por él mismo.

Art. 9.º Cuando el dictámen que la Asesoría general diere á consulta del Ministro contenga una resolución que además de decidir el expediente que lo motive haya de publicarse con el carácter de aplicación general ó casos análogos, volverá el expediente á la Asesoría si el Ministro lo aprobare, para que redacte dicha resolución con considerandos en la forma de las sentencias del Tribunal contencioso-administrativo para su publicación en la *Gaceta* y *Colección legislativa*.

Art. 10. Cuando haya de oirse á la Asesoría en los expedientes que se instruyen en las Direcciones generales, se usará de la fórmula *pase á la Asesoría* en decreto marginal, que firmará el Director, marcando su fecha.

Art. 11. En la nota del Negociado que mo-



tivare este decreto, se fijarán con toda precisión los puntos de derecho á que deberá contraer su informe la Asesoría.

Esta, sin embargo, si al examinar el expediente para razonar su dictámen hallare en él alguna circunstancia que considere de interés legal no comprendida en la consulta, podrá llamar sobre ello la atención del Director consultante.

Art. 12. A continuación de la nota á que se refiere el artículo anterior pondrá la Asesoría su informe, que será siempre razonado, para lo cual se le pasarán íntegros por la Dirección consultante los expedientes, que le serán devueltos, quedando en la Asesoría copia literal de dicho informe, rubricada por el Coasesor.

Art. 13. En cada Dirección se llevará un registro especial de los expedientes en que se consulte á la Asesoría, en el cual se hará constar:

- 1.º El objeto del expediente.
- 2.º Las personas ó corporaciones que en él intervengan como partes interesadas.
- 3.º La fecha del decreto mandándolo pasar á la Asesoría.

Y 4.º Las de su entrega y devolución.

Art. 14. De la resolución definitiva que se dictare en todo expediente en que se hubiese oído á la Asesoría se pasará á ésta copia íntegra y á la letra, como también de las comunicaciones que se hicieren en su consecuencia para cumplimiento y ejecución de lo resuelto.

Art. 15. Cuando la Asesoría necesitare, para fundar sus informes, examinar precedentes de documentos ó expedientes archivados, los reclamará directamente al Archivo que corresponda por medio de papeletas firmadas por el Coasesor. Los papeles ó expedientes así reclamados serán entregados personalmente por un Oficial del Archivo al Registrador de la Asesoría, quien pondrá el recibo de su fecha al pie de la papeleta del pedido para que sirva de resguardo al Archivero, y recogerá esta papeleta cuando sean devueltos dichos antecedentes.

Art. 16. Cuando en cualquiera Centro directivo se acordare intentar por parte de la Hacienda pública acciones civiles ó criminales ante los Tribunales de justicia ó contencioso-administrativos, se pasará el expediente original que motivare el acuerdo á la Asesoría para

que en su vista adopte ó proponga al Ministro las resoluciones que correspondan. El expediente será devuelto á la Dirección de su procedencia cuando en él recayere la resolución final, ya por sentencia firme de los Tribunales, ó por haberse declarado definitivamente no haber lugar á proceder en justicia.

Art. 17. Las comunicaciones que la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo dirigiere al Ministro de Hacienda participando la interposición de una demanda contra resoluciones gubernativas de este Ministerio ó de alguno de los Centros directivos dependientes del mismo, pasarán inmediatamente á la Asesoría general con el expediente original que hubiere producido la resolución reclamada. En su vista, la Asesoría redactará las instrucciones oportunas para la defensa de la Administración, que remitirá al Fiscal del Tribunal al propio tiempo que lo haga del expediente al Presidente del mismo.

Art. 18. Cuando el Ministro de Hacienda considere oportuno usar de la facultad reservada al Gobierno por el art. 40 de la ley orgánica del Consejo de Estado de 17 de agosto de 1860,



podrá encargar al Asesor general, en calidad de Comisario especial, la defensa del Estado ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Este acuerdo será comunicado al Presidente de dicha Sala por conducto del Tribunal, y al Fiscal del mismo, con designación del funcionario de la Asesoría, á quien deberán hacerse las notificaciones en el negocio á que se refiere el encargo.

Art. 19. Cuando el Asesor general, para desempeñar la comisión especial á que se refiere el artículo anterior, asistiere á la vista pública de un pleito en la Sala de lo contencioso-administrativo, ocupará en los estrados el sitio correspondiente al Fiscal del Tribunal con todas las consideraciones debidas al mismo, y vestirá traje de toga del modelo aprobado por el Real decreto de 22 de febrero de 1865 para el Fiscal del Consejo de Estado.

Art. 20. Las reclamaciones de particulares sobre derechos litigiosos, á que se refieren el Real decreto de 20 de septiembre de 1851 y el art. 1.º del decreto de 9 de julio de 1869, serán remitidas siempre, con los antecedentes necesarios para poder resolverlas, á la Aseso-

ría general de este Ministerio, que comunicará su resolución, con las instrucciones que el caso requiera, dentro del término preciso de cuatro meses, marcado por el art. 6.º del primero de dichos decretos.

Art. 21. Serán también dirigidas á la Asesoría general de este Ministerio las consultas de los Fiscales de los Tribunales á que se refieren el art. 2.º del citado decreto de 9 de julio de 1869 y la Real instrucción de 25 de junio de 1851; y el Asesor comunicará su resolución, con las instrucciones oportunas, dentro del término de los dos meses marcado por el art. 3.º de dicho decreto.

Art. 22. En los expedientes en que el Asesor ejerza las atribuciones resolutivas que le competen, su decisión causará estado en la vía gubernativa, y sólo podrá ser reclamada por la vía contenciosa en los términos establecidos por las disposiciones vigentes con relación á los demás Centros directivos de iguales atribuciones.

Art. 23. A fin de que el Asesor general pueda ejercer las atribuciones que le están señaladas por los párrafos segundo, tercero,

cuarto, quinto y sexto del decreto de su restablecimiento de 26 de julio último, se declaran vigentes, en todo lo que no estuviere expresamente derogado, las Reales órdenes de 24 de enero de 1850 y demás disposiciones posteriores referentes á las relaciones de la antigua Dirección general de lo Contencioso, y de la Asesoría del Ministerio de Hacienda con los Tribunales de Justicia y Fiscales del fuero común y demás Autoridades y dependencias del servicio público.

Art. 24. Siempre que el Asesor general de Hacienda se dirigiere por medio de circulares á los Jefes del Ministerio fiscal en los Tribunales de Justicia, comunicará copia literal de su circular al Fiscal del Tribunal Supremo para su conocimiento y efectos consiguientes, excitando su cooperación á los fines de la misma circular en interés del servicio del Estado.

Art. 25. Las comunicaciones oficiales del Asesor general para los Presidentes y Fiscales del Tribunal Supremo, del de Cuentas y del Consejo de Estado, serán siempre de orden y por conducto del Ministro de Hacienda. Las que se dirijan á todas las demás dependencias



de este Ministerio y á las Autoridades gubernativas de las provincias, serán directas.

Art. 26. El Asesor general procederá inmediatamente á redactar y someter á la aprobación del Ministro de Hacienda el Reglamento interior de la Asesoría, fijando las reglas á que habrá de sujetarse la organización de los servicios y la tramitación de los expedientes de su dependencia.

Madrid veinte y seis de Agosto de mil ochocientos setenta y cuatro.

FRANCISCO SERRANO.

*El Ministro de Hacienda,*  
JUAN FRANCISCO CAMACHO.



## REAL DECRETO

DE 10 DE MARZO DE 1881, REORGANIZANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONTENCIOSO Y CREANDO EL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO.

### EXPOSICIÓN.

SEÑOR: La importancia verdaderamente excepcional de los asuntos encomendados al Ministerio de Hacienda, ora por lo que afectan siempre al Tesoro público, ora por la necesidad de aplicar frecuentemente al despacho de los mismos los preceptos del derecho común, han hecho necesario en todo tiempo y en una ú otra forma el asesoramiento y demás funciones propias de Abogados.

Así, la historia de nuestra Administración, desde la antigua Superintendencia general de Hacienda y los Asesores que tuvieron después sus atribuciones en lo gubernativo, consigna la existencia de diversas Asesorías agregadas á varios servicios, aisladamente unas veces y en grupos más ó menos importantes otras, has-





ta que en 1849 el ilustre hombre de Estado encargado del Ministerio que hoy dirijo por la confianza de V. M., las reunió en un Centro, que denominó Dirección general de lo Contencioso del Estado. Fué su objeto, y así lo expuso á la consideración del Monarca, dar unidad al sistema y procurar la homogeneidad en las doctrinas y principios que ante los Tribunales han de sustentarse en nombre de la Hacienda, y deben prevalecer también en las consultas reclamadas por los varios Centros de la Administración activa.

Aquella Dirección, cuyos deberes y atribuciones consultivas y resolutivas, así como sus resoluciones con el Ministerio fiscal, defensor de los derechos é intereses del Estado ante los Tribunales, estableció con un orden y una precisión magistrales el Real decreto de 28 de diciembre del año citado, y completaron después varias disposiciones de secundaria importancia, perdió tan sólo su nombre en realidad cuando la suprimió el Real decreto de 29 de diciembre de 1854.

Creóse al propio tiempo la Asesoría general de este Ministerio que, con la misma organiza-

ción é idénticas facultades en cuanto á la consulta gubernativa y la dirección de lo contencioso, dominó en la defensa de los derechos del Estado las dificultades que suscitaron en 1854 novedades tan importantes, entre otras muchas, como la desamortización civil y eclesiástica, y la necesidad en que se halló desde que empezó á regir en 1856 la ley de Enjuiciamiento civil, hace pocos días reformada, de prestar mucho mayor cuidado y diligencia que antes á los numerosos pleitos que ponen derechos é intereses del Estado en judicial controversia.

Esto no obstante, y después de algunas reformas que disminuyeron la importancia de la Asesoría general, fué ésta suprimida por el decreto de 1869, estableciendo, para llenar los servicios que corrían á su cargo, Oficiales letrados en la Secretaría de este Ministerio y en varias Direcciones, que no lograron llenar el vacío que dejó aquella supresión.

Á remediar los efectos que aquel decreto produjo acudió el Ministro que, entonces como ahora, estaba encargado de este Ministerio, proponiendo los decretos-leyes de 26 de julio y 26 de agosto de 1874, que restableciendo la

Asesoría general con la plenitud de sus anteriores facultades consultivas y resolutivas, han tenido importante parte en la reconstrucción de la normalidad en los servicios de todos los ramos de este Ministerio, y han puesto á salvo del riesgo que seguramente corrían los derechos del Estado controvertidos en los numerosos pleitos y causas pendientes ante los Tribunales de Justicia.

Con arreglo á esos decretos, y al Real decreto-ley también de 14 de agosto de 1876, la Asesoría general-Dirección general de lo Contencioso del Estado, con su personal propio, con el del Cuerpo de Letrados que se puso á sus órdenes, nombrado previa oposición, y dedicado principalmente al despacho del Negociado de Derechos reales en las Administraciones económicas y en la Dirección de Contribuciones, y con el auxilio del Ministerio fiscal ante los Tribunales ordinarios, tiene á su cargo todo lo referente á la consulta de los negocios de la Administración de Hacienda en que se versan cuestiones de derecho civil ó administrativo, y la dirección de todos los negocios contenciosos del Estado, así civiles como cri-



minales, que se ventilan ante los Tribunales ordinarios. La mera enunciación de que las consultas que emite al año pasan de mil en el Centro directivo, sin contar con las innumerables en provincias; de que son más de mil también los pleitos en la actualidad pendientes, y en que es parte el Estado; y de que lo es igualmente en multitud de importantes causas criminales, cuyo número no permite fijar la falta de datos, persuade, desde luego y á un tiempo, de lo transcendental y grave del servicio que está llamado á prestar dicho Centro, y de la imposibilidad absoluta de que le cubra con la prontitud y diligencia que cada vez demandan con más razón y de consuno los intereses del Estado y de los particulares, atendiendo á lo corriente y dominando lo atrasado, si no se acude desde luego á todos aquellos medios que, por más que no sean completos, puedan conducir á obtener, ó al menos á preparar, tan importante resultado.

Y no sólo se ha de acudir á aquellos medios para que el servicio esté cubierto como cumple al buen nombre de la Administración y á la conveniencia de los administrados, sino tam-

bién, y muy particularmente, porque el material interés del Tesoro lo reclama con tanta perentoriedad como justificada razón. No basta que esté fortalecido el presupuesto de ingresos; que haya impuestos creados y vigorizados, y que se dediquen á su administración y recaudación voluntad y afán inmejorables, sino que es preciso evitar, al propio tiempo, que salgan del Tesoro, ó dejen de ingresar en él, sumas de importancia por falta de la oportuna y enérgica defensa de los derechos del Estado.

El Ministerio fiscal procura, con la mejor voluntad y sin omitir esfuerzo, llenar los deberes que le impone la representación en juicio de la Hacienda; pero salta á la vista que esta representación, aislada y circunscrita á negocios determinados, no es suficiente para garantizar los intereses del Estado; y si se logra que lo sea en las ocasiones y en los puntos en que no hay una aglomeración excesiva de pleitos y causas, no ha de poder obtenerse donde y cuando la aglomeración existe y llega á constituir una imposibilidad material, atendidas las privativas funciones que á dicho Ministerio están encomendadas.

Cuando estos casos se presentan, el riesgo de los derechos del Estado es grande; y no debe dejar de ocurrir á él el Ministro á quien, en primer término, están encomendados su guarda y su tutela.

Ni es menos evidente que aquellas funciones han de privar á los Fiscales del tiempo indispensable para consagrar á la especialidad de los negocios de Hacienda el estudio y preparación necesarios.

Sería verdaderamente prodigioso que en medio de sus múltiples y diversas ocupaciones pudiera llegar el Ministerio fiscal á establecer en la defensa de los intereses del Estado, ante los Tribunales de justicia, aquella unidad de sistema y aquella homogeneidad de doctrinas y principios á que aspiraba el autor de la reforma de 1849, cuando existía la jurisdicción especial de Hacienda y contaba con el auxilio del Ministerio fiscal del mismo ramo.

Tanto menos puede esperarse esto ahora, cuanto que, sin esos elementos especialísimos que venían utilizándose para la defensa del Estado, es cada día más extenso el terreno en que se enlazan, se rozan ó se cruzan los derechos



y los intereses públicos con los de los particulares; es cada vez mayor el número de los expedientes graves que abruman á todas las dependencias del Ministerio de mi cargo, y el interés particular, puesto en continua y fácil vigilancia, acude á todos los medios, que como nunca tiene expeditos, para luchar contra los derechos é intereses del Estado.

Dentro de los límites de la legalidad vigente, en que tiene el deber de mantener los servicios administrativos, como el Gobierno todo, el Ministro que suscribe no puede desde luego atender al propósito que hoy le guía con la amplitud que considera necesaria y procurará por los procedimientos oportunos: sólo le es dado, entre tanto, acudir á lo más perentorio y preparar el camino á ulteriores perfeccionamientos, reuniendo todos los elementos hoy dispersos de consulta, de derecho y de defensa en determinados Centros y Dependencias de este Ministerio, y organizando un Cuerpo facultativo de Abogados del Estado que, precedidos de garantías de suficiencia, y estimulados por las ventajas de la escala cerrada y el riguroso ascenso, y defendidos por una estabilidad reglamentada,

logre, bajo una dirección única, entendida, perseverante y enérgica, todas las condiciones que reclama el importante servicio á que se destina.

Por fortuna, la base para la creación de ese Cuerpo facultativo existe, y sólo hay que proceder á su organización.

Los actuales empleados facultativos de la Asesoría-Dirección general de lo Contencioso, el Cuerpo de Oficiales letrados de Hacienda, creado en 1868, y los diferentes funcionarios que con el carácter de Abogados desempeñan sus cargos en la Fiscalía de la Deuda y en otros Centros de este Ministerio, constituyen, por de pronto, suficiente base para el Cuerpo facultativo que se crea; y como lejos de lastimar derecho alguno á los que han de venir á constituirle, se mejoran las condiciones de todos, y notablemente las de la mayor parte de ellos, sin gravamen tampoco de ningún género para el Tesoro público, nada hay que se oponga á la ejecución de un pensamiento que entraña seguramente la base de una de las mejoras más capitales en el servicio administrativo del Ministerio de mi cargo.

Consultar en derecho con unidad de doctri-

na y de criterio; defender del mismo modo los intereses del Estado ante los Tribunales, así en lo civil como en lo criminal, supliendo y auxiliando siempre que sea necesario la representación que está encomendada al Ministerio fiscal, y vigilar toda transgresión de ley que redunde en daño del Tesoro ó del mejor servicio: tales han de ser las importantes y principales tareas de este Cuerpo bajo la dependencia del Centro que hoy existe, y que para mayor precisión y claridad usará en lo sucesivo, como en otros tiempos, la denominación de *Dirección general de lo Contencioso del Estado*; todo sin perjuicio de las demás funciones que á este Centro y al Cuerpo de Letrados están encomendadas por las disposiciones vigentes.

Fundado en las consideraciones expuestas, el Ministro que suscribe tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 10 de marzo de 1881.

SEÑOR:

Á L. R. P. DE V. M.,

JUAN FRANCISCO CAMACHO.



## REAL DECRETO.

En virtud de las razones que Me ha expuesto el Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º La actual Asesoría general del Ministerio de Hacienda-Dirección general de lo Contencioso del Estado, se denominará en lo sucesivo *Dirección general de lo Contencioso del Estado*, y funcionará á las inmediatas órdenes del Ministro de Hacienda.

Art. 2.º Con arreglo á lo dispuesto en la ley de 10 de enero de 1877, corresponde á la Dirección general de lo Contencioso:

1.º La dirección de todos los negocios contenciosos del Estado que se ventilen ante los Tribunales ordinarios.

2.º Dar dictamen, siempre que se trate de intentar alguna acción ante los Tribunales de justicia ó administrativos á nombre ó en contra del Estado, por virtud de los expedientes

que se instruyan en la Administración central del Ministerio de Hacienda.

3.º Acordar las instrucciones que deban darse al Ministerio fiscal en cuanto á los pleitos y causas que interesen á la Hacienda pública.

4.º Adoptar ó proponer al Ministerio, según los casos, las resoluciones que correspondan cuando se hubiere dispuesto por cualquier Centro directivo intentar, por parte de la Hacienda pública, acciones civiles ó criminales ante los Tribunales de Justicia ó contencioso-administrativos.

5.º Solicitar á nombre del Estado y ante los Tribunales correspondientes la declaración de nulidad de las sentencias dictadas en pleitos de interés del mismo, cuando no se hayan observado en ellas las formalidades establecidas por el art. 2.º de la ley de 10 de enero de 1877.

6.º Retirar ó abandonar cualquiera acción en nombre del Estado, previa autorización por Real orden expedida por el Ministerio á que corresponda el asunto litigioso.

7.º Seguir la correspondencia con los Fis-

cales del Tribunal Supremo y del de Cuentas, así como con los Fiscales de las Audiencias y Juzgados.

8.º Promover los recursos de casación que procedan en interés de la ley, en los negocios en que se interese Hacienda pública.

9.º Promover asimismo el juicio de responsabilidad, cuando haya lugar á ello, contra los Magistrados y Jueces que hubiesen fallado en los negocios de Hacienda.

10. Emitir su dictamen en todos los negocios de la Administración Central del Ministerio de Hacienda en que se versen cuestiones de derecho civil ó administrativo.

11. Informar en derecho acerca de todos aquellos asuntos en que, con arreglo á las leyes ó disposiciones vigentes, sea obligatoria la audiencia de Letrados, así como en los contratos sobre rentas ó servicios públicos, y en aquéllas que tengan por objeto adquirir fondos ó atender al pago de obligaciones del Estado con garantía ó arriendo de las mismas rentas.

Art. 3.º Corresponde también á la Dirección de lo Contencioso:

1.º Vigilar y cuidar de que se sostengan



debidamente ante los Tribunales ordinarios y administrativos los derechos y los intereses de la Hacienda pública en los negocios de toda clase que pendan en los mismos, dictando las disposiciones oportunas para lograr aquel objeto, y auxiliando y coadyuvando siempre que lo considere necesario al Ministerio fiscal en el desempeño de la representación en juicio del Estado, que le está conferida por las disposiciones vigentes.

2.º Procurar que se prosigan y terminen con toda la posible prontitud las causas criminales en que sea parte la Hacienda pública.

Art. 4.º Para desempeñar los diferentes servicios encomendados á la Dirección de lo Contencioso, y para todos los que ahora ó en lo sucesivo exijan la intervención de Letrado, según las disposiciones vigentes, se crea un Cuerpo de Abogados del Estado.

Art. 5.º Este Cuerpo facultativo, que estará á las inmediatas órdenes del Director general, se compondrá:

1.º De los actuales empleados facultativos de la Asesoría general del Ministerio-Dirección general de lo Contencioso del Estado.

2.º De los empleados que, con el carácter de Letrados, prestan sus servicios en varias Direcciones del Ministerio de Hacienda.

3.º De los que constituyen el Cuerpo de Oficiales letrados, creado en 1868.

4.º De los que en adelante ingresen en el nuevo Cuerpo con arreglo á las disposiciones del presente decreto.

Art. 6.º El Cuerpo de Abogados del Estado constituirá una carrera especial, en la que se ingresará en adelante por oposición.

El ascenso será por antigüedad; pero de cada tres vacantes podrá proveerse una por elección entre los individuos de la clase inmediatamente inferior.

Art. 7.º Los individuos del Cuerpo no podrán ser separados del mismo sino en virtud de expediente gubernativo instruído con audiencia del interesado y por las causas que determine el Reglamento.

Art. 8.º El Director general de lo Contencioso no formará parte del Cuerpo de Abogados del Estado.

Art. 9.º El Ministro, á propuesta del Director general de lo Contencioso, distribuirá

el personal en los diferentes Centros y en las provincias, destinando á los Abogados del Estado, tanto con carácter permanente como accidental, á los puntos que, según las circunstancias y para el cumplimiento de las disposiciones vigentes, reclame el servicio público.

Art. 10. La Dirección de lo Contencioso procederá desde luego á formar el escalafón de los empleados que han de componer el Cuerpo de Abogados del Estado, y los que sean comprendidos en él disfrutarán desde luego de las ventajas y garantías establecidas en este decreto.

Art. 11. El Tribunal de oposiciones para proveer las vacantes que ahora ó en lo sucesivo resulten en el nuevo Cuerpo, lo constituirán el Director general de la Contencioso, como Presidente; dos Jefes de Administración del Cuerpo; un Abogado designado por el Colegio de esta corte, y un Jefe de Negociado de primera clase, que hará las veces de Secretario.

Art. 12. El Director de lo Contencioso y el Abogado del Estado de mayor categoría en la Dirección, tendrán respectivamente las mismas consideraciones y prerrogativas que los



Directores y segundos Jefes de las demás Direcciones generales.

Art. 13. El Ministro de Hacienda Me pondrá en breve término el Reglamento del Cuerpo de Abogados del Estado para su aprobación, previa la tramitación correspondiente, y dictará las disposiciones oportunas para la ejecución del presente decreto.

Dado en Palacio á diez de marzo de mil ochocientos ochenta y uno.

ALFONSO.

*El Ministro de Hacienda,*  
JUAN FRANCISCO CAMACHO.



## MINISTERIO DE HACIENDA.

---

### REAL ORDEN.

ILMO. SR.: He dado cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.) del proyecto de Compilación de las disposiciones vigentes en los diversos servicios que corren á cargo de esa Dirección general, que ha formado V. I. en cumplimiento de lo prevenido en el art. 13 del Real decreto de 10 de marzo último; y teniendo presente que el carácter de ley de algunas de dichas disposiciones no permite por ahora dictar reglas que respondan á la necesidad de que exista un criterio fijo y uniforme en la aplicación de aquellas disposiciones, S. M. el Rey se ha servido aprobar dicha Compilación, con arreglo á la cual dictará ese Centro directivo las instrucciones que crea necesarias,



De Real orden lo digo á V. I. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 de abril de 1881.

CAMACHO.

*Sr. Director general de lo Contencioso del Estado.*

# DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONTENCIOSO DEL ESTADO.

---

## COMPILACIÓN

DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES RELATIVAS Á LOS DIVERSOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONTENCIOSO DEL ESTADO, APROBADA POR REAL ORDEN DE ESTA FECHA.

Artículo 1.º La dirección de todos los negocios contenciosos del Estado que se ventilan ante los Tribunales ordinarios, corresponde á la Dirección general.

Art. 2.º El Director general podrá reclamar de los diferentes Ministerios y de las Direcciones generales dependientes de los mismos cuantos datos, noticias ó antecedentes crea necesarios para la mejor defensa del Estado.

Señalado en el art. 2.º de la ley de 10 de

enero de 1877 el plazo de tres meses para que la Dirección general evacue las consultas que le dirija el Ministerio fiscal y comunique su resolución, los datos, noticias ó antecedentes que pida á los Ministerios ó Centros directivos deberán facilitársele, salvo justa causa de imposibilidad, en el término de un mes.

Art. 3.º Las comunicaciones que el Consejo de Estado dirigiere al Ministerio de Hacienda participando la interposición de una demanda contra resoluciones gubernativas de este Ministerio ó de alguno de los Centros directivos dependientes del mismo, pasarán inmediatamente á la Dirección general con el expediente original que hubiere producido la resolución reclamada. En su vista, la Dirección redactará las instrucciones oportunas para la defensa de la Administración, que remitirá al Fiscal del Consejo al propio tiempo que lo haga del expediente al Presidente del mismo.

Art. 4.º Cuando el Ministro de Hacienda considere oportuno usar de la facultad reservada al Gobierno por el art. 40 de la ley orgánica del Consejo de Estado de 17 de agosto de 1860, podrá encargar al Director general,



en calidad de Comisario especial, la defensa del Estado ante el Consejo. Este acuerdo será comunicado al Presidente del mismo y al Fiscal, con designación del funcionario de la Dirección, á quien deberán hacerse las notificaciones en el negocio á que se refiere el encargo.

Art. 5.º Cuando el Director general, para desempeñar la comisión especial á que se refiere el artículo anterior, asistiese á la vista pública de un pleito en la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado, ocupará en los estrados el sitio correspondiente al Fiscal del Consejo, con todas las consideraciones debidas al mismo.

Art. 6.º El Ministerio fiscal, como representante del Estado ante los Jueces y Tribunales de la nación, estará obligado á consultar con la Dirección en todos los casos que crea graves, en la forma que previene la instrucción de 25 de junio de 1852. Es, sin embargo, obligatoria dicha consulta para el Ministerio público antes de entablar ó contestar demanda alguna á nombre de la Hacienda, salvo cuando ya hubiese recibido instrucciones al efecto y en caso de calificada urgencia, en los cuales debe-

rá proceder según corresponda en derecho, dando parte inmediatamente á la Dirección.

Art. 7.º El Ministerio fiscal, bajo su responsabilidad, elevará las consultas que determina el artículo anterior á la Dirección general de lo Contencioso, de quien para este efecto dependen, dentro de los quince días siguientes á la fecha en que tenga noticia, ó se le haga saber la existencia del pleito ó de la demanda en que tenga interés el Estado.

El Director general comunicará su resolución, ó la del Gobierno, según proceda, dentro de los tres meses siguientes, contados desde el acuse del recibo de la consulta, que no podrá demorarse por el Director más de cinco días. El Ministerio fiscal en todos sus grados hará constar en autos el día que eleva la consulta y el del acuse del recibo. No se reputará debidamente citado el Estado cuando no resulten cumplidos los requisitos que establece el párrafo anterior.

La citación y emplazamiento hechos al Ministerio fiscal en representación del Estado surtirán todos los efectos legales si, consultada la Dirección en los términos expresados, ésta de-

jara transcurrir los tres meses sin dar las instrucciones que considere convenientes.

Podrá pedirse á nombre del Estado, y se acordará por los Jueces y Tribunales, la nulidad de las sentencias en pleitos de interés del mismo cuando no se hayan observado las formalidades que determina este artículo, quedando reformado en tal sentido el 3.º del decreto de 9 de junio de 1869.

Art. 8.º Los Promotores fiscales elevarán las consultas de que trata el artículo anterior, dentro del plazo que prefiere y por conducto de los Fiscales de las Audiencias, sus Jefes inmediatos, al Director general de lo Contencioso, según está prevenido.

Art. 9.º Los Fiscales de las Audiencias las dirigirán, acompañadas de su informe, sin demora alguna á dicha Dirección, que acusará el recibo en el plazo que marca el párrafo primero del art. 6.º

Los Fiscales, por su parte, darán conocimiento á los Promotores de la fecha en que se haya acusado el recibo, para que lo hagan constar en autos.

Art. 10. Cuando las consultas sean de los



Fiscales de las Audiencias, el acuse de recibo se hará constar á petición suya, y lo mismo se practicará en el caso de que sea quien consulte el Fiscal del Tribunal Supremo.

Art. 11. Se abrirá un registro especial en la Dirección general de lo Contencioso, donde se anoten, en el mismo día de su entrada, las consultas del Ministerio fiscal y el asunto sobre que versen.

En dicho registro se tomará razón igualmente del acuse del recibo y de la contestación ó resolución de las consultas, rubricándose los asientos por el segundo Jefe de la dependencia al terminar los trabajos de cada día.

Art. 12. Cuando transcurran los cinco días que determina el art. 6.º para acusar el recibo de las consultas, el Fiscal del Tribunal Supremo y los de Audiencias lo advertirán á la Dirección general de lo Contencioso, quien, en el caso de no haberlo recibido, lo acreditará por certificación en forma librada por el segundo Jefe, con el *Visto Bueno* del Director, excitando al Fiscal que haya elevado la consulta á que lo reproduzca. Cuando el extravío se repita dos veces, se reproducirá por tercera y última

la consulta, dirigiéndola en pliego certificado por cuenta del Estado, haciéndose constar por el Fiscal todas estas circunstancias en los autos.

Art. 13. Cuando en cualquiera Centro directivo se acordare intentar por parte de la Hacienda pública acciones civiles ó criminales ante los Tribunales de Justicia ó contencioso-administrativos, se pasará el expediente original que motivare el acuerdo á la Dirección, para que en su vista adopte ó proponga al Ministro las resoluciones que correspondan. El expediente será devuelto á la Dirección de su procedencia cuando en él recayere la resolución final, ya por sentencia firme de los Tribunales, ó por haberse declarado definitivamente no haber lugar á proceder en justicia.

Art. 14. Para los efectos de lo dispuesto en el art. 3.º del Real decreto-ley de 14 de agosto de 1876, los Ministerios ó Centros directivos de quienes reclame antecedentes la Dirección general de lo Contencioso, darán recibo, por medio de los encargados del registro, de las comunicaciones que con tal objeto se dirijan. De igual manera se expedirá recibo por la Dirección de lo Contencioso de las órdenes,

comunicaciones y documentos que se le envíen por los Ministerios y Centros directivos.

Art. 15. Los Jueces y Tribunales no admitirán demanda alguna en asunto de interés del Estado, ni darán curso á las citaciones de evicción que se le hagan al mismo, sin que antes se acredite en autos, por medio de la certificación correspondiente, que los interesados han apurado la vía gubernativa y sídoles denegada, quedando sin efecto la limitación que establece el art. 9.º del Real decreto de 10 de junio de 1865.

Art. 16. No se reputará apurada la vía gubernativa para los fines del artículo anterior, sino cuando una Real orden haya puesto término al procedimiento, á menos que la Administración demore por más de seis meses la resolución final, en cuyo caso quedará libre la acción de los Tribunales ordinarios, luego que el particular interesado acredite en autos el transcurso de este plazo.

Art. 17. Las reclamaciones de particulares sobre derechos litigiosos, á que se refiere el artículo anterior, serán remitidas siempre con los antecedentes necesarios por los demás Centros



á la Dirección general de lo Contencioso, que comunicará la resolución del Gobierno con las instrucciones que el caso requiera, dentro del término preciso de seis meses, marcado por el citado artículo.

Art. 18. Reiterando lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1870, los Jueces y Tribunales no despacharán mandamiento de ejecución ni dictarán providencia de embargo contra las rentas y caudales del Estado.

Art. 19. Para retirar ó abandonar cualquiera acción en nombre del Estado, el Director general necesitará estar autorizado por una Real orden dictada por el Ministerio á que corresponda el asunto litigioso.

Art. 20. Siempre que el Director general se dirigiere por medio de circulares á los Jefes del Ministerio fiscal en los Tribunales de Justicia, comunicará copia literal de su circular al Fiscal del Tribunal Supremo para su conocimiento y efectos consiguientes, excitando su cooperación á los fines de la misma circular, en interés del servicio del Estado.

Art. 21. Las comunicaciones oficiales del Director general para los Presidentes y Fisca-

les del Tribunal Supremo, del de Cuentas y del Consejo de Estado, serán siempre de Real orden comunicadas. Las que dirija á las dependencias de los Ministerios y á las Autoridades gubernativas de las provincias, serán directas.

Art. 22. La Dirección general es el Centro directivo superior para la resolución en la esfera gubernativa de las cuestiones de derecho civil y administrativo en los expedientes que se instruyan en este Ministerio y en los otros Centros de la Administración superior dependientes del mismo.

Art. 23. El Director general, Jefe superior, depende inmediata y exclusivamente del Ministro de Hacienda y ejerce las atribuciones consultivas que le confiere el Real decreto de 10 de marzo último, en iguales términos que las demás Direcciones generales dependientes también de este Ministerio.

Art. 24. El Director general tiene el carácter de Autoridad superior inmediata para todos los efectos legales con relación á todos los empleados y dependientes de la Dirección, los cuales serán responsables ante él por las faltas que cometieren en el desempeño de sus cargos.

Art. 25. El nombramiento de Director general de lo Contencioso del Estado se hará de acuerdo con el Consejo de Ministros, por Real decreto refrendado por el de Hacienda.

Art. 26. En ausencias, enfermedad y vacante, reemplazará al Director general de lo Contencioso, en los negocios contenciosos, un Jefe superior del Ministerio de Hacienda, designado por el Ministro, que reúna la cualidad de Letrado. En las funciones puramente consultivas sustituirá siempre al Director general el segundo Jefe, según dispone el art. 4.º del Real decreto-ley de 26 de agosto de 1874.

Art. 27. El Reglamento interior determinará la clasificación y distribución de los Negociados en Secciones y la tramitación de los expedientes en unos y otras.

Art. 28. Los Jefes de Negociado serán personalmente responsables de las inexactitudes y errores de hecho que resultaren en los extractos y notas que firmen en los expedientes para los informes de la Dirección. La responsabilidad de los errores de derecho será exclusivamente del Director y Jefes de Sección en los informes que respectivamente autoricen.



Art. 29. Los Jefes de Negociado constituirán el Consejo interior de la Dirección, pero sin atribuciones propias ni más funciones que deliberar, sin voto resolutivo, sobre los asuntos que someta á su examen el Director cuando tuviere por conveniente reunirlo con este objeto. Ejercerá las funciones de Secretario del Consejo el Oficial de primera clase que al efecto fuere designado por el Director.

Art. 30. Cuando el Ministro mandare pasar á informe de la Dirección un asunto con carácter reservado, se expresará así en el decreto; y en este caso el Director formulará por sí mismo el informe á continuación inmediata de aquel decreto en el expediente, sin tramitación alguna. En un libro que se titulará de consultas reservadas, quedará copia literal del informe del Director, rubricada por el mismo.

Art. 31. Cuando el dictamen que la Dirección general diere á consulta del Ministro contenga una resolución que además de decidir el expediente que lo motive, haya de publicarse con el carácter de aplicación general á casos análogos, volverá el expediente á la Dirección, si el Ministro lo aprobare, para que redacte

dicha resolución en la forma de los Reales decretos-sentencias del Consejo de Estado, para su publicación en la *Gaceta* y *Colección legislativa*.

Art. 32. Cuando haya de oirse á la Dirección en los expedientes que se instruyan en las Direcciones generales, se usará la fórmula «Pase á la Dirección de lo Contencioso,» en decreto marginal que firmará el Director, marcando su fecha.

Art. 33. En la nota del Negociado que motivare este decreto se fijarán con toda precisión los puntos de derecho á que deberá contraer su informe la Dirección.

Ésta, sin embargo, si al examinar el expediente para razonar su dictamen hallare en él alguna circunstancia que considere de interés legal no comprendido en la consulta, podrá llamar sobre ella la atención del Director consultante.

Art. 34. A continuación de la nota á que se refiere el artículo anterior pondrá la Dirección su informe, que será siempre razonado, para lo cual se pasarán íntegros por la Dirección consultante los expedientes, que le serán

devueltos, quedando en la Dirección copia literal de dicho informe, rubricada por el segundo Jefe.

Art. 35. En cada Dirección se llevará un registro especial de los expedientes en que se consulte á la Dirección de lo Contencioso, en el cual se hará constar: primero, el objeto del expediente; segundo, las personas ó corporaciones que en él intervengan como partes interesadas; tercero, la fecha del decreto mandándolo pasar á la Dirección, y cuarto, las de su entrega y devolución.

Art. 36. De la resolución definitiva que se dictare en todo expediente en que se hubiese oído á la Dirección de lo Contencioso, se pasará á ésta copia íntegra y á la letra, como también de las comunicaciones que se hicieren en su consecuencia para cumplimiento y ejecución de lo resuelto.

Art. 37. Cuando la Dirección de lo Contencioso necesitare para fundar sus informes examinar precedentes de documentos ó expedientes archivados, los reclamará directamente al Archivo que corresponda por medio de papeletas firmadas por el segundo Jefe. Los



papeles ó expedientes así reclamados serán entregados personalmente por un Oficial del Archivo al Registrador de la Dirección, quien pondrá el recibo de su fecha al pie de la papeleta del pedido, para que sirva de resguardo al Archivero, y recogerá esta papeleta cuando sean devueltos dichos antecedentes.

Art. 38. En los expedientes en que el Director ejerza las atribuciones resolutivas que le competen, su decisión causará estado en la vía gubernativa, y sólo podrá ser reclamada por la vía contenciosa en los términos establecidos por las disposiciones vigentes con relación á los demás Centros directivos de iguales atribuciones.

Art. 39. Se hacen extensivos á todos los negocios civiles del Estado que pendan en los Tribunales, cualquiera que sea el ramo de la Administración á que pertenezcan, las disposiciones de la presente Compilación y las de los reglamentos é instrucciones que en la misma se mencionan.

Art. 40. El Director general de lo Contencioso del Estado dictará las instrucciones necesarias para la ejecución de los servicios que

están encomendados al Centro de que es Jefe.

Art. 41. Quedan derogadas todas las disposiciones que no sean de ley y que no estén comprendidas en esta Compilación.

Madrid 16 de abril de 1881.

*El Director general de lo Contencioso del Estado,*

JOSÉ GALLOSTRA.

S. M. aprueba esta Compilación.—  
CAMACHO.

## REAL ORDEN

APROBANDO EL REGLAMENTO DEL CUERPO DE ABOGADOS  
DEL ESTADO.

ILMO. SR.: En vista del Reglamento del Cuerpo de Abogados del Estado, que se ha formado á virtud de lo prevenido en el art. 13 del Real decreto de 10 de marzo último; y tomando en consideración el dictamen emitido por la Seccion de Hacienda del Consejo de Estado, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar el referido Reglamento.

De Real orden lo digo á V. I. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid diez de mayo de mil ochocientos ochenta y uno.

CAMACHO.

*Sr. Director general de lo Contencioso del Estado,*





## REGLAMENTO

DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO, QUE CREÓ EL  
REAL DECRETO DE 10 DE MARZO ÚLTIMO.

Artículo 1.º El Cuerpo de Abogados del Estado, según lo dispuesto en los artículos 4.º y 6.º del Real decreto de 10 de marzo de este año, constituye una carrera especial facultativa de escala cerrada, en la que se ingresará por oposición y se ascenderá de grado en grado por antigüedad, reservándose un turno de cada tres vacantes á la elección entre los individuos de la clase inmediata inferior.

Art. 2.º El Jefe de este Cuerpo es el Director general de lo Contencioso del Estado, según el art. 5.º del citado Real decreto.

Art. 3.º Los Abogados del Estado tendrán los derechos, categorías y sueldos de los demás empleados de las carreras civiles de la Administración pública, empezando por la catego-

ría de Oficiales de segunda clase cuando así se disponga en la planta correspondiente.

Art. 4.º Los Abogados del Estado desempeñarán en el Centro directivo y en las provincias las funciones propias de las facultades contenciosas y consultivas á que se refieren los artículos 2.º y 3.º del Real decreto de 10 de marzo último, ateniéndose en el desempeño de aquéllas á lo que establezcan las leyes y disposiciones vigentes y las instrucciones especiales que les comuniquen el Ministro de Hacienda y el Director general de lo Contencioso.

Art. 5.º Los Abogados del Estado que presen sus servicios en otros Centros ó dependencias que no sean la Dirección general de lo Contencioso, desempeñarán en ellos las funciones que les correspondan, según las disposiciones vigentes, ó las que se les pueda atribuir en lo sucesivo, y estarán directamente á las órdenes del Jefe de la Oficina respectiva en todo lo relativo al servicio que en la misma hayan de prestar, pero dependiendo siempre del Director general de lo Contencioso en lo relativo á la organización y funciones peculiares del Cuerpo á que pertenecen.



Art. 6.º Donde se reuniesen dos ó más Abogados del Estado para prestar sus servicios, tendrá el carácter de Jefe el de mayor categoría oficial, y en igualdad de categoría el más antiguo en la misma. El considerado como Jefe se comunicará oficialmente con la Dirección para todos los efectos que procedan.

Art. 7.º Para el desempeño de los servicios encomendados al Cuerpo se dictarán disposiciones especiales.

Art. 8.º La oposición tendrá lugar entre los aspirantes que presenten título que les habilite para el ejercicio de la abogacía, acompañado de sus hojas literarias y de los demás documentos que acrediten los méritos y servicios que puedan tenerse en cuenta en igualdad de circunstancias de aptitud.

Art. 9.º La oposición para el ingreso se verificará en Madrid, ante el Tribunal que determina el art. 11 del citado Real decreto de 10 de marzo.

Art. 10. Los ejercicios de oposición consistirán:

1.º En contestar durante media hora, por lo menos, á diez preguntas sacadas por suerte

sobre Derecho civil, mercantil y penal, Procedimientos, Derecho canónico y administrativo, y Teoría y práctica de lo contencioso-administrativo.

2.º En emitir dictamen acerca de un expediente administrativo ó consulta en Derecho sobre pleito ordinario ó contencioso-administrativo, entre los que de antemano se escojan por el Tribunal, previo estudio en un plazo de seis horas y consultando los Códigos y Colecciones legislativas necesarios.

3.º En un informe oral, con igual preparación, sobre temas previamente designados relativos á negocios de la jurisdicción ordinaria civil ó criminal ó de la contencioso-administrativa.

Art. 11. El Tribunal, con presencia de los méritos de los opositores, formará una lista de los aprobados, cuyo número no podrá exceder del de las vacantes existentes al hacerse la clasificación definitiva, y de otros tres más.

El Ministro de Hacienda nombrará por el orden de preferencia que obtengan los aprobados, reservándose á los que no fuesen colocados desde luego el derecho á ocupar las vacantes que

ocurran en lo sucesivo, dentro del mismo orden de preferencia.

Art. 12. La elección para el ascenso en cada tercera vacante será libre dentro de la categoría inmediata inferior; pero antes de acordarla se oirá al Director general de lo Contencioso, como Jefe del Cuerpo, para que manifieste las notas que por su aptitud, aplicación y conducta hubieran merecido y tuviesen consignadas en sus expedientes respectivos aquellos individuos entre quienes pueda recaer la elección.

Art. 13. El Escalafón del Cuerpo de Abogados del Estado es la lista general y ordenada de todos los individuos que le constituyen, hecho y aprobado con arreglo á las disposiciones vigentes en cumplimiento del art. 10 del Real decreto de 10 de marzo último. Se publicarán por la Dirección todos los años las rectificaciones que procedan en dicho Escalafón antes del día 10 de enero, y se oirán todas las reclamaciones que se hicieren en un plazo de treinta días; después del cual, y no habiendo reclamaciones, se considerará definitivo para el año en que se publique.



Si hubiere reclamaciones se resolverán por el Ministro, oyendo á la Dirección. De estas resoluciones podrán alzarse los interesados por la vía contencioso-administrativa.

Art. 14. Según lo dispuesto en el art. 7.º del referido decreto de 10 de marzo, los Abogados del Estado no podrán ser separados del Cuerpo sino en virtud de expediente gubernativo, en el que se oirá al interesado.

Art. 15. La separación se hará á propuesta del Director de lo Contencioso del Estado, y con vista del expediente personal que cada individuo del Cuerpo ha de tener exactamente formado en la Dirección, y del especial que se instruya para los efectos del artículo anterior.

Art. 16. En el expediente personal de cada individuo del Cuerpo se harán constar, no sólo todos los antecedentes de la carrera literaria y oficial del mismo, sino también los servicios á que sucesivamente fuera destinado, el resultado que obtuviere en su desempeño, la calificación que anualmente hará el Director de estos servicios y del comportamiento de cada individuo, después de reunir los antecedentes y pedir los informes que crea oportunos; y por úl-

timo, cuanto pueda contribuir á formar concepto de la rectitud, aplicación é inteligencia de los interesados.

Art. 17. La separación por medio de expediente tendrá lugar en los casos siguientes:

1.º Cuando se haya impuesto al interesado por Tribunal competente cualquiera pena que afecte á su honra ó buena reputación.

2.º Cuando su conducta moral ó sus faltas en el servicio dieren lugar á reclamación oficial ó privada, y se justifique habersele impuesto anteriormente más de una corrección disciplinaria.

3.º Cuando, por desobediencia manifiesta á las órdenes de sus superiores jerárquicos, se ocasionen perjuicios á la Hacienda.

Y 4.º Cuando habiendo sido destinado á los diferentes servicios propios del Cuerpo de Abogados, resultare la incapacidad del interesado por las notas puestas en el expediente, con relación á cada uno de dichos servicios y según los informes de los Jefes inmediatamente encargados de los mismos.

Art. 18. Podrá concederse la excedencia á los individuos del Cuerpo por espacio de tres

años; pero al volver al servicio activo ocuparán el lugar con que figuraban en su respectiva categoría al obtener la excedencia, sin que se les otorgue ninguna otra ventaja.

Art. 19. Para obtener la excedencia de que se habla en el artículo anterior se solicitará del Ministro de Hacienda, que la concederá ó negará á propuesta del Director general de lo Contencioso.

Art. 20. Las excedencias no podrán concederse por más de tres veces y mediando un año al menos de una á otra concesión. Cualquiera que sea el tiempo porque se conceda cada vez, no pasará de tres años el total.

Art. 21. Si antes de terminar el plazo de la excedencia, contado desde el día siguiente al en qué se cesó en el último destino en el Cuerpo, no se solicitare la vuelta al servicio activo, se acordará la baja definitiva.

Art. 22. El Director general, como Jefe superior, además de proponer las separaciones según el art. 17 de este Reglamento, podrá acordar por sí ó proponer al Ministro los premios ó correcciones disciplinarias á que diere lugar en su caso la conducta de los individuos



del Cuerpo, con arreglo á lo que resulte de los expedientes respectivos.

Art. 23. Los premios consistirán en

Dar las gracias de oficio por el mérito contraído en algún servicio.

Dar las gracias, comunicándolo por circular á todos los individuos del Cuerpo.

Dar las gracias de Real orden, publicándose en la *Gaceta de Madrid*.

Proponer especialmente al Ministerio un Abogado del Estado para los turnos de elección, ó para alguna otra recompensa honorífica.

Art. 24. Las correcciones consistirán en

Reprensión de palabra.

Reprensión por escrito.

Reprensión de palabra ó por escrito, anotada en el expediente personal.

Suspensión de sueldo por término de cinco á treinta días.

Y suspensión de empleo.

Madrid 10 de mayo de 1881.—Aprobado por S. M.

CAMACHO.



## REAL ORDEN

DISPONIENDO QUE LOS INDIVIDUOS DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO NO ESTÁN SUJETOS, EN CUANTO Á LOS ASCENSOS, Á LA LEY DE PRESUPUESTOS DE 1876.

ILMO. SR.: He dado cuenta á S. M. del expediente promovido por esa Dirección general relativo á la forma en que deberán proveerse las plazas del Cuerpo de Abogados del Estado al ascender sus individuos con arreglo á la nueva planta aprobada por la ley de Presupuestos de treinta y uno de diciembre último; á la vuelta al servicio de algunos que se hallaban en situación de excedencia, conforme al Reglamento del Cuerpo, y á la creación de dos plazas del personal subalterno, una de Oficial de la clase de cuartos y otra de la de quintos; y

Resultando que suprimidas en la actual planta las de Oficiales terceros, creadas en su lu-



gar cuarenta de las de segundos, y hechas alteraciones en las demás clases, surgió la duda de si habían de proveerse con entera sujeción á la ley general, ó sea á las disposiciones de la ley y Real decreto de 21 de julio de 1876, ó, por el contrario, con arreglo á las especiales porque se rige el Cuerpo de Abogados del Estado, pudiendo en último caso proveerse siete de las plazas de Oficiales de primera clase en otros tantos individuos de aquél, que al publicarse la planta disfrutaban las de Oficiales de tercera:

Resultando que esa Dirección general manifiesta que aquella duda es más bien aparente que real, por cuanto, tratándose de individuos que han podido ingresar en la carrera administrativa por la clase de Oficiales de segunda, que hoy se les reconoce en el nuevo Presupuesto, no cabe en rigor estimar el ascenso á la categoría de primeros sino como una contingencia propia de los Cuerpos de escala cerrada, cuyos individuos unas veces se estacionan y otras reciben reparador impulso; añadiendo además que dichos ascensos son consecuencia forzosa del aumento consignado

en la vigente ley de Presupuestos, aumento que, sin duda, ha de redundar en beneficio de los que estén en el turno y lugar correspondiente, pues, de no ser así, dejarían de cumplirse los elevados fines que el legislador se propuso al reformar, en sentido favorable al Cuerpo, la planta anterior:

Resultando que la Intervención general del Estado, á la que se pasó á informe el expediente, fundándose en el art. 26 de la citada ley de Presupuestos de 21 de julio de 1876, ley de carácter general, opinó, respecto al primer punto consultado, que era el de la duda, que el Real decreto de 10 de marzo de 1881, que creó una carrera especial dando nueva organización al Cuerpo de Letrados, no es ni puede considerarse bastante para derogar lo mandado en aquella ley, y, por consiguiente, que para ascender en el mismo es condición indispensable haber servido dos años en la clase inmediata inferior:

Resultando que el Consejo de Estado en pleno informa, por el contrario, en sentido favorable á la consulta, sosteniendo que las disposiciones citadas por la Intervención no

son aplicables al Cuerpo de Abogados del Estado, entre otras razones porque la ley de Presupuestos no impedía ni impide la creación y organización de Cuerpos especiales, ya por medio de otra ley, ya por medio de un Real decreto:

Visto la citada ley de 21 de julio de 1876, Real decreto de 10 de marzo de 1881 y Reglamento orgánico de 10 de mayo del mismo año:

Considerando que al Cuerpo de Abogados del Estado, por su índole y naturaleza, no le comprende, con efecto, el art. 26 de la referida ley, por ser un Cuerpo especial de escala cerrada, cuyos individuos ingresan en él en virtud de oposición, y se sujetan, en cuanto á los ascensos, separaciones y excedencias, á reglas especiales y distintas á las que determinan los reglamentos generales:

Considerando que la ley citada, al no impedir la creación de Cuerpos especiales, como lo es el de Abogados del Estado, respetó implícitamente la excepción que á favor de los mencionados Cuerpos siempre ha existido, debiendo ser ésta la mente del legislador, y por lo



tanto, al interpretar aquélla no cabe restringir su recto espíritu:

Considerando que si á los empleados de Cuerpos especiales que necesitan ingresar por oposición ó acreditar circunstancias especiales, y para ascender que existan siempre vacantes, las cuales unas veces se producen con frecuencia y otras de tarde en tarde, se les equiparase á los que se rigen por disposiciones generales, resultarían de peor condición que éstas y desaparecerían las ventajas que reporta la Administración pública con la creación de dichos Cuerpos especiales:

Considerando que, según el criterio sentado, pueden sin infracción alguna legal llevarse á efecto los ascensos que propone esa Dirección general, evitando de ese modo que los destinos se sirvan en comisión y se desempeñen con un sueldo distinto del señalado en la ley de Presupuestos:

Considerando que en el Real decreto de 10 de marzo de 1881 y Reglamento de 10 de mayo del mismo año porque se rige el Cuerpo, no existe limitación alguna que impida la provisión de vacantes en la forma que se propone;

Considerando, respecto á la vuelta al servicio solicitada por uno de los individuos del Cuerpo de Abogados del Estado y de dos del suprimido de Letrados de Hacienda, que debe tomarse en consideración, en cuanto al primero, el art. 18 del Reglamento de 10 de mayo de 1881, y con relación á los segundos lo dispuesto en Reales órdenes de 24 de setiembre de 1868 y 9 de julio de 1869, que es la legislación en virtud de la cual alcanzaron, respectivamente, el beneficio de la excedencia: y

Considerando, finalmente, que la creación de las dos plazas de Oficiales de cuarta y quinta clase han de hacerse en su caso con arreglo al art. 6.º de la ley de 25 de julio de 1880; el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por esa Dirección general é informe del Consejo de Estado en pleno, se ha servido disponer:

Primero. Que el art. 26 de la ley de 21 de julio de 1876 no es aplicable á los Abogados del Estado, y por lo tanto que éstos ingresan, ascienden y quedan excedentes con arreglo á las disposiciones especiales porque se rige el Cuerpo, disfrutando desde luego y sin

necesidad de llevar los dos años los sueldos asignados para los respectivos cargos.

Segundo. Que pueden volver á prestar sus servicios en el Cuerpo los individuos que lo han solicitado, pero con arreglo á las disposiciones que regían en la época de su respectiva excedencia:

Y tercero. Que la creación de las dos plazas de Oficiales de cuarta y quinta clase, en su caso, ha de hacerse con arreglo al art. 6.º de la ley de 25 de julio de 1880.

Lo que de Real orden comunico á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid  
6 de mayo de 1882.

CAMACHO.

*Sr. Director general de lo Contencioso del Estado.*





## REAL DECRETO

DE 16 DE MARZO DE 1886, ORGANIZANDO EL SERVICIO  
CONTENCIOSO Y EL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO.

### EXPOSICIÓN.

SEÑORA: Elevados respetos y consideraciones de general conveniencia, relacionados con la conservación y mejor defensa de los derechos é intereses de la Hacienda y del Estado, que constituyen la fortuna pública, cuya importante gestión viene á este Ministerio especialmente confiada, recomiendan la necesidad de mejorar la organización de los diferentes servicios á su cargo, y muy señaladamente de los que tienen por objeto el examen y resolución de las numerosas y complejas cuestiones del orden jurídico, y la simultánea y combinada aplicación de aquellas leyes y disposiciones especiales que se establecen y modifican, según las

nuevas necesidades é intereses nuevos, que señalan el progreso de los pueblos de aquellos otros preceptos y disposiciones de la legislación común, de carácter universal y permanente, como lo son los eternos principios de derecho y de justicia que la sirven de fundamento.

A satisfacer tan preferente necesidad responde el establecimiento de la Dirección general de lo Contencioso; y de la importancia de los servicios que está llamada á prestar por la delicada índole de las funciones en que su intervención es necesaria, son demostración bastante las repetidas disposiciones de que ha sido objeto desde que en 1849 se organizó este Centro sobre las bases esenciales que conserva, hasta el Real decreto de 10 de marzo de 1881, dictado á propuesta del Ministro que suscribe, inspirándose en los mismos propósitos que hoy le animan.

Por la privilegiada condición de los intereses públicos, ora en razón de su origen, que sobre el país contribuyente pesa; ya por su especial destino, que no es ni debe ser otro que el de realizar obras y servicios públicos y dar cumplida satisfacción á necesidades de este orden,



en gran parte perentorias, debe revestir el procedimiento de la Administración general, cualesquiera que sean las materias que comprenda, los indispensables caracteres de claridad en los preceptos, sencillez en las formas y prontitud en las resoluciones; pero cuando el procedimiento, en su acción no interrumpida, encuentra al paso, antes que intereses eventuales y transitorios ó esperanzas inciertas de legitimidad dudosa, derechos perfectos de particulares, nacidos de una disposición legal ó de obligaciones y solemnnes contratos con la Administración celebrados, impónese ante todo la necesidad de mayor detenimiento en el exámen y preparación de las resoluciones, que serán tanto mejor obedecidas cuanto sean más equitativas y justas.

La interesante y vasta materia de la contratación de obras y servicios públicos, en sus formas y condiciones de legalidad, con ó sin la garantía de la subasta.

La no menos importante que á los bienes nacionales se contrae antes y después de su adjudicación, y la de los bienes que pertenecen al Estado por título singular del orden civil.

Las numerosas reclamaciones sobre excepción á las leyes desamortizadoras en respeto á derechos particulares de antiguo y solemne establecimiento, representando capellanías, patronatos y demás fundaciones piadosas.

Las declaraciones en punto á derechos pasivos y pensiones del Tesoro, aplicando la complicadísima legislación vigente en la materia, con disposiciones y preceptos que se repiten, se rectifican y aun se destruyen en parte y se contradicen; y los múltiples casos de análogas cuestiones que comprometen á un tiempo intereses de carácter público y derechos del orden privado, ofrecen un cuadro general de contiendas jurídicas, complejas y delicadas por su propia naturaleza, que no podrían resolverse con acierto sin especial competencia científica en los encargados de examinarlas, para procurar la conciliación apetecible siempre, mas no siempre fácil, entre los intereses generales del Estado, que no pueden ser desatendidos, y los derechos de los particulares, que deben ser escrupulosamente respetados.

Y si prescindiendo del procedimiento de la Administración general activa pasamos á la

esfera de los negocios contenciosos que tanto importan á la Hacienda y al Estado, así en el orden civil, como en el penal, como en el administrativo, resultará más evidente todavía la conveniencia y necesidad del Cuerpo de Abogados del Estado, encargado de la representación y defensa de los intereses de la Hacienda ante los Tribunales ordinarios.

Porque suprimidos los fueros y jurisdicciones especiales de Hacienda, pero mantenidas en los preceptos de las distintas leyes, las acciones y excepciones de antiguo origen en gran parte, con procedimientos de carácter privilegiado, como necesaria garantía en defensa de la fortuna pública, de que puedan citarse entre otros ejemplos: el derecho preferente de la Hacienda en concurrencia con otros acreedores; la brevedad en la prescripción y caducidad de créditos contra el Estado; la prohibición de renunciar ni transigir intereses y derechos del Estado; la necesidad de previa resolución administrativa antes de plantear acciones judiciales contra la Hacienda; el procedimiento sumario y rápido, utilizando la vía de apremio, para el reintegro de los alcances que persiga ó



de los créditos en favor suyo contra los particulares, con la notable circunstancia de que mientras los bienes de éstos son prenda obligada de embargo y expropiación judicial, los caudales del Tesoro no pueden ser embargados ni comprendidos en el procedimiento de apremio, ni distraídos del especial destino preestablecido en las leyes, cuyos ejemplos constituyen otras tantas excepciones á la ley común, así en el orden sustantivo como en el procesal, requiérese por ello como obligada circunstancia la de una representación y defensa de competencia especial científica, tanto más celosa é ilustrada en frente de la de los particulares, animada siempre de aquella diligente solicitud que despierta y estimula el interés propio en peligro, cuanto más empeñada es la contienda y más de temer el riesgo de conflictos posibles ocasionados á procedimientos frustratorios ó á resoluciones desacertadas, por el mero hecho de haberse de aplicar preceptos y disposiciones legales diferentes por el mismo Tribunal y en casos y negocios de perfecta analogía en el fondo.

No es de menos transcendencia, ciertamente,

el interés del Estado y de la Hacienda en las cuestiones atribuídas á la competencia de la jurisdicción especial contencioso-administrativa, que, así en la esencia de la materia como en punto á su organización, tan vivamente preocupa y tan divididas trae las opiniones de los publicistas y jurisconsultos en España y en Europa.

Sin prejuzgar en modo alguno las reformas para la buena organización de la llamada justicia administrativa, encomendada actualmente al Consejo de Estado en la Sala de lo Contencioso, y que aunque con jurisdicción excepcional é improrrogable conoce y funciona á un tiempo como Tribunal en primera y única instancia, como Tribunal de apelación y en determinados casos como Tribunal de casación, la enorme cifra de pleitos, procedentes en parte muy principal del departamento de Hacienda, pendientes de resolución, es motivo bastante á justificar la legítima preocupación del Ministro que suscribe, y de sus dignos compañeros, en presencia de la situación verdaderamente precaria de este importante servicio, que se hace preciso reorganizar en condiciones

adecuadas con la urgencia y perentoriedad que la opinión reclama en ventaja de la Administración general del Estado, cuyo prestigio y buen nombre compromete, y en beneficio de los muchos particulares á quienes importa, y cuyos intereses y derechos no es lícito mantener durante un plazo indefinido en las incertidumbres de un litigio.

Ocioso parece detenerse en demostrar el eficaz y provechoso auxilio que podrán prestar á la acción administrativa en este orden de negocios los Abogados del Estado, una vez reorganizado el Cuerpo en la forma adecuada y conveniente.

Entre tanto, las condiciones especiales de organización del personal dependiente de la Dirección general de lo Contencioso, con garantías para el ingreso en el Cuerpo y de estabilidad en los cargos; la constante comunicación que han de sostener estos funcionarios con el Centro directivo, cualesquiera que sean los centros y dependencias en que por conveniencia del servicio deban ser distribuídos, permiten esperar con fundamento que, no obstante la importancia y variedad de los numerosos



negocios en que están llamados á intervenir, se establezcan y mantengan los hábitos de tradición y jurisprudencia indispensables en la resolución de cuestiones jurídicas como único medio de ilustrar la acción de las Autoridades, depurando la bondad de las doctrinas, y de asegurar la uniformidad y acierto que tanto realizan el prestigio de las resoluciones.

Fundado en las anteriores consideraciones, el Ministro que suscribe, previo acuerdo con el de Gracia y Justicia y de conformidad con el Consejo de Ministros, y usando de la facultad que le concede el art. 1.º de la ley de 12 de enero último, tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Real decreto.

Madrid 16 de marzo de 1886.

SEÑORA:

Á L. R. P. DE V. M.

JUAN FRANCISCO CAMACHO.

## REAL DECRETO.

Tomando en consideración las razones que Me ha expuesto el Ministro de Hacienda, previo acuerdo con el de Gracia y Justicia y de conformidad con el Consejo de Ministros, y usando de las facultades concedidas en la autorización primera del art. 1.º de la ley de 12 de enero último,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º El servicio de lo Contencioso del Estado en el Ministerio de Hacienda estará á cargo de un Director general, Jefe superior de Administración Letrado, y, bajo su dependencia, de los individuos que componen el Cuerpo de Abogados del Estado.

Art. 2.º La Dirección ejercerá las funciones especiales de su cargo, á las inmediatas órdenes del Ministro, en los conceptos siguientes: primero, de consultas é informes en derecho en los diferentes ramos de la Administración central; segundo, de inspección y dirección de

los diferentes servicios que en la Administración y ante los Tribunales estén encomendados á los Abogados del Estado, á quienes se comunicarán las órdenes é instrucciones necesarias.

Art. 3.<sup>o</sup> Sin perjuicio de evacuar las consultas é informes en los expedientes de la Administración central en que el Ministerio de Hacienda lo considere conveniente, la Dirección general de lo Contencioso será necesariamente consultada:

Primero. En los expedientes que tengan por objeto la formación de los pliegos de condiciones para celebrar contratos, autorización de subastas y remates para toda clase de obras y servicios públicos de inmediato interés y á cargo directo del Ministerio de Hacienda, y la adjudicación de las obras y servicios subastados cuando su importe exceda de 30.000 pesetas en totalidad ó de 10.000 en cada año.

Segundo. En las autorizaciones para celebrar contratos sin las formalidades de subasta.

Tercero. En las reclamaciones á que dén causa la inteligencia, cumplimiento y ejecución del contrato ó la rescisión del mismo.



Cuarto. En las que procedan por consecuencia de la suspensión de las subastas en cualquiera género de contratos, y señaladamente en los de venta de bienes nacionales.

Quinto. En los expedientes de reclamación de créditos contra el Estado que deban abonarse en valores de la Deuda pública, y en los de cargas de justicia en que por el Centro especial del ramo se proponga el reconocimiento del crédito ó la subsistencia de la carga.

Sexto. En los recursos gubernativos de alzada en materia de clases pasivas.

Sétimo. En los expedientes sobre excepciones á la desamortización de los bienes pertenecientes á capellanías, patronatos y fundaciones de carácter familiar ó de sangre.

Octavo. En los expedientes en que se solicite franquicia ó exención de cualquiera clase de contribuciones ó impuestos, y en aquéllos en que haya de decidirse sobre casos ó conceptos de tributación que no se hallen taxativamente comprendidos en las leyes y reglamentos.

Art. 4.<sup>o</sup> Los individuos del Cuerpo de Abogados del Estado ejercerán sus funciones en la

forma que disponga el Ministro, á propuesta del Director general, según las necesidades del servicio, en los diferentes Centros de la Administración superior; en las Delegaciones de las provincias; ante el Tribunal Supremo; ante las Audiencias territoriales y de lo criminal en que así se determine; ante los Tribunales llamados á conocer en primera instancia en las causas y pleitos de interés de la Hacienda y del Estado, así como en los negocios contencioso-administrativos en dicha primera instancia.

Art. 5.º La representación y defensa en juicio de la Hacienda ante los Tribunales, á que se contrae el artículo anterior, estará á cargo de los Abogados del Estado; esto no obstante, el Ministerio fiscal continuará desempeñando las funciones que le son peculiares en las causas criminales, y continuará con la representación y defensa especiales que hoy le corresponden en los juicios civiles que interesen á personas inciertas, ausentes, menores é incapacitados, así como en todos los demás en que deba intervenir como representante de la ley.

Art. 6.º Los Abogados del Estado prestarán sus servicios bajo las órdenes inmediatas de los Jefes de las dependencias de la Administración á que estén inscritos, y de la Dirección de lo Contencioso en lo que se refiere á la representación del Estado en juicio.

Art. 7.º La Dirección general de lo Contencioso informará, proponiendo la resolución ministerial correspondiente:

Primero. Siempre que se trate de intentar á nombre del Estado acciones civiles ó criminales ante la jurisdicción ordinaria ó ante la contencioso-administrativa. Exceptúanse aquellos casos de calificada urgencia, á juicio del Abogado á quien corresponda la representación y defensa del Estado ante los Tribunales, en que podrá plantear desde luego la demanda, pero dando cuenta inmediatamente y remitiendo copia de la misma á la Dirección general de lo Contencioso.

Segundo. En los expedientes instruídos por reclamaciones de Derecho civil en la esfera gubernativa, como trámite previo para entablar demanda ordinaria contra el Estado.

Art. 8.º Los Abogados del Estado, además



de dar cuenta á la Dirección de las acciones que se entablen por ó contra la Hacienda ó el Estado y de los trámites principales del procedimiento, consultarán las dudas y dificultades que se les ofrecieren, así en cuanto al fondo como al procedimiento, y se ajustarán á las instrucciones que la Dirección les comunique, hasta la terminación de la causa ó pleito respectivos.

Art. 9.º La Dirección de lo Contencioso someterá á la aprobacióu del Ministro las instrucciones que estime procedentes para la mejor defensa del Estado, al remitirse por el Ministerio de Hacienda los antecedentes en las demandas contencioso-administrativas, y contestará las comunicaciones que, con ocasión de los mismos pleitos, se le dirijan por los representantes del Estado en defensa de la Hacienda.

Art. 10. La Dirección general de lo Contencioso dará instrucciones al Abogado representante y defensor del Estado en las causas y pleitos pendientes ante los Tribunales ordinarios, y cuidará de que se sostengan debidamente los derechos de la Hacienda, así como de la celeridad de los procedimientos. Procurará que



se promuevan los recursos de casación en los casos en que lo considere procedente, y el juicio de responsabilidad, en su caso, contra los Magistrados y Jueces por sus fallos en las causas y pleitos de interés del Estado, y mantendrá correspondencia constante con los Abogados del Estado.

Art. 11. En el mes de enero de cada año se formará por la Dirección de lo Contencioso un estado general en que se comprendan por su orden, con la debida separación, los pleitos y causas de interés del Estado, expresando el número de los terminados y de los pendientes, y acompañará al referido estado una Memoria, con las observaciones que se estimen necesarias en presencia del resultado de la estadística.

Art. 12. Siempre que el Ministro de Hacienda considere necesario usar de las facultades reservadas al Gobierno por el art. 40 de la ley orgánica del Consejo de Estado de 17 de agosto de 1860, podrá encargar al Director general de lo Contencioso, en calidad de Comisario especial, la defensa del Estado en el pleito contencioso-administrativo correspondiente, comunicando al Presidente de la Sala

de lo Contencioso y al Fiscal, el funcionario de dicho Centro directivo á quien habrán de hacerse las notificaciones.

Art. 13. Los Tribunales no admitirán demandas contra el Estado sin que se acredite previamente que ha sido planteada y resuelta en la esfera gubernativa la reclamación de los derechos á que haya de contraerse la demanda judicial.

Art. 14. Los Abogados del Estado, antes de plantear cualquiera demanda ó acción ante los Tribunales en representación del Estado y de la Hacienda, consultarán á la Dirección de lo Contencioso, á cuyas instrucciones deberán ajustarse durante el procedimiento. Consultarán igualmente en las demandas de particulares contra la Hacienda ó el Estado, dentro de los quince días siguientes á la fecha en que se les haya citado y emplazado para contestar, y esperarán la respuesta é instrucciones de la Dirección durante el plazo de tres meses, contados desde que se acuse el recibo de la consulta, que deberá serle comunicado en el plazo de cinco días. El Abogado del Estado hará constar en autos las fechas de la remisión de la



consulta y de acuse del recibo, debiendo entenderse que la omisión de los anteriores requisitos se estimará para todos los efectos legales como falta de citación y emplazamiento al Estado. Una vez transcurrido el plazo de tres meses, el Abogado del Estado, si apremiase el demandante, evacuará el traslado y contestará la demanda por el resultado de autos, dando cuenta inmediata á la Dirección. Los Abogados del Estado en los Tribunales y Juzgados elevarán sus consultas á la Dirección por conducto del Abogado del Cuerpo de mayor categoría que preste sus servicios en la Audiencia territorial, quien las remitirá con su informe.

Art. 15. En las causas sobre delitos de contrabando y defraudación ejercerán los Abogados del Estado, á nombre de éste, todas las atribuciones y cumplirán los deberes que impone al Ministerio fiscal el Real decreto de 20 de junio de 1852, mientras éste no sea reformado. En las demás causas de interés del Estado, el Abogado usará de las facultades y cumplirá los deberes que corresponden al acusador privado, sin perjuicio de la intervención propia del Ministerio fiscal como representante de la ley.

Art. 16. El Cuerpo de Abogados constituye una carrera especial facultativa.

Art. 17. El Jefe de Administración de mayor categoría en la Dirección sustituirá al Director general en casos de vacante, enfermedad ó ausencia.

Art. 18. Los ascensos en el Cuerpo se proveerán confiriendo, de cada tres vacantes, las dos primeras por antigüedad y la tercera por elección entre los individuos de la clase inmediata inferior que reunan las condiciones de Reglamento, entendiéndose que puede obtenerse el ascenso por antigüedad para cubrir vacante aunque no se cuenten dos años en la clase inferior inmediata. Esto no obstante, no podrá obtenerse ascenso por elección sin tener los dos años de servicios cuando haya quien cuente los expresados en dicha clase inferior. Las plazas de nueva entrada correspondientes á la última clase, se proveerán por medio de oposición.

Art. 19. Los Abogados del Estado no podrán ser separados sino en virtud de expediente gubernativo, con audiencia del interesado y por las causas que determine el Reglamento.

Art. 20. El Ministro, previo informe de la

Dirección de lo Contencioso, podrá conceder excedencia, por un plazo que no sea mayor de tres años, á los individuos del Cuerpo de Abogados del Estado que lo solicitaren.

Art. 21. El Ministro de Hacienda, á propuesta del Director general de lo Contencioso, distribuirá el personal del Cuerpo de Abogados entre las diferentes dependencias y Tribunales, según lo exijan las necesidades del servicio.

Art. 22. En el mes de enero de cada año se publicará en la *Gaceta* oficial de Madrid el escalafón general del Cuerpo de Abogados del Estado, á fin de que los interesados puedan hacer las reclamaciones que á su derecho convenga.

Art. 23. La Dirección de lo Contencioso formará y someterá á la aprobación del Ministro el Reglamento especial para el régimen del Cuerpo de Abogados del Estado, el cual contendrá además las instrucciones necesarias para el mejor cumplimiento de las funciones que le están atribuídas.

Art. 24. El Ministro de Hacienda igualmente, previo informe y propuesta de la Dirección de lo Contencioso, dictará las disposi-



ciones que sean necesarias para el más exacto cumplimiento del presente decreto.

Art. 25. El Ministro aprobará la planta del personal de la Dirección de lo Contencioso y Cuerpo de Abogados del Estado que exige la nueva organización de los servicios, refundiendo en ella todas las plazas del expresado Cuerpo y ajustándose al crédito autorizado para este efecto.

Art. 26. Quedan derogadas todas las disposiciones generales ó particulares anteriores al presente decreto y que se refieran á la organización, atribuciones y servicios de la Dirección de lo Contencioso.

Art. 27. El Ministro de Hacienda dará cuenta á las Cortes de este Real decreto.

Dado en Palacio á diez y seis de marzo de mil ochocientos ochenta y seis.

MARÍA CRISTINA.

*El Ministro de Hacienda,*

JUAN FRANCISCO CAMACHO.



## REAL DECRETO

DE 23 DE MARZO DE 1886, DICTANDO LAS REGLAS Á QUE HABRÁ DE ACOMODARSE EL PROCEDIMIENTO PARA SUSTANCIAR EN LA VÍA GUBERNATIVA LAS RECLAMACIONES DE LOS PARTICULARES, COMO TRÁMITE PREVIO Á LA VÍA JUDICIAL EN ASUNTOS DE INTERÉS DEL ESTADO.

### EXPOSICIÓN.

SEÑORA: Reconocidas por todos los publicistas y jurisconsultos en materia de procedimiento judicial las excelencias y ventajas de la transacción como medio preferible á cualquiera otro para poner término á los pleitos y contiendas entre particulares, explícase fácilmente y se comprende sin esfuerzo que, aunque sin contar con la misma unanimidad de pareceres en cuanto á su necesidad, figure no obstante el acto de conciliación como trámite previo é indispensable para plantear formalmente toda demanda judicial, según aparece consig-



nado en nuestra ley de Enjuiciamiento civil.

Y si bien por la naturaleza especial y realmente privilegiada de los intereses y derechos del Estado, que no pueden ser objeto de transacción, se exceptúan del requisito de la conciliación, que es la regla general y ley común en las demandas entre particulares aquéllas que se dirijan contra la Hacienda ó el Estado; como, por una parte, no sería justo que el Estado se viera comprometido en un litigio sin la preparación necesaria, y, por otra parte, puede en algunos casos ser tan perfecto el derecho del particular demandante que deba ser desde luego reconocido, de aquí la conveniencia y necesidad de que, á falta del acto de conciliación y como garantía en favor de los derechos del Estado, con ventaja posible para los particulares, se exija la reclamación previa en la vía gubernativa antes de entablar demandas contra el Estado.

Así se estableció por la Real orden de 9 de junio de 1847, siendo más tarde regularizada por el Real decreto de 20 de setiembre de 1851 y Reglamento del Tribunal de Cuentas del reino de 2 de setiembre de 1853, y recor-

dada en multitud de disposiciones legales hasta constituir en la vigente ley de Enjuiciamiento civil una excepción dilatoria.

El olvido de la índole especial de esa clase de expedientes ha desnaturalizado la vía gubernativa como trámite previo á la judicial, dándose á las reclamaciones de esa clase la misma tramitación establecida para todas las económico-administrativas, sin tener en cuenta la diferencia esencial que las distingue por su materia y objeto, puesto que si estas últimas deben someterse á las formas y solemnidades propias de un verdadero juicio, porque en ellas la Administración hace declaraciones de derecho, en las primeras tiene limitada su acción á reconocer ó negar el que pretende tener el particular reclamante, para que en su caso quede á éste expedita la vía judicial.

Resultado natural de esa confusión en el procedimiento es la ineficacia y esterilidad de la reclamación gubernativa como trámite previo á la judicial, ya porque la Administración provincial se limita generalmente en esa clase de expedientes á declarar su incompetencia remitiendo á los interesados á los Tribunales,

sin examinar los fundamentos de la pretensión para reconocer su justicia ó rechazarla, ya también porque, teniendo interés los reclamantes en evitar dilaciones y trámites, se conforman con lo acordado por la Administración provincial, y de este modo, sin conocimiento del Gobierno, única entidad que representa la persona jurídica del Estado, se encuentra éste comprometido en un litigio que en algún caso podría haber evitado, y sin la preparación necesaria en los demás.

Es, por lo mismo, de imperiosa necesidad restablecer el procedimiento adecuado al fin y objeto de esa clase de reclamaciones.

No es posible, por otra parte, someterlas todas á la misma tramitación, pues por el mero hecho de haberlas de origen distinto requiérense reglas diferentes, aunque obedeciendo unas y otras á idénticos principios y resueltas por una sola Autoridad. Pueden ser, en efecto, reclamaciones de derechos que no se rocen con expedientes administrativos de apremio que se hallen en curso, ó pueden, por el contrario, constituir verdaderas excepciones de Derecho civil en esos procedimientos administrativos; y



en las de esa última clase pueden referirse al procedimiento ordinario de que conoce la Administración provincial, ó á los de alcance y malversación de fondos que son privativos del Tribunal de Cuentas del reino; y según sean de una ú otra clase, la reclamación gubernativa debe acomodarse en su tramitación á reglas distintas, señaladas unas en el Real decreto de 20 de setiembre de 1851, expedido por este Ministerio, de acuerdo con el Ministerio de Gracia y Justicia, oídos el Consejo Real y el Tribunal Supremo de Justicia, y determinadas las otras en el Reglamento del Tribunal de Cuentas de 2 de setiembre de 1853.

La puntual observancia de estas sábias disposiciones legales en su parte fundamental, con algunas variantes respecto del Real decreto de 20 de setiembre de 1851, bastan para que la vía gubernativa, como trámite previo á la judicial, responda cumplidamente á su objeto.

Además de las ventajas de reunir en una sola disposición legal las innumerables que se hallan dispersas en la *Colección legislativa* desde la citada de 9 de junio de 1847, dificultando por ello el estudio de sus preceptos, algunos de

los cuales no se hallan del todo ajustados á los buenos principios en la materia, introdúcense dos novedades en las disposiciones del presente Real decreto como garantía conveniente en pro de los intereses del Estado. Es la primera la necesidad de la consulta á la Dirección de lo Contencioso para que la reclamación del particular reciba la instrucción correspondiente; y consiste la segunda en la fijación de un término para entablar la acción judicial después de darse por terminada la vía gubernativa, pasado el cual dejará ésta de surtir efectos, evitando de esta suerte que la reclamación pueda convertirse en arma de mala fe.

En atención á las precedentes consideraciones, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Real decreto.

Madrid 23 de marzo de 1886.

SEÑORA:

Á L. R. P. DE V. M.

JUAN FRANCISCO CAMACHO.

## REAL DECRETO.

En atención á las consideraciones expuestas por el Ministro de Hacienda, de conformidad con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º El procedimiento para sustanciar en la vía gubernativa las reclamaciones de los particulares como trámite previo á la vía judicial en asuntos de interés del Estado que exigen los decretos-leyes de 9 de julio de 1869 y 26 de agosto de 1874, Real decreto de 11 de enero de 1877, ley y reglamento de 31 de Diciembre de 1881 y ley y reglamento de 24 de junio de 1885, se acomodará á las reglas siguientes:

Primera. En las reclamaciones que tengan por objeto el cumplimiento de contratos ú obligaciones que produzcan responsabilidades periódicas contra el Estado, sólo deberán los interesados promover la vía gubernativa al entablar la primera reclamación, bastando que se



acredite este extremo si hubiesen de incoar otras.

Segunda. Las reclamaciones que en concepto de tercerías ó excepciones de Derecho civil se deduzcan por personas no obligadas para con la Hacienda pública, en los expedientes de que conoce el Tribunal de Cuentas del reino por alcances ó descubiertos en las cuentas que deba examinar, á que se refiere el art. 21 de la ley orgánica de dicho Tribunal de 25 de junio de 1870, se sustanciarán en la vía gubernativa, como trámite previo á la judicial, por el procedimiento que establece el art. 94 del Reglamento de aquel Tribunal de 2 de setiembre de 1853.

Tercera. Todas las demás reclamaciones que hayan de hacerse contra el Estado, cualquiera que sea la causa de que procedan, se dirigirán al Ministro del ramo con una exposición acompañada de los documentos en que los interesados funden su derecho.

Cuarta. La exposición documentada se entregará á la Autoridad superior de la provincia en el ramo á que la reclamación se refiera, presentando originales los documentos de que

trata la regla anterior y copias simples de los mismos, para que, cotejadas por aquélla dentro del término de tercero día, se devuelvan los originales á los interesados, á quienes además se expedirá recibo por dicho funcionario, que exprese lacónicamente el objeto y fecha de la solicitud y la clase de documentos que la acompañan.

Quinta. No surtirá efecto la reclamación gubernativa si el interesado no cumple lo dispuesto en las dos reglas anteriores.

Sexta. La Autoridad provincial remitirá la exposición dentro de los cinco días siguientes al de su presentación al Centro directivo correspondiente, quien acusará inmediatamente el recibo de aquélla, pasándola en el mismo día á la Dirección general de lo Contencioso del Estado, y ésta, en el plazo de un mes, consultará al Ministerio respectivo la resolución que proceda.

Séptima. El Ministerio del ramo comunicará su resolución á la Dirección de lo Contencioso en el plazo de los dos meses siguientes, á fin de que ésta la transmita al interesado y Centro directivo correspondiente dentro de los

cuatro meses siguientes á la fecha de presentación de la instancia.

Octava. Si no se comunicase la resolución al interesado en el plazo de cuatro meses desde la presentación de la instancia, se entenderá negada la solicitud para el efecto de dejar expedita la vía judicial.

Art. 2.º A los quince días de notificada al interesado la resolución del Gobierno, deberá aquél acreditar con testimonio fehaciente haber presentado su demanda ante el Tribunal competente si su reclamación hubiera sido denegada, cuando ésta verse sobre tercerías ó excepciones de Derecho civil en procedimientos administrativos de apremio.

Transcurrido dicho plazo sin haber justificado en debida forma la presentación de la demanda, cesarán los efectos que la reclamación del particular haya producido en el procedimiento gubernativo.

Art. 3.º En las demás reclamaciones no surtirá efectos la resolución que recaiga denegatoria de la pretensión, si el interesado no acredita en igual forma haber presentado la demanda judicial en el plazo de tres meses, á



contar desde la notificación que se le hubiese hecho.

Art. 4.º Se exceptúan de las prescripciones de este decreto las reclamaciones que por reglamentos especiales tengan señalada su tramitación.

Art. 5.º Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores al presente decreto en la materia á que el mismo se contrae.

Art. 6.º El Ministro de Hacienda dará cuenta á las Cortes de este Real decreto.

Dado en Palacio á veinte y tres de marzo de mil ochocientos ochenta y seis.

MARÍA CRISTINA.

*El Ministro de Hacienda,*  
JUAN FRANCISCO CAMACHO.



## REAL DECRETO

DE 16 DE MARZO DE 1886, ENCOMENDANDO Á LOS ABOGADOS DEL ESTADO LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE DERECHOS REALES, ETC., EN LAS CAPITALES DE PROVINCIA.

### EXPOSICIÓN.

SEÑORA: Tan profundo es el convencimiento del Ministro que suscribe sobre la necesidad y eficacia de determinadas reformas, para que resulte más vigorosa la acción y mayor celeridad en los procedimientos de la gestión económica en beneficio de los intereses de la Hacienda, que se halla firmemente resuelto á no perdonar esfuerzo alguno para plantear con la brevedad posible todas las mejoras aconsejadas por la experiencia en la organización de los servicios especiales.

Propónese hoy, por tanto, someter á la soberana aprobación de V. M. algunas disposi-



ciones en cuanto á la administración de un impuesto que, por tener sin duda más que otro alguno base y fundamentos igualmente científicos como el de «Derechos reales y transmisión de bienes,» ofrece pingües y saneados ingresos á que podrá darse considerable aumento completando el pensamiento iniciado en la ley de 29 de mayo de 1868, merced al desarrollo que por el Real decreto orgánico de esta fecha se concede al Cuerpo facultativo á quien está encomendada la gestión del impuesto referido con mayores elementos para el más rápido y provechoso ejercicio de la acción investigadora.

En tan útiles propósitos se inspiraban seguramente las reformas proyectadas por mis dignos predecesores en 16 de mayo y 11 de octubre de 1871 estableciendo las bases para la creación de un Cuerpo de liquidadores; y en el propio criterio se informaron en su día el proyecto presentado á las Cortes en 11 de mayo de 1872 y el de 23 de diciembre de 1881, convertido en ley á propuesta del Ministro que suscribe.

Si determinadas dificultades de un orden

práctico inherentes á toda reforma de reorganización pudieron impedir entonces el exacto cumplimiento del precepto legal, ellas no son ni podrían ser razón bastante poderosa para abandonar el pensamiento de una reforma en que coinciden tan autorizadas opiniones y de que tan provechosos resultados pueden esperarse.

A preparar, por tanto, su completa realización en un plazo no lejano y en la medida en que hoy lo hacen posible los recursos con que cuenta el Ministro que suscribe, se dirige el proyecto de decreto que tiene el honor de someter á la aprobación de V. M., pues utilizando solamente la cifra de 220.941 pesetas á que el presupuesto anterior á la ley de 31 de diciembre de 1881 ascendió el premio de  $1 \frac{1}{2}$  por 100 de liquidación en las capitales de provincia, y prescindiendo, por consiguiente, del aumento considerable en proporción á los mayores ingresos del impuesto de Derechos reales, á partir desde aquella fecha, y que ha de elevarse todavía merced á los beneficiosos resultados que la nueva organización ofrece, hay medios sobrados para llevar á cabo la re-

forma que se propone, no ya sin el más mínimo gravamen para el Tesoro, sino con la fundada esperanza de obtener ventajas en su favor.

Representando la liquidación del impuesto de Derechos reales el acto más importante y decisivo, y por lo mismo el que más influencia está llamado á ejercer en la realización de aquel tributo, es evidente la necesidad de que los funcionarios encargados de practicarla, además de la competencia profesional científica, consagren toda su actividad y celo á este interesante servicio, sin que preocupen ni soliciten su atención funciones de otra naturaleza.

Y si bien es justo reconocer que los Registradores de la Propiedad, á quienes se halla hoy confiada la liquidación de este impuesto, se han esmerado en realizarla debidamente, no es por ello menos cierto que su atención tiene que consagrarse con preferencia al ejercicio de las delicadas é importantes funciones inherentes al cargo de Registradores, que es el propio y principal, y que, por el mayor movimiento de la contratación, impone mayor trabajo en las poblaciones de más numeroso vecindario.

Por otra parte, la circunstancia de que á esa



simultaneidad de funciones corresponde una doble dependencia de distintos departamentos ministeriales, la cual es tanto más directa cuanto sea más respetable el carácter de las atribuciones que cada uno de aquéllos les confiere, es motivo bastante para que las Autoridades dependientes del Ministerio de Hacienda se vean hasta cierto punto coartadas cuando traten de adoptar, respecto á dichos funcionarios, aquellas medidas de vigilancia y celosa inspección, y aun de censura, que puede hacer necesarias la más rápida administración y recaudación de los impuestos.

Afortunadamente es bien fácil procurar la solución conveniente y obviar las dificultades antes señaladas, confiriendo al efecto desde luego en las capitales de provincia á los Abogados del Estado, á cuyo cargo está especialmente el impuesto de Derechos reales, y que como funcionarios dependientes del Ministerio de Hacienda vienen por ello obligados á mayor subordinación y al más exacto cumplimiento de sus deberes, la liquidación del impuesto que hoy están llamados á intervenir y fiscalizar.

De esta suerte, además de suprimir un trá-

mite innecesario en ventaja del servicio público y de los particulares, obligados actualmente á presentar los documentos en dos distintas oficinas, ingresarán directamente en el Tesoro los productos del premio de liquidación que vienen ahora disfrutando los Registradores de la Propiedad de las capitales de provincia como remuneración al servicio que prestan, y merced al nuevo ingreso podrá atenderse sin gravar el presupuesto á mejorar en lo posible el servicio de liquidación.

Ni debe olvidarse, por último, la importante y decisiva consideración en favor del presente proyecto de Real decreto, de que el cumplimiento de sus disposiciones hará efectivo el principio fundamental de la ley de Contabilidad de 25 de junio de 1870, al establecer en su artículo 2.º que la recaudación del haber del Tesoro se efectuará por agentes directamente dependientes del Ministerio de Hacienda, á quien corresponde la administración de todas las contribuciones é impuestos.

Fundado en las precedentes consideraciones, el Ministro que suscribe, en uso de la facultad que le concede el art. 1.º de la ley de 12 de

enero último, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 16 de marzo de 1886.

SEÑORA:

Á L. R. P. DE V. M.

JUAN FRANCISCO CAMACHO.



## REAL DECRETO.

En atención á las razones expuestas por el Ministro de Hacienda, de conformidad con el Consejo de Ministros, y usando de la autorización primera de las concedidas por el art. 1.º de la ley de 12 de enero último,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º La liquidación del impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes en los partidos de las capitales de provincia que actualmente desempeñan los Registradores de la Propiedad, estará á cargo de los Abogados del Estado que prestan sus servicios en la Administración provincial de Hacienda. Exceptúase de esta disposición el partido de la capital en la provincia de Sevilla, en el que continuará desempeñando dicho servicio el actual Liquidador, como antiguo Contador de hipotecas.

Art. 2.º En los demás partidos continuará por ahora la liquidación á cargo de los Registradores de la propiedad.

Art. 3.º Los Abogados liquidadores del impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes dependerán directamente de la Dirección general de Contribuciones y estarán adscritos á las Administraciones de Contribuciones y Rentas de las respectivas Delegaciones de Hacienda.

Art. 4.º Los mayores gastos que origine el servicio de que se trata, se imputarán al crédito autorizado en el presupuesto del Ministerio de Hacienda y se cubrirán con el importe del premio del 1  $\frac{1}{2}$  por 100 y demás derechos señalados en la tarifa vigente, que ingresarán directamente en el Tesoro como un recurso del Estado.

Art. 5.º El Ministro de Hacienda dictará las instrucciones que considere necesarias para la ejecución y cumplimiento del presente Real decreto.

Art. 6.º El Ministro de Hacienda igualmente dará cuenta á las Cortes de este Real decreto.

Dado en Palacio á diez y seis de marzo de  
mil ochocientos ochenta y seis.

MARÍA CRISTINA.

*El Ministro de Hacienda,*

JUAN FRANCISCO CAMACHO.



## REAL ORDEN.

ILMO. SR.: Para el más exacto cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto de esta fecha, S. M. la Reina (q. D. g.), Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las siguientes instrucciones:

Artículo 1.º Para cumplir lo prevenido en el art. 1.º del Real decreto de esta fecha, los Registradores de la Propiedad, Liquidadores del impuesto de Derechos reales en las capitales de provincia, harán entrega el día 31 del corriente mes, á los Administradores de Contribuciones y Rentas de las respectivas Delegaciones de Hacienda, de todos los libros y documentos relativos al expresado impuesto que obren en su poder por su carácter de Liquidadores.

Art. 2.º Para que tenga efecto lo dispuesto en el artículo anterior, los Abogados del Esta-

do que, como encargados del impuesto de Derechos reales se hallan adscritos á las Administraciones de Contribuciones y Rentas, se presentarán en el expresado día 31 del actual en las oficinas liquidadoras de las capitales de provincia, acompañados del personal auxiliar necesario, y se harán cargo, por inventario, de los libros, registros y demás documentos relativos al impuesto de Derechos reales, que al efecto les serán entregados por los Liquidadores. De dicho inventario, que suscribirán el Registrador de la Propiedad y el Abogado del Estado, y que autorizará con el V.º B.º el Administrador de Contribuciones y Rentas, se extenderán ejemplares triplicados, de los cuales será remitido uno en el plazo más breve á la Dirección general de Contribuciones; quedará otro en poder del Registrador para que le sirva de resguardo, y se custodiará el tercero en el Negociado respectivo de dicha Administración.

Art. 3.º En el mismo día se extenderá diligencia de cierre en el libro registro de presentación de documentos, en la cual se hará constar el número de asientos que contiene, y

que suscribirán el Registrador-Liquidador y el Abogado del Estado.

Art. 4.º Los documentos que, aunque presentados antes de dicha fecha, se hallen pendientes de liquidación, serán entregados por los Registradores á la Administración de Contribuciones y Rentas, representada á dicho efecto por el Abogado del Estado, así como también los que, liquidados ya, no hayan sido aún retirados por los particulares para verificar el ingreso; pero respecto á estos últimos, se formará en el mismo día una relación detallada que suscribirán el Registrador de la Propiedad y el Abogado del Estado, comprensiva del importe de la liquidación y honorarios correspondientes al primero, á fin de que puedan éstos hacerse efectivos por dicho funcionario. Para admitir el ingreso de las liquidaciones expresadas en la Tesorería de Hacienda de la respectiva provincia, se exigirá á los interesados que acrediten, mediante el oportuno documento, tener satisfechos los honorarios del Liquidador.

Art. 5.º A partir del expresado día 31 del actual inclusive, los documentos correspon-



dientes á los distritos de las capitales de provincia serán presentados por los particulares, para la liquidación del impuesto, á los Abogados del Estado encargados del Negociado respectivo en las Administraciones de Contribuciones y Rentas, cuyos funcionarios expedirán el recibo ó resguardo á que se refiere el artículo 57 del Reglamento de 31 de diciembre de 1881 para la administración de dicho impuesto. Los Abogados del Estado practicarán las liquidaciones que procedan en la misma forma en que las vienen haciendo los actuales Liquidadores en los documentos que les sean presentados desde dicha fecha, y en aquellos otros que, pendientes de dicho requisito, les hayan sido entregados por los Registradores en cumplimiento de lo prevenido en el art. 4.º de esta Instrucción.

Art. 6.º En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 2.º del Real decreto de esta fecha, al propio tiempo que se extiendan los talones de cargo para el ingreso en las Tesorerías de Hacienda de los derechos liquidados por cada documento, se extenderán otros por el premio de liquidación, extensión de notas y

demás conceptos comprendidos en la tarifa del art. 131 del Reglamento de 31 de diciembre de 1881, cuyo importe ingresará en el Tesoro, al propio tiempo que el de los primeros, como valores á cargo de la Dirección general de Propiedades y bajo el concepto de «Diferentes derechos del Estado,» en el cual se adicionará el subconcepto de «Honorarios por la liquidación del impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes.»

Art. 7.º Los Abogados del Estado harán constar por nota, á continuación del estado de valores que mensualmente remiten á la Dirección general de Contribuciones, el importe de lo recaudado en cada mes por el concepto expresado de *Honorarios por la liquidación del impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes*; y para justificar dicho extremo, acompañarán al expresado documento certificación librada por el Interventor de Hacienda, con referencia á los Diarios de entrada de caudales de Intervención y Caja. Además, las Administraciones de Propiedades é Impuestos rendirán en fin de cada año económico, á la Dirección general del ramo, una cuenta de lo recaudado

por dicho ingreso especial, comprensiva de los productos del mismo en cada uno de los doce meses, que habrá de justificarse también con certificación del ingreso expedida por la Intervención.

Art. 8.º Los Abogados del Estado continuarán ejerciendo la inspección y vigilancia que, respecto á las liquidaciones de los demás partidos, les está encomendada por el art. 124, disposición 9.ª del Reglamento de 31 de diciembre de 1881.

Art. 9.º En las capitales de provincia en que por hallarse servidos interinamente los Registros de la Propiedad, ó por cualquier otra causa, se hallen encargados actualmente de la liquidación los Abogados del Estado, tendrá asimismo lugar la entrega á que se refieren los artículos 1.º y 2.º de esta Instrucción, respecto á todos aquellos libros ó antecedentes que, por ser anteriores á la fecha en que dichos funcionarios ejerzan el cargo de Liquidadores, se hallen en poder de los Registradores de la Propiedad.

Art. 10. Los Abogados del Estado, como Liquidadores del impuesto de Derechos reales,



extenderán en los documentos las notas de presentación, pago ó exención en su caso, á que se refieren los artículos 103, 110 y 130 del citado Reglamento de 31 de diciembre de 1881, y que autorizarán con el sello de la Administración respectiva, á fin de que las cartas de pago, en los casos que proceda, puedan quedar archivadas en los Registros de la Propiedad, de conformidad con lo prevenido en el art. 173 de dicho Reglamento y el 248 de la ley hipotecaria vigente.

Art. 11. Hasta que por la Dirección general de Contribuciones se comuniquen las instrucciones que estime necesarias para la mejor administración del impuesto, los Abogados del Estado continuarán desempeñando el servicio de liquidación, estadística y contabilidad del impuesto en la misma forma en que tiene lugar en la actualidad, y sujetándose á los formularios y demás disposiciones oficiales vigentes.

De Real orden, etc. Madrid 16 de marzo de 1886.

CAMACHO.

*Sr. Director general de Contribuciones.*



## REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros, de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado en pleno, y con arreglo al art. 41 de la ley de Administración y Contabilidad de 25 de junio de 1870,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Para que la Dirección de lo Contencioso y Cuerpo de Abogados del Estado pueda desempeñar los servicios de liquidación del impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes en las capitales de provincia y representar al Estado en juicio ante los Tribunales, conforme á lo que determinan los decretos de esta fecha, se conceden dos suplementos de crédito á la Sección 8.ª, Ministerio de Hacienda, del presupuesto de Obligaciones de los Departamentos ministeriales, correspondiente al





año económico 1885-86: uno de 68.666 pesetas 66 céntimos, con aplicación al cap. 7.º, artículo único, *Personal de la Dirección de lo Contencioso y Cuerpo de Abogados del Estado*; y otro de 4.000 pesetas, que figurará en un nuevo concepto del cap. 8.º, *Material para los gastos que ocasionen los enunciados servicios de liquidación del impuesto y administración de justicia*.

Art. 2.º El importe de los citados suplementos de crédito se cubrirá con el 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> por 100 y demás derechos que hoy perciben los Registradores de la Propiedad de las indicadas capitales de provincia en concepto de premios de liquidación, que en lo sucesivo ingresará en las arcas del Tesoro como recurso del Estado.

Art. 3.º El Gobierno dará cuenta á las Cortes del presente decreto.

Dado en Palacio á diez y seis de marzo de mil ochocientos ochenta y seis.

MARÍA CRISTINA.

*El Ministro de Hacienda,*

JUAN FRANCISCO CAMACHO.

REGLAMENTO ORGÁNICO  
DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONTENCIOSO  
DEL ESTADO  
Y DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL MISMO.

---

REAL ORDEN.

ILMO. SR.: He dado cuenta á S. M. la Reina (q. D. g.), Regente del Reino, del Reglamento especial para el régimen del Cuerpo de Abogados del Estado que, para su aprobación, ha elevado V. I. á este Ministerio, en cumplimiento del art. 23 del Real decreto de 16 de marzo último; y teniendo en cuenta la urgencia de su planteamiento, singularmente por la necesidad de convocar oposiciones con arreglo á sus preceptos para proveer las plazas vacantes y dotar al Cuerpo del personal facultativo que exigen con premura las delicadas y múlti-

ples funciones que le están encomendadas, S. M. se ha servido disponer que, sin perjuicio de pasar el expresado Reglamento á informe del Consejo de Estado en pleno, y de introducir en él las modificaciones que convengan en su caso y lugar, se publique desde luego con carácter provisional.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de mayo de 1886.

CAMACHO.

*Sr. Director general de lo Contencioso del Estado,*



## REGLAMENTO ORGÁNICO

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONTENCIOSO DEL ES-  
TADO Y DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL MISMO.

## CAPÍTULO PRIMERO.

*De la Dirección general de lo Contencioso del Estado.*

Artículo 1.º Corresponde á la Dirección general de lo Contencioso del Estado, como Centro consultivo, el cumplimiento de los servicios que atribuye al Director general y al Cuerpo de Abogados del Estado el Real decreto de 16 de marzo último; la Dirección general ejercerá las facultades propias de los demás Centros directivos dependientes del Ministerio de Hacienda, y corresponderán á los dos Abogados de mayor categoría que sirvan en la misma las funciones de Subdirector primero y segundo respectivamente.

Art. 2.º El nombramiento de Director general de lo Contencioso del Estado se hará de

acuerdo con el Consejo de Ministros, por Real decreto refrendado por el de Hacienda.

Art. 3.º Para el desempeño de las funciones que á la Dirección general de lo Contencioso atribuye el Real decreto de 16 de marzo último, se organizará en las tres secciones siguientes:

- 1.ª Central.
- 2.ª De lo Contencioso del Estado.
- 3.ª De lo consultivo.

Cada una se subdividirá en los Negociados que el Director general determine.

Art. 4.º La Sección central funcionará á las inmediatas órdenes del Director, teniendo á su cargo: el Registro, los asuntos del personal, la habilitación, el Archivo, la Biblioteca, Memorias y Estadística general.

Art. 5.º El Registro llevará los libros que disponga el Director general, y entregará al Jefe de cada Sección los expedientes y documentos que correspondan á la misma, clasificados para el reparto entre los Negociados, así como recibirá los que hayan de salir. Formará también los estados que se le reclamen sobre el movimiento de los expedientes administrativos.

Art. 6.º Los asuntos del personal comprenden la inspección y vigilancia del servicio de la Sección central y el de los auxiliares y subalternos de la Dirección; las cuestiones de nombramientos, traslaciones, remociones, licencias y correcciones á los Abogados del Estado y demás funcionarios que presten sus servicios en la misma; la formación del escalafón del Cuerpo constituido por aquéllos en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 22 del Real decreto de 16 de marzo último; la tramitación de las reclamaciones que se presenten, y procurará que consten con claridad en sus libros-registros del personal de Abogados del Estado todas las circunstancias en la carrera de los mismos que se han de apreciar para formar concepto de sus servicios.

## CAPÍTULO II.

### *De lo Contencioso.*

Art. 7.º La Sección de lo Contencioso conocerá de los expedientes que se formen para entablar acciones á nombre del Estado; pro-



pondrá las instrucciones que deban comunicarse á los Abogados del Estado para la mejor defensa del mismo en los pleitos y causas que se ventilen ante los Tribunales ordinarios, así como al Fiscal del Consejo de Estado para contestar las demandas contencioso-administrativas que se interpongan contra la Hacienda; informará sobre las reclamaciones de Derecho civil en la esfera gubernativa, como trámite previo para entablar demanda ordinaria contra el Estado, y formará la estadística judicial de interés del Estado en sus dos ramos civil y criminal.

Art. 8.º Cuando en cualquiera Centro directivo ó en la Secretaría del Ministerio de Hacienda se estimase procedente deducir por parte de ésta alguna acción civil ó criminal ante los Tribunales ordinarios ó contencioso-administrativos, se pasará el expediente original á la Dirección general de lo Contencioso para que, en su vista, adopte ó proponga al Ministro la resolución que corresponda.

El expediente será devuelto al Centro de su procedencia una vez que recayese la resolución final, bien por sentencia firme de los Tribuna-

les, ó ya por haberse declarado no haber lugar á la admisión de la demanda.

Art. 9.º Los Abogados del Estado en los Tribunales y Juzgados consultarán á la Dirección general de lo Contencioso sobre presentación de demandas á nombre del Estado, y para contestar las que interpongan los particulares por conducto del Abogado del Cuerpo de mayor categoría que preste sus servicios en la Audiencia territorial, quien la remitirá á dicho Centro con su informe. Cuando se trate de plazos perentorios ó asuntos de reconocida urgencia, consultarán directamente, dando de ello conocimiento al Abogado de mayor categoría en la Audiencia territorial.

Art. 10. La Dirección general de lo Contencioso cuidará de acusar el recibo de las consultas sobre interposición de demandas á nombre de la Hacienda y del Estado, ó para contestar á las que se presenten contra los mismos dentro de los cinco días siguientes á la fecha de la anotación de la entrada en dicho Centro, conforme al art. 14 del Real decreto de 16 de marzo último, y el Abogado del Estado por cuyo conducto se remitió la consulta partici-

pará la fecha del acuse del recibo al Abogado consultante para que éste la haga constar en autos, según dispone el mismo artículo.

Art. 11. Cuando transcurran los cinco días que determina el art. 14 del Real decreto de 16 de marzo para acusar el recibo de la consulta, el Abogado del Estado de la Audiencia territorial que la haya elevado ó dado curso lo advertirá á la Dirección general de lo Contencioso, quien en el caso de no haberla recibido lo acreditará por certificación en forma librada por el segundo Jefe, con el *Visto Bueno* del Director, ordenando al Abogado del Estado que la haya elevado que la reproduzca. Cuando el extravío se repita otra vez, se reproducirá por tercera y última la consulta, dirigiéndola en pliego certificado por cuenta del Estado, haciéndose constar en autos por el Abogado del Estado todas estas circunstancias y justificando la última con la presentación del sobre del certificado.

Art. 12. Si la Dirección de lo Contencioso no expidiese certificación en la forma expresada de no haber recibido las dos primeras consultas dentro del plazo de cinco días, á contar desde



el recibo de la consulta certificada, el término de tres meses que para resolver la consulta concede á dicho Centro el art. 14 del Real decreto de 16 de marzo último empezará á contarse desde los diez días siguientes á la fecha de salida de la primera consulta de la abogacía de la Audiencia territorial.

Cuando la Dirección de lo Contencioso expida la certificación expresada en el párrafo anterior, el plazo de tres meses para resolver la consulta se contará desde la fecha de la certificación.

Art. 13. Cuando haya transcurrido el plazo de tres meses para comunicar las instrucciones y el demandante apremie para que se conteste la demanda, el Abogado del Estado, después de evacuar el traslado por el resultado de autos, sin perjuicio de dar cuenta circunstanciada á la Dirección por el conducto debido, pondrá el hecho directa y sucintamente en conocimiento de la misma.

Art. 14. La Dirección general comunicará sus instrucciones á los Abogados del Estado por conducto del individuo del Cuerpo de mayor categoría en la Audiencia territorial correspon-

diente, pero en caso de urgencia podrá hacerlo directamente á los que hayan de ejecutarlas.

Art. 15. La Dirección general de lo Contencioso podrá reclamar de los diferentes Ministerios y de las Direcciones generales dependientes de los mismos cuantos datos, noticias ó antecedentes crea necesarios para la mejor defensa de los derechos del Estado, y aquéllos, salvo justa causa de imposibilidad, deberán facilitarlos en el término de un mes, para que pueda evacuar oportunamente las consultas que les dirijan los Abogados del Estado en los pleitos que interesen á éste, de conformidad á lo dispuesto en los artículos 3.º y 4.º del decreto-ley de 14 de agosto de 1876.

Los encargados del Registro en las oficinas citadas darán necesariamente recibo de las comunicaciones de la Dirección de lo Contencioso sobre petición de antecedentes, y de igual modo aquélla lo expedirá de las órdenes, comunicaciones y documentos que se le envíen por los Ministerios y Centros directivos.

Art. 16. En la Sección de lo Contencioso se abrirán dos Registros especiales, uno para las consultas sobre interposición de demandas

á nombre de la Hacienda ó el Estado y para las que se refieran á la contestación de las que los particulares deduzcan contra los mismos, y otro para las consultas sobre asuntos criminales que se promuevan.

Se anotarán en dichos Registros las consultas que se reciban, los acuses de recibos de las mismas y el hecho de haber remitido las instrucciones en el día en que esto se verifique, rubricándose los asientos de cada día por el Jefe de dicha Sección, y en el mismo día el encargado del Registro hará entrega de las consultas y demás comunicaciones que se reciban de los Abogados del Estado á los Negociados respectivos, uniendo á ellas el sobre cuando procedan de fuera de Madrid.

Art. 17. Las comunicaciones que la Sección de lo Contencioso del Consejo de Estado dirija al Ministerio de Hacienda sobre interposición de demandas contra resoluciones gubernativas de este Ministerio ó de alguno de los Centros directivos dependientes del mismo, pasarán á la Dirección de lo Contencioso con el expediente original que hubiere producido la resolución reclamada.



La Dirección tomará nota del expediente y propondrá al Ministerio, cuando éste así lo haya ordenado y en los casos que lo considere necesario ó conveniente, las instrucciones que hayan de comunicarse al Fiscal del Consejo de Estado, y, una vez aprobadas, las comunicará á dicho funcionario con la fórmula de «Real orden comunicada.» Con esta misma fórmula contestará las comunicaciones que se dirijan al Ministerio por el Consejo de Estado con ocasión de los pleitos contencioso-administrativos. También pasarán á la Dirección general de lo Contencioso los proyectos de sentencia en dichos pleitos, para que dé cuenta de los mismos al Ministerio de Hacienda antes de que los someta á la Real aprobación.

Art. 18. En cuanto á la defensa del Estado en los pleitos contencioso-administrativos de Hacienda que el Ministro encargue al Director general en calidad de Comisario especial, con arreglo al art. 12 del Real decreto de 16 de marzo último, corresponderán á éste en el cumplimiento del encargo todas las atribuciones, y gozará de las prerrogativas propias del Fiscal del Consejo; y en este concepto, cuan-

do asistiese á la vista pública del pleito, ocupará en los estrados el sitio correspondiente á aquél, y vestirá el traje de toga del modelo aprobado por el Real decreto de 22 de febrero de 1865 para dicho funcionario.

Luego que el Director general de lo Contencioso reciba la Real orden en que se dé el encargo mencionado, cuidará de trasladarla al Presidente de la Sección de lo Contencioso y al Fiscal del Consejo de Estado, designando á la vez el Abogado del Estado á sus órdenes á quién deberán hacerse las notificaciones.

Art. 19. Para informar en las reclamaciones de Derecho civil en la esfera gubernativa como trámite previo para entablar demanda ordinaria con el Estado, la Sección de lo Contencioso tendrá presente lo dispuesto en el Real decreto de 23 de marzo último.

Art. 20. La estadística judicial de los pleitos y causas de interés del Estado, se formará según las instrucciones que se aprobarán oportunamente.

## CAPÍTULO III.

*De lo consultivo.—Expedientes gubernativos.*

Art. 21. La Sección consultiva tendrá á su cargo el despacho de las consultas é informes de que trata el art. 3.º del Real decreto de 16 de marzo anterior, exceptuando los dictámenes sobre reclamaciones de Derecho civil en la esfera gubernativa como trámite previo para entablar demanda ordinaria contra el Estado, que deberán ser evacuados por la Sección de lo Contencioso. También estará á cargo del Jefe de la Sección de lo Contencioso y de los Jefes de Negociado de los ramos á que el servicio se refiera la asistencia á las subastas de los servicios públicos del Ministerio de Hacienda, y el Director designará en cada caso, según la importancia de la subasta, el funcionario que haya de concurrir en su representación.

Art. 22. Cuando el Ministro mandare pasar á informe de la Dirección general de lo Contencioso un asunto con carácter reservado, lo expresará así en el decreto; y en este caso el



Director general formulará por sí mismo el dictamen, sin tramitación alguna, á continuación inmediata de aquel decreto.

En un libro, que se titulará de *Consultas reservadas*, quedará copia literal del informe del Director, rubricado por el mismo.

Art. 23. Siempre que haya de oirse á la Dirección general de lo Contencioso en los expedientes que se sustancien en las demás Direcciones dependientes del Ministerio de Hacienda, se empleará la fórmula de «pase á la Dirección general de lo Contencioso» en decreto marginal, que firmará el Director consultante.

En la nota del Negociado que motivase este decreto, se fijarán con toda precisión los puntos de Derecho á que deberá contraerse el dictamen.

Pero si la Dirección de lo Contencioso hallase, al examinar el expediente, alguna circunstancia que considere de interés legal no comprendida en la consulta, podrá llamar sobre ella, al evacuarla, la atención del Centro que lo haya pedido.

Art. 24. Cuando la Dirección necesitase,

para fundar sus dictámenes, examinar documentos ó expedientes archivados, los reclamará directamente á la oficina ó archivo que corresponda por medio de papeleta firmada por el segundo Jefe de la Dirección. Los papeles ó expedientes así reclamados serán entregados personalmente al encargado del Registro de la Dirección de lo Contencioso, quien pondrá la fecha del recibo al pie de la papeleta del pedido, pudiendo recogerla luego que se devuelvan los antecedentes.

Art. 25. Cuando el dictamen que diese la Dirección general de lo Contencioso contenga una resolución que, además de decidir el expediente que lo motive, haya de publicarse con carácter de aplicación general á casos análogos, podrá volver el expediente á dicho Centro, si el Ministro lo acordase, para que redacte dicha resolución, que se publicará en la *Gaceta de Madrid* y en la *Colección legislativa*.

Art. 26. A fin de que en la Dirección general de lo Contencioso consten todos sus trabajos, la Sección conservará las minutas de sus informes, que pasarán al Archivo una vez emitidos aquéllos.

Art. 27. De la resolución definitiva que se dictase en los expedientes en que se haya oído á dicho Centro, se pasará á éste copia íntegra y á la letra, que se archivará con la respectiva minuta de informe.

Art. 28. Los Abogados del Estado que el Director general designe en cada caso, constituirán el Consejo interior de la Dirección, pero sin atribuciones propias ni más funciones que la de deliberar sin voto resolutivo sobre los asuntos que someta á su examen dicho Director cuando tuviese por conveniente reunirlo con este objeto. Ejercerá las funciones de Secretario del Consejo el Abogado del Estado de categoría y clase inferiores y más moderna entre los concurrentes.

#### CAPÍTULO IV.

##### *Personal de Abogados del Estado.*

Ingresos, oposiciones y ascensos.

Art. 29. El Cuerpo de Abogados del Estado constituye una carrera especial facultativa



de escala cerrada, que dependerá inmediatamente del Ministerio de Hacienda y del Director general de lo Contencioso.

Art. 30. Las categorías y sueldos de los Abogados del Estado se acomodarán á las reglas generales establecidas para los demás funcionarios de las carreras civiles del Estado.

El ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado tendrá lugar por las plazas de la última categoría, previa oposición.

La Dirección general de lo Contencioso publicará en la *Gaceta* la convocatoria á las oposiciones, fijando el número de plazas que habrán de proveerse y señalando el día en que han de dar principio los ejercicios.

Art. 31. Los aspirantes á la oposición deberán acreditar:

1.º La cualidad de españoles, mayores de veinte y tres años de edad.

2.º La de Licenciados en Derecho civil y canónico.

3.º La de buena conducta moral y política.

Art. 32. La oposición versará sobre las materias siguientes: Derecho civil, mercantil, canónico, administrativo, penal y procesal, y

Legislación especial de Hacienda en sus diferentes ramos.

El programa de estas materias, que habrá de constar cuando menos de 400 preguntas, se formará por la Dirección y se publicará en la *Gaceta de Madrid* con anterioridad á la fecha en que hayan de comenzar los ejercicios.

Art. 33. Los ejercicios serán tres, y consistirán: el primero en contestar, durante un plazo que no excederá de media hora, diez preguntas sacadas á la suerte sobre las materias expresadas; el segundo en practicar una liquidación por el impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes, ó dar dictamen en un expediente gubernativo sobre alguna de las materias en que es necesaria la audiencia de la Dirección general de lo Contencioso, según el art. 3.º del Real decreto de 16 de marzo de 1886, y el tercero en un informe oral relativo á negocios de la jurisdicción ordinaria civil ó criminal ó de la contencioso-administrativa.

Para los ejercicios segundo y tercero se concederá á los opositores un plazo de seis horas y se les facilitarán los Códigos y *Colecciones le-*

*gislativas* que solicitasen, debiendo permanecer durante ese tiempo incomunicados.

Los expedientes sobre que hayan de recaer los ejercicios segundo y tercero serán numerados y sacados á la suerte.

En el primer ejercicio actuarán los opositores según la fecha de presentación de sus respectivas solicitudes.

Art. 34. Los ejercicios prescritos en el artículo anterior se celebrarán en Madrid, ante un Tribunal constituido por el Director general de lo Contencioso del Estado, Presidente; dos Jefes de Administración, uno de ellos de primera ó segunda clase del Cuerpo de Abogados del Estado; un Catedrático de la Universidad Central, un Abogado del ilustre Colegio de Madrid y de otro Abogado del Estado con la categoría de Jefe de Negociado, como Vocales, desempeñando además este último las funciones de Secretario. En ausencia del Director general de lo Contencioso, será éste sustituido en las funciones de Presidente del Tribunal por el Vocal de mayor categoría administrativa que forme parte del mismo.

Cualquiera de los demás Vocales será susti-



tuído por el Secretario, que sólo en estos casos tendrá voz y voto.

Art. 35. El Tribunal, una vez constituido, acordará las reglas de calificación de los ejercicios de los opositores.

Las decisiones de la mayoría del Tribunal constituirán acuerdo, entendiendo que el Tribunal puede funcionar aunque en alguna de sus reuniones no concurran más de cuatro individuos.

En este caso y en el de empate será decisivo el voto del Presidente.

Art. 36. La Dirección, después de haber examinado el expediente personal de cada uno de los aspirantes, formará y publicará en la *Gaceta* una relación de los que, por reunir las condiciones señaladas en el art. 5.º, pueden tomar parte en las oposiciones.

Contra la resolución de la Dirección podrán los que hayan sido excluidos recurrir en alzada al Ministerio de Hacienda en el término de tres días; pero no se suspenderán por eso los ejercicios, y serán los reclamantes admitidos á los mismos, á reserva de lo que en definitiva y sin ulterior recurso resuelva el Ministerio.

Art. 37. Debiendo realizarse necesariamente y por su orden los tres ejercicios, ningún aspirante será admitido á practicar el segundo ó tercero respectivamente sin que se haya verificado el anterior por todos los aspirantes admitidos para el mismo.

Terminado que sea cada uno de los dos primeros ejercicios, el Tribunal fijará á la puerta del local una lista de los aspirantes aprobados, que serán los únicos aptos para pasar al siguiente.

El Tribunal podrá suspender los ejercicios de las oposiciones por circunstancias que estime atendibles, en cuyo caso se publicará en la *Gaceta* el acuerdo de la suspensión y el día en que deban reanudarse los ejercicios; pero procurando que éstos no se suspendan sin que hayan verificado el ejercicio pendiente todos los opositores.

Terminados los tres ejercicios, el Tribunal, con presencia de los méritos de cada uno de los opositores, formará una relación por el orden en que hayan sido calificados y aprobados, y elevará al Ministerio la propuesta de los que hayan obtenido los primeros números y que

comprenda tantos individuos cuantas sean las plazas vacantes.

En la Dirección de lo Contencioso se conservará la lista de los demás aspirantes aprobados, y se expedirán certificaciones á los interesados que lo soliciten para que puedan servirles de méritos en sus carreras.

Se considerarán como condiciones de preferencia, en igualdad de circunstancias, entre los aspirantes, para la aprobación de los ejercicios y designación de los lugares, las siguientes por su orden:

1.<sup>a</sup> La de ser el aspirante Licenciado en Administración.

2.<sup>a</sup> La de haber desempeñado funciones en la carrera judicial ó fiscal, cuya circunstancia deberá acreditarse con certificación de los Presidentes ó Fiscales de las Audiencias, y la de haber ejercido la profesión por mayor número de años.

3.<sup>a</sup> La de las calificaciones ó notas obtenidas en la carrera universitaria.

Y 4.<sup>a</sup> La de servicios prestados en cualquiera de los ramos de la Administración pública.



Art. 38. El Ministro de Hacienda nombrará, por su orden, á los aspirantes comprendidos en la propuesta á que se refiere el artículo anterior.

Art. 39. Las vacantes se proveerán á propuesta del Director en la forma que determina el art. 18 del Real decreto de 16 de marzo de 1886, fijando el turno en que se hace el nombramiento.

Cuando hubiere dos individuos que cuenten la misma antigüedad en la clase, será preferido para el nombramiento el que antes hubiere cubierto turno.

Para la provisión por elección deberá instruirse expediente, en el que se acompañen las hojas de servicios, con expresión de los méritos de cada uno y el informe del Director.

Art. 40. El Director podrá convocar oposiciones para cubrir vacantes de nuevo ingreso cuando el número de éstas sea de tres ó más.

## CAPITULO V.

*Separaciones, suspensiones, traslaciones y licencias.*

Art. 41. Los Abogados del Estado podrán ser trasladados por conveniencia del servicio; pero no podrán ser separados, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 19 del Real decreto de 16 de marzo de 1886, sino en virtud de alguna de las causas siguientes:

1.<sup>a</sup> Cuando por ejecutoria de los Tribunales se haya impuesto pena de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, cualquiera que sea el plazo de la condena.

2.<sup>a</sup> Cuando en expediente gubernativo resultan probadas las faltas de moralidad en el ejercicio de su cargo.

3.<sup>a</sup> Cuando por faltas en el servicio diesen lugar á reclamación oficial ó privada y se justifique haberse impuesto anteriormente más de una corrección disciplinaria.

4.<sup>a</sup> Cuando por desobediencia manifiesta á las órdenes de sus superiores jerárquicos se ocasionen perjuicios á la Hacienda.

Y 5.<sup>a</sup> Cuando habiendo sido destinado á los diferentes servicios propios del Cuerpo de Abogados resultare la incapacidad del interesado por las notas puestas en el expediente con relación á cada uno de dichos servicios, y según los informes de los Jefes inmediatamente encargados de los mismos.

Los Abogados del Estado podrán también ser suspendidos de empleo y sueldo por el plazo máximo de un año, á propuesta del Director, cuando de los informes de los Jefes de las Dependencias en que sirvan ó de los de las Autoridades superiores de las localidades resulte que los interesados desmerezcan en su buena opinión y fama por razón de su conducta oficial y pública.

El Abogado del Estado penado con la suspensión por segunda vez, será separado si reincidiese en las faltas corregidas.

Art. 42. La separación se hará á propuesta del Director general de lo Contencioso, oyendo previamente al interesado, á cuyo efecto se le pondrá de manifiesto el expediente por término de cinco días para que en el plazo de diez conteste al pliego de cargos que se le im-



puten. Contra la resolución que recaiga se podrá utilizar el recurso contencioso-administrativo en el plazo ordinario.

Art. 43. Los individuos del Cuerpo podrán obtener la excedencia del mismo por un plazo que no exceda de tres años, conforme al artículo 20 del Real decreto de 16 de marzo último.

La petición de excedencia debe hacerse al Ministerio de Hacienda, que la concederá ó negará á propuesta del Director general de lo Contencioso.

Art. 44. Para que pueda concederse la excedencia dentro del plazo señalado en el artículo anterior, es preciso que sea la primera que se solicita; ó si es la segunda y sucesivas, que medie un año al menos de una á otra concesion y que no se haya utilizado por completo en los anteriores dicho plazo de tres años.

El plazo de excedencia empezará á contarse al siguiente día del cese.

Art. 45. El excedente que no solicitase la vuelta al servicio antes de espirar el plazo de la excedencia, será definitivamente dado de baja en el Cuerpo.

Art. 46. Los excedentes que vuelvan al servicio ocuparán el lugar con que figuraban en sus respectivas categorías y clases al obtener la excedencia, sin que se les otorgue ninguna otra ventaja.

El Director general podrá conceder licencia á los Abogados del Estado que lo soliciten fundadamente; pero si la licencia debiera ser por el plazo de un mes ó más, sólo podrá ser concedida por el Ministro á propuesta del Director.

Art. 47. Cada individuo del Cuerpo tendrá un expediente personal en el que se harán constar todos los antecedentes de la carrera oficial del mismo, si la hubiere comenzado antes de pertenecer al Cuerpo; los destinos á que haya sido destinado sucesivamente dentro de éste; el resultado que hubiese obtenido en el desempeño; la calificación que el Director hará anualmente de estos servicios y del comportamiento del interesado, después de reunir los antecedentes y pedir los informes que crea oportunos, y, por último, cuanto pueda contribuir á formar concepto de la rectitud, aplicación ó inteligencia de los interesados.

Art. 48. La Dirección general de lo Con-

tencioso publicará todos los años en la *Gaceta de Madrid*, en los primeros quince días del mes de enero, el Escalafón del Cuerpo de Abogados del Estado, según la situación de los individuos de éste el 31 de diciembre anterior inmediato, en cumplimiento del art. 22 del Real decreto de 16 de marzo último.

Los interesados podrán hacer las reclamaciones que convengan á su derecho por agravio ó perjuicio que no tengan consentidos en años anteriores en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la publicación del Escalafón en la *Gaceta*.

Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones, causará estado respecto de todos los que no hayan reclamado.

Art. 49. Las reclamaciones se tramitarán por la Dirección general de lo Contencioso, que propondrá resolución al Ministerio con audiencia de los individuos á quienes inmediatamente afecte la reclamación.

Los interesados podrán recurrir á la vía contencioso-administrativa contra la Real orden que recayese.

Al remitir el expediente gubernativo al Tri-



bunal contencioso-administrativo, la Dirección dará conocimiento de la remisión á los individuos que puedan resultar directamente perjudicados en el pleito.

## CAPÍTULO VI.

### *Nombramientos, posesión, sustitución y ceses.*

Art. 50. El nombramiento de los individuos del Cuerpo de Abogados del Estado se hará con arreglo á lo dispuesto respecto á los demás funcionarios de la Administración pública; pero unos y otros se publicarán en la *Gaceta de Madrid*, expresándose en todos los casos el turno en que se ha provisto la vacante.

Para este efecto se llevará un libro-registro en que se anoten los turnos en que se vayan proveyendo las vacantes que ocurran en cada clase.

Art. 51. La designación del punto en donde han de prestar sus servicios los Abogados del Estado, habrá de hacerse siempre por medio de Real orden á propuesta del Director de lo Contencioso, sin perjuicio de que éste pueda

destinar accidental ó temporalmente dentro de la misma población, y por conveniencia del servicio, á alguno de los Abogados del Estado á distinto servicio de aquél á que se hallen dedicados.

Art. 52. Los nombramientos de los individuos del Cuerpo se comunicarán por el Director general de lo Contencioso á los Jefes de los Tribunales ú oficinas en que hayan de desempeñar sus respectivos cargos.

Art. 53. En los títulos de los funcionarios destinados á prestar sus servicios en los Centros directivos, autorizarán el «Cúmplase» y el «Decreto» mandando dar la posesión los Jefes de los mismos, y darán la posesión los segundos Jefes ó Subdirectores. En los títulos de los que sean destinados á prestar servicios en los Tribunales de Madrid, extenderán el «Cúmplase» y «Decreto» referido el Director general de lo Contencioso, y dará la posesión el Jefe de Administración de mayor categoría de dicho Centro.

En cuanto á los de los demás funcionarios destinados á las Dependencias provinciales de Hacienda y Tribunales de fuera de Madrid, au-

torizarán el «Decreto» y «Cúmplase» mandando dar la posesión el Delegado de Hacienda, y dará posesión el Interventor ó funcionario que siga en categoría al primero.

En el mismo día en que tomen posesión los individuos del Cuerpo destinados á prestar servicio ante los Tribunales en representación del Estado, el Jefe á quien corresponda acordarla se lo participará al del Tribunal ó Tribunales en que el Abogado del Estado haya de prestar servicios, con el fin de que puedan entenderse con el mismo las citaciones, notificaciones y emplazamientos, debiendo además los nombrados para ese cargo presentar su título al Tribunal para la toma de razón.

Si vencido el término posesorio, y las prórogas en su caso, no se hubiese presentado á tomar posesión de su cargo el nombrado, se pondrá esto igualmente en conocimiento de la Dirección general de lo Contencioso por el Jefe del Centro, Dependencia ó Tribunal á que hubiese sido destinado.

Art. 54. El cese en los títulos de Abogados del Estado se extenderá por los mismos funcionarios á que, según los casos expresados en el



artículo anterior, corresponda darles posesión, quienes tendrán el deber de ponerlo en el mismo día en conocimiento de la Dirección general de lo Contencioso y de las demás Autoridades á quienes esté prevenido que participen su nombramiento.

## CAPÍTULO VII.

### *Penas y recompensas.*

Art. 55. El Director general, como Jefe superior, además de proponer las separaciones de Abogados del Estado, según el art. 42 de este Reglamento, podrá acordar por sí ó proponer al Ministerio los premios y correcciones disciplinarias á que diese lugar, en su caso, la conducta de los individuos del Cuerpo, con arreglo á lo que consta de los expedientes respectivos.

Art. 56. Los premios consistirán:

En dar las gracias de oficio por el mérito contraído en algún servicio.

Dar las gracias de Real orden, publicándose en la *Gaceta de Madrid*.

Proponer especialmente al Ministro un indi-

viduo del Cuerpo para un turno de elección ó para alguna otra recompensa honorífica.

Art. 57. Las correcciones consistirán en:  
Reprensión de palabra.

Reprensión por escrito.

Anotaciones en el expediente personal del interesado de las reprensiones, en caso de reincidencia.

Suspensión de sueldo por término de uno á quince días.

Suspensión de sueldo de quince á treinta días.

Privación de ascenso por cierto tiempo en turno de elección.

## CAPÍTULO VIII.

### *Distribución y sustitución del personal.*

Art. 58. En los puntos en que hubiese más de un Abogado del Estado, se sustituirán en los servicios que le estén especialmente encomendados en casos de enfermedad y ausencias por el orden de categoría.

Si hubiese sólo uno, tendrá necesidad de de-

signar previamente al Delegado de Hacienda el Abogado de la localidad que haya de sustituirle en dichos casos.

Mientras otra cosa no se determine, los Delegados de Hacienda, de acuerdo con los Administradores de los diferentes ramos que estén á sus órdenes, facilitarán á los Abogados del Estado el personal auxiliar necesario para los servicios que á los mismos están encomendados.

Art. 59. Los Abogados del Estado, en los puntos donde hubiese más de uno, tendrán el deber de auxiliarse mutuamente en sus respectivas funciones cuando las necesidades del servicio lo requieran: teniendo el carácter de Jefe, si hubiere dos ó más, el de mayor categoría, y, en igualdad de categoría, el que designe la Dirección, que será aquél á quien corresponda por haber cubierto turno con anterioridad en la clase á que pertenecen. Toca á éste, de acuerdo con el Jefe de la Dependencia, disponer la distribución del servicio entre los individuos del Cuerpo que se hallen asignados á la misma, y llevar la correspondencia con la Dirección general de lo Contencioso en los casos que fuere necesario.



Art. 60. Los Centros de la Administración en que ejercerán por ahora sus funciones los Abogados del Estado, en cumplimiento del art. 2.º del Real decreto de 16 de marzo último, serán:

La Dirección general de lo Contencioso y la de Contribuciones.

El Ministerio de Hacienda podrá, sin embargo, destinar á los Abogados del Estado á otros Centros en que se consideren necesarios sus servicios, previo expediente, á propuesta ó con audiencia del Director general de lo Contencioso.

Art. 61. Los individuos del Cuerpo destinados á la Dirección general de lo Contencioso desempeñarán las funciones que el Jefe les encomiende en los diferentes servicios de que conoce, con sujeción al Reglamento interior del mismo Centro. Los que sirvan en la Dirección de Contribuciones tendrán á su cargo, á las órdenes del Director de quien dependen para este efecto, todos los asuntos concernientes á la Administración del impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes, y los destinados á los demás Centros y Dependencias

desempeñarán las funciones propias de su cargo bajo las órdenes del Jefe de los mismos en lo que se refiere al servicio.

Tanto unos como otros dependerán del Director general de lo Contencioso en lo tocante á la organización y demás funciones peculiares del Cuerpo á que pertenecen.

Art. 62. Corresponderá privativamente á los Abogados del Estado en las Delegaciones de Hacienda conocer de todos los asuntos del impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes, y liquidar los derechos del Tesoro por el mismo en el partido de la capital de la provincia; informar al Delegado y demás Jefes de las oficinas provinciales de Hacienda en concepto de Asesor, desempeñando estos servicios á tenor de las disposiciones vigentes, y la asistencia á las subastas y Juntas administrativas.

Art. 63. Corresponde á los Abogados del Estado, por la representación del mismo ante los Tribunales, defenderle en los pleitos y causas de su interés.

También corresponderá á los Abogados que sirvan cerca de las Audiencias territoriales, y de las de lo criminal que residan en las capita-

les de provincia, la representación y defensa del Estado en los pleitos que se ventilen ante el Tribunal contencioso-administrativo de primera instancia.

Art. 64. Cuando en una capital de provincia que lo sea de Audiencia territorial ó en las demás no haya Abogado del Estado nombrado especialmente para representar y defender al Estado en los asuntos contenciosos de su interés, prestarán ese servicio el Abogado ó Abogados que sirvan en la Delegación de Hacienda.

Art. 65. La representación y defensa del Estado ante los Tribunales ordinarios en poblaciones que no sean capitales de provincia, estará á cargo del Abogado del Estado á quien se comisione al efecto, ó del Liquidador del impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes de la localidad, si el Ministerio de Hacienda lo ordena á propuesta de la Dirección general de lo Contencioso.

Art. 66. Para cubrir vacantes por excedencia ú otro motivo, podrán nombrarse por el Ministerio, á propuesta del Director, Abogados con carácter de interinidad.



## CAPÍTULO IX.

*Del servicio en lo contencioso.*

Art. 67. Las citaciones, notificaciones y todas las demás diligencias se entenderán con el Abogado del Estado, y si hubiese más de uno con el de mayor categoría.

Art. 68. El Abogado defensor del Estado tendrá igualmente la representación del Estado en juicio, sin necesidad de valerse de Procurador, ni de usar otro papel que el de oficio en los escritos y actuaciones que se practiquen á su instancia, ni de satisfacer derechos de ninguna clase á los auxiliares y subalternos de los Juzgados y Tribunales; así como tampoco está obligado á garantizar previamente, por medio de depósito ó caución, la interposición de los recursos que á nombre del Estado se entablen, y que por la ley se hallen sujetos á dicha formalidad.

Art. 69. Los Abogados del Estado cuidarán de que las consultas para interponer demandas á nombre de aquél sean tan completas

en la relación de antecedentes cuanto es necesario para que se forme juicio exacto de la cuestión y de su importancia bajo el aspecto económico.

A las consultas sobre contestación á una demanda particular, se acompañará copia íntegra de la misma demanda y de los documentos que la justifiquen en la parte pertinente.

Art. 70. Contestadas estas consultas previas á la interposición y á la contestación de las demandas, ó una vez que deban considerarse contestadas por el transcurso del tiempo, el Abogado que represente y defienda al Estado en el pleito cumplirá los deberes siguientes:

1.º Participar el hecho de la presentación de la demanda ó de la contestación á la interpuesta por el particular.

2.º Dar parte también cuando termine la discusión escrita.

3.º Dar cuenta del recibimiento á prueba.

4.º Asistir personalmente á las diligencias de prueba.

5.º Asistir también á las vistas.

6.º Dar conocimiento de los incidentes que ocurran.

7.º Remitir copias de las providencias que afecten al fondo del pleito ó determinen un nuevo estado del procedimiento.

8.º Dar cuenta de los recursos que se entablen, bien por el mismo Abogado, ora por las otras partes.

9.º Remitir copia testimoniada de la sentencia.

10. Interponer los recursos procedentes si la sentencia fuese contraria á los intereses del Estado.

La Dirección general de lo Contencioso comunicará al Abogado del Estado las instrucciones que estime oportunas con motivo de los partes y noticias mencionados.

Art. 71. Cuando al Abogado se ofrecieren dudas, así en cuanto al fondo como respecto al procedimiento durante la tramitación del pleito, y no haya posibilidad de que la Dirección general de lo Contencioso la resuelva con oportunidad, aquéllas podrán someterse al Consejo de los Abogados del Estado que haya en la localidad reunidos en Junta, debiendo ser ésta presidida por el de mayor categoría, y extenderse acta de la sesión en un libro que se ten-



drá para este objeto, remitiendo además inmediatamente certificado de ella á la Dirección general de lo Contencioso.

Art. 72. Si en el curso y tramitación de los procedimientos hubiese que utilizar datos ó documentos que obren en las oficinas del Estado, el Abogado podrá reclamarlos directamente de los Jefes de las mismas sin necesidad de suplicatorio.

Art. 73. Dentro de los tres días siguientes al en que el Abogado del Estado tenga conocimiento de la instrucción de una causa que interese á la Hacienda, dará cuenta de ella á la Dirección, expresando en la comunicación que dirija al efecto, con toda claridad y exactitud, el delito; su cuantía, si pudiese apreciarse desde luego; los nombres y profesión de los reos, si fuesen conocidos; su estado de prisión ó libertad, y todas las demás circunstancias que sirvan para esclarecer el hecho que haya motivado la instrucción de las primeras diligencias.

En casos de gran urgencia ó gravedad, el Abogado del Estado deberá dar cuenta directa é inmediatamente á la Dirección de la instruc-

ción del proceso y de los hechos conocidos en que se funde.

Art. 74. En las causas por defraudación y contrabando, además de cumplir lo dispuesto en el artículo anterior, se observarán especialmente las reglas siguientes:

1.<sup>a</sup> El Abogado que concurra á la Junta administrativa de que trata el art. 57 del Real decreto de 20 de junio de 1852, cuidará principalmente de que las declaraciones que se hagan no perjudiquen los intereses de la Hacienda, interponiendo en su caso el recurso que proceda contra los fallos.

2.<sup>a</sup> También cuidará de que en los procesos se haga constar de una manera legal la reincidencia ó no reincidencia de los acusados.

3.<sup>a</sup> Remitirá á la Dirección copia testimonial de los autos de sobreseimiento que se dicten, conforme á lo dispuesto en el art. 83 del decreto citado.

4.<sup>a</sup> Consultará con la Dirección de lo Contencioso antes de hacer uso de la facultad que le concede el art. 86 del mismo Real decreto para interponer el recurso de casación ó el de responsabilidad, antes de consentir cualquier

sentencia en causa por contrabando ó defraudación cuya cuantía exceda de 5.000 pesetas.

5.<sup>a</sup> Cuidará de que en las sentencias que recaigan en las causas por defraudación no se hagan declaraciones sobre la procedencia ó improcedencia de la multa impuesta administrativamente.

Art. 75. Los Abogados del Estado no pondrán ni consentirán inhibición alguna en pleitos ó causa de interés del Estado, sin hallarse autorizados debidamente por la Dirección general de lo Contencioso.

Tampoco podrán abandonar acción alguna entablada á nombre del mismo, ni allanarse á las demandas que contra él se dirijan sin estar autorizados por una Real orden.

Art. 76. Los Abogados del Estado encargados de la representación del mismo ante los Tribunales, llevarán los libros-registros siguientes:

Los que sirvan ante las Audiencias territoriales: uno para las consultas y comunicaciones que los demás que sirvan ante otros Tribunales del territorio remitan por su conducto á la Dirección general de lo Contencioso, cuidando



de anotar en él, en los lugares respectivos, las contestaciones de aquel Centro.

Otro que contenga una reseña de cada uno de los pleitos de interés del Estado que se sustancien ante la Audiencia, y

Otro, en fin, con el mismo objeto respecto de las causas que interesen también al Estado.

Los Abogados del Estado que sirvan ante las Audiencias de lo criminal llevarán los dos libros citados últimamente, cuidando de anotar entre los antecedentes respectivos á cada pleito ó causa las comunicaciones que con motivo de ellos remitan á la Dirección de lo Contencioso, bien por conducto del Abogado de la Audiencia del territorio, ya directamente.

El Abogado que sirva cerca del Tribunal Supremo llevará también estos dos libros.

Art. 77. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los Abogados del Estado cuidarán de llevar un extracto de los documentos y escritos unidos á cada pleito ó causa y de la tramitación que lleve, archivando el extracto luego que termine ejecutoriamente el asunto. De los extractos archivados se llevará otro

libro-registro dividido en dos partes, una para los pleitos y otra para las causas.

Art. 78. Todos los Abogados del Estado que sirvan ante los Tribunales ordinarios remitirán á la Dirección de lo Contencioso dos estados-resúmenes, uno de pleitos y otro de causas, cada seis meses, dentro de los de julio y enero de cada año, clasificando los asuntos en los tres grupos de *pendientes* al empezar el semestre, *incoados* y *terminados* durante él, y expresando respecto de cada pleito ó causa el nombre de los litigantes ó reos, el objeto del procedimiento, la fecha de la incoación, su estado al finalizar el semestre respecto de los pendientes y de los incoados durante él, y en cuanto á los terminados la fecha en que esto haya sucedido.

Terminados, se considerarán para los efectos de dichos estados-resúmenes los que lo hayan sido en el Tribunal respectivo.

Mas con objeto de conocer los que han terminado definitivamente, los Abogados del Estado cuidarán de poner á continuación del estado una relación de los que han causado ejecutoria en el Tribunal durante el semestre.

Art. 79. Respecto de la Asesoría en las oficinas provinciales de Hacienda, los Abogados del Estado cuidarán de llevar con puntualidad y exactitud un libro-registro en que se anote la fecha en que reciban el expediente, su objeto, el extracto del dictamen emitido y la fecha en que se entreguen al Jefe que haya pedido aquél.

Art. 80. En cuanto á las funciones de los Abogados respecto del impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes, se ajustarán á lo dispuesto en la legislación especial del mismo.

Art. 81. Quedan derogadas todas las disposiciones orgánicas de la Dirección general de lo Contencioso del Estado y del Cuerpo de Abogados del Estado dictadas anteriormente.

Madrid 5 de mayo de 1886.—Aprobado por S. M.

CAMACHO.





# ESCALAFÓN

DEL

## CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO.

---

### Un Jefe de Administración de primera clase.

- 1 Sr. D. Miguel Monares é Insa.

### Dos Jefes de Administración de segunda clase.

- 1 Sr. D. José María Carrascosa y Carrión.
- 2 Sr. D. Teodoro Pérez de Camino.

### Tres Jefes de Administración de tercera clase.

- 1 Sr. D. Francisco Javier Gozalo y Nieva.
- 2 Sr. D. Antonio Fidalgo de Sánchez Ocaña.
- 3 Sr. D. Modesto Llorens y Torres.

### Cinco Jefes de Administración de cuarta clase.

- » Sr. D. Casimiro Pío Garbayo de Bofarull  
(*excedente*).
- 1 Sr. D. Vicente Belliure y Viciano.
- 2 Sr. D. Mariano Sánchez Ocaña y García.
- 3 Sr. D. José María Trujillo y Bestoso.
- 4 Sr. D. Teobaldo Fajarnés y Castells.
- 5 Sr. D. Federico Arriaga y del Arco.

### **Diez Jefes de Negociado de primera clase.**

- 1 D. Arturo Alonso de Polo.
- 2 Sr. D. José de la Concha y Alcalde.
- 3 D. Ramón Guerrero de Luna.
- 4 Sr. D. Pedro Calvo y Martínez.
- 5 Sr. D. Pedro Miranda y de Cárcer.
- 6 D. Rafael Guerau y García.
- 7 D. Emilio Zurita y Méndez.
- 8 D. Antonio Díez y García.
- 9 Sr. D. Julián Agut y Fernández.
- 10 D. Felipe Cardiel y Velasco.

### **Quince Jefes de Negociado de segunda clase.**

- 1 D. Agustín Fernández Ramos.
- 2 D. Valero de Grassa y Martín.
- 3 D. Benigno de Luna y Gómez.
- 4 D. Francisco de Paula Serrano Mirasol.
- 5 D. Gregorio Guasp y Vicens.
- 6 D. Alberto Laverón y Vasconi.
- 7 D. Julio Redondo y Guío.
- 8 D. Andrés Cotrina y Vallecillo.
- 9 D. Eleuterio Delgado y Martín.
- 10 D. Salvador Gómez Alonso.
- 11 D. José Ramón Martínez Agulló.
- 12 D. Isidro Torres Muñoz.
- 13 D. Pedro López Perona.
- 14 D. Federico Marín y López.
- 15 D. Carlos Vergara y Cailleaux.

### **Veinticuatro Jefes de Negociado de tercera clase.**

- 1 D. Luis Parejo y Chasserot.
- 2 D. Laureano Padilla y Muñoz.
- 3 D. Luis María Miquel é Ibargüen.
- 4 D. Vicente Guillén de la Torre.



- 5 D. Severiano Buyel de la Cueva.
- 6 D. Manuel Gómez Madrid.
- 7 D. Primitivo Peón y González.
- 8 D. Luis Tavira y Santos.
- 9 D. Pedro García Fernández.
- 10 D. Eloy Sánchez Jijón.
- 11 D. Honorio Selva y Hermosino.
- 12 D. Joaquín Vivas Salazar.
- 13 D. José Casado y Macho.
- 14 D. Atanasio María Quintano y Díaz de Or-  
tega.
- 15 D. Eduardo Gómez Caminero.
- 16 D. José Ortega y Sáenz-Diente.
- 17 D. Mariano Gozalo y Nieva.
- 18 D. Ramón Adell y Vidal.
- 19 D. José María Quevedo y Rodríguez.
- 20 D. Antonio Cobos y Rodríguez.
- 21 D. José María Díaz Cassou.
- 22 D. Domingo Colmenares y Tarabra.
- 23 D. Mariano González Nieva.
- 24

### **Treinta y dos Oficiales de primera clase.**

- » D. Diego Angosto y Jaén (*excedente*).
- » D. Rafael Soriano y Bernar (*excedente*).
- 1 D. Benito Cervigón y Lerín.
- 2 D. Clemente Renau y López.
- 3 D. Santiago Jalón y Campelo.
- 4 D. Francisco Sevilla y Román.
- 5 D. Juan Lassaleta y Camps.
- 6 D. Antonio Tiedra y Gámez.
- 7 D. Julián González García Valladolid.
- 8 D. Ramiro Alonso Padierna de Villapa-  
dierna.
- 9 D. Francisco Zurita y Méndez.
- 10 D. Jesualdo Morcillo y Valero.
- 11 D. Roque Correa de la Bodega.

- 12 D. José Nicasio Calvente y Merlo.
- 13 D. Heriberto Sánchez Guillén.
- 14 D. José María Martín y Martín.
- 15 D. Enrique Ochando y López.
- 16 D. José María Ros y Biosca.
- 17 D. Ignacio María Pintado y Llorca.
- 18 D. Luis Barrenechea y Montegui.
- 19 D. Manuel Fernández Ferrero.
- 20 D. Martín Arroyo y Salcedo.
- 21 D. Manuel de Rueda y Rodríguez.
- 22 D. Francisco del Río y Balsera.
- 23 D. Luis Cánovas y Martínez.
- 24 D. Inocencio Martínez Carricas.
- 25 D. Luis Estremera y Sancho.
- 26 D. Juan Antonio Peña y Martín Asensio.
- 27 D. Ramón Fernández y Cid Valencia.
- 28 D. Miguel Pons y Pons.
- 29 D. Federico López González.
- 30 D. Ramón Tojo y Pérez.
- 31 D. Felipe Bustos y Orozco.
- 32

**Treinta y seis Oficiales de segunda clase.**

- » D. Antonio Vega y Castañeda (*excedente*).
- » D. Francisco Muñoz Rodríguez (*excedente*).
- » D. Lorenzo Moret y Remisa (*excedente*).
- » D. Modesto Conde Caballero (*excedente*).

## ÍNDICE.

	Páginas.
Dedicatoria.....	V
D. Juan Francisco Camacho.....	VII
Decreto-ley de 26 de Julio de 1874 suprimiendo la Sección de Letrados.....	17
Decreto-ley de 26 de agosto de 1874, organizando la Asesoría.....	27
Real decreto de 10 de marzo de 1881, creando el Cuerpo de Abogados del Estado.....	47
Compilación de las disposiciones vigentes relativas á los servicios que presta la Dirección general de lo Contencioso, aprobada en Real orden de 16 de abril de 1881.....	65
Reglamento del Cuerpo de Abogados del Estado, aprobado por Real orden de 10 de mayo de 1881.	83
Real orden de 6 de mayo de 1882, exceptuando al Cuerpo de Abogados del Estado, en cuanto á los ascensos, de la ley de Presupuestos de 1876.....	95
Real decreto de 16 de marzo de 1886, organizando el servicio contencioso y el Cuerpo de Abogados del Estado.....	103
Real decreto de 23 de marzo de 1886, dictando re- glas para el procedimiento en la vía gubernativa como trámite á la judicial.....	125



Real decreto de 16 de marzo de 1886, encomendando á los Abogados del Estado la liquidación del impuesto de Derechos reales.....	137
Real orden de igual fecha, respecto al cumplimiento del anterior.....	147
Real decreto de igual fecha, concediendo un suplemento de crédito para este objeto.....	155
Reglamento orgánico de la Dirección general y Cuerpo de Abogados, aprobado por Real orden de 5 de mayo de 1886.....	157
Escalafón del Cuerpo en junio de 1886 .....	205

## ERRATAS.

<u>Página.</u>	<u>Línea.</u>	<u>Dice.</u>	<u>Léase.</u>
170	12	Contencioso	Consultivo
177	17	art. 5.º	art. 31

















1378



CAMACHO

REFORMAS

JURÍDICAS

DE

HACIENDA

7583